

***UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA***

***LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE REGIÓN DEL MACIZO COLOMBIANO DESDE LA  
ORGANIZACIÓN SOCIAL: CASO COMITE DE INTEGRACIÓN DEL MACIZO  
COLOMBIANO CIMA, SAN PABLO, NARIÑO 1990-2011***

***FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS***

***ÁREA: CONFLÍCTO Y DINÁMICA SOCIAL***

***JULIANA CUENCA GUERRA***

***TESIS***

***BOGOTÁ D.C 2018***

***SOCIOLOGÍA***

## TABLA DE CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
Aspectos Teóricos y Metodológicos	7
<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>20</b>
1. El Macizo Colombiano: Un escenario biofísico y cultural. Una estrategia de apropiación territorial por el estado y el capital .	20
1.1 Entre sus grandes montañas y abundantes aguas	20
1.1.2 El Macizo, la mayor fuente hídrica del país	20
1.1.3 La diversidad cultural como eje transversal del Macizo Colombiano	22
1.1.4 El Macizo, territorios agrícolas y mineros	23
1.2 Acciones de apropiación del Capital y Estado en la región	27
1.2.1 Entre la ausencia estatal y la apropiación de la tierra.	29
1.3. De la apropiación de la tierra a la del territorio: Estrategia militar y social de control territorial	33
1.3.1 Estrategia militar de control territorial en el Macizo Colombiano	35
1.4 “De lo militar a lo social”	39
1.5 “La apuesta por el desarrollo territorial: la verdadera intención del control militar y la recuperación social” La minería como uno de los principales atractivos de la región.	45
<b>CAPITULO II</b>	<b>53</b>
2. Movimiento, territorio y región : La región un proyecto político, el territorio el proyecto de vida de las comunidades.”(Arturo Escobar, 2010)	53
2.1 Antecedentes y surgimiento del Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA	55
2.1.1 La acción colectiva como elemento de lucha social	55
2.1.1.2 La masacre de los Uvos	58
2.1.1.3 La marcha del 99	59
2.2 Estrategia organizativa: tuvo más fuerza de lo esperado, el territorio eje central de lucha.	61
2.2 En tiempos de seguridad democrática: Control territorial vs arraigo territorial	69
2.2.1 Organizaciones y movimientos sociales del Cauca y Norte de Nariño, las expresiones comunitarias frente a las necesidades estatales. El CIMA Y otras expresiones organizativas en la Región.	74
2.3 Participación, incidencia y autonomía en relación a las estrategias del Estado	79

2.3.1 Los laboratorios de paz: una estrategia, oportunidad o amenaza de las organizaciones?	79
2.3 Territorio y poder local desde la organización campesina caso: " La coordinadora de mujeres y familias campesinas san pableñas"	85
2.3.1 Escuelas agroambientales: "nuestra estrategia de permanencia y organización fue la formación"	89
<b>CAPITULO III</b>	<b>96</b>
 3.ANÁLISIS SOBRE EL CIMA Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO Y DE REGIÓN	 96
3.1 La construcción social según Boisier a la luz del contexto Colombiano: La ilusión del reconocimiento de la región como un avance al ordenamiento de los territorios	96
3.2 Sobre el CIMA y su carácter socioterritorial	100
3.2.1 El territorio un elemento central, el CIMA un movimiento socioterritorial	100
CONCLUSIONES	110
BIBLIOGRAFIA	116

## **TABLA DE MAPAS**

<b>TABLA DE MAPAS</b>	<b>3</b>
MAPA 2. Distribución de cultivos ilícitos e intensidad del conflicto en el Macizo colombiano	38
Mapa3 Laboratorios de paz y Programas de Desarrollo Regional y Paz.	43
Mapa 4. Ejes de integración y desarrollo potenciales para la conformación de Áreas de Desarrollo Territorial	49
Mapa 5. Zonas Protegidas, Títulos y Solicitudes Mineras	51
Mapa 6 . Comunidades que participaron en movilizaciones 1991.1999 en el Macizo Colombiano	64
Mapa 7 Departamento del Cauca, Procesos campesinos	76
Mapa 8.Presencia y Territorialidad de los Actores Sociales Etnico-Culturales	78
Mapa 9 Comunidades en donde se realizaron grupos focales y participación de actividades de la organización.	86
Mapa 10. Contexto Integrado de sociocultural, ambiental y económico del departamento del Cauca	108

## INTRODUCCIÓN

### **Antecedentes y problema**

Colombia tiene una larga trayectoria de acciones y formas de resistencia que expresan la inconformidad social y política de los sectores populares. Sin embargo, algunos estudios sobre el tema revelan que solo hasta la década de los setenta, surge la categoría de movimiento social para hablar de estas expresiones. De acuerdo con Zibechi (2010, p79) en esta década el panorama político y social del mundo popular comenzó a teñirse con nuevos colores: campesinos e indios crearon organizaciones autónomas de los estados, los partidos y las iglesias. Estos actores conformaron una generación de organización posterior a las sindicales basada en nuevos discursos y modos de hacer cercanos a la acción directa.

El estudio de estos actores y sus luchas desde la investigación social, han dejado un legado importante en la teoría de los movimientos sociales, siendo relevante observar en la dinámica de estas luchas la incorporación de elementos que trascienden hacia perspectivas territoriales, interculturales ó de género, que vienen siendo denominados la "nueva generación de movimientos sociales" o "nuevos movimientos sociales". (Zibechi, 2010.).

Una de las expresiones de esta nueva generación ha emergido en el marco de una profunda crisis rural, las comunidades campesinas vienen expresando su inconformidad a través de la movilización y con ello han logrado posicionarse como fuerza política capaz de construir y negociar propuestas con el gobierno.

En este sentido, esta investigación tomó como referencia a uno de los movimientos regionales significativos en Colombia a partir de la década de los años 80's, El Comité de

Integración del Macizo Colombiano CIMA, que surge de las demandas de algunas comunidades campesinas del sur del departamento del Cauca ante la histórica ausencia del Estado, demandas que se transformaron en eje articulador con otras comunidades del norte de Nariño. Este proceso de articulación e integración trascendió hacia la construcción y defensa de una propuesta política, económica y social basada en la identidad y arraigo en el territorio del Macizo Colombiano.

La importancia que tiene el territorio como principal eje de lucha que surge en medio de la dinámica de configuración de este movimiento, en principio caracterizado por acciones concretas de denuncia, sitúa el primer eje de análisis de esta investigación en un campo de debate sobre los nuevos elementos y modos de acción de los movimientos sociales basados en la relación entre movimiento social y territorio.

Sin embargo, esta dinámica no se desarrolla de manera aislada. Así como se configuran las comunidades en un sujeto o actor colectivo, existen otros actores como el Estado y el capital en este territorio con los cuales ocurren relaciones que pueden llegar a ser armónicas, contradictorias y conflictivas. Esta relación y su dinámica es el segundo elemento de análisis en el que se ubicó esta investigación.

## **Objetivos**

A partir de estos dos elementos, se planteó como objetivo de investigación, el análisis de la propuesta del CIMA en la construcción social del territorio, entendido por este movimiento como la región del Macizo Colombiano, y su relación con las estrategias territoriales del Estado y el Capital entre 1980 y 2011. Este tipo de análisis implica, según Escobar ( 2010) colocar en conversación procesos basados-en-lugar y regionales con las dinámicas

cambiantes del capital y la cultura en muchos niveles. Para abordar este gran objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el surgimiento y desarrollo del CIMA, desde el contexto inicial, sus transformaciones y su situación actual
- Identificar la estructura organizativa del CIMA y su propuesta de construcción social de región
- Caracterizar cómo se expresa la construcción de región del CIMA, en el municipio de SanPablo, Nariño.
- Analizar las relaciones y tensiones entre el Estado y el CIMA, en el proceso de construcción regional

El camino recorrido en términos de lo teórico, lo práctico y el análisis, los resultados de esta investigación se expresan en tres capítulos. El primero presenta al Macizo Colombiano a partir de la definición histórica y política, elaborada desde su composición biofísica, social, cultural, económica, para dar paso al análisis de los elementos que allí, constituyen la estrategia de apropiación del territorio por parte del estado y el capital en su proyecto de región.

El segundo capítulo presenta los resultados sobre la caracterización del proceso de configuración del CIMA como movimiento social y su configuración como actor constructor de territorios desde sus formas y estructuras organizativas y su proyecto político regional. A la vez este capítulo está compuesto por resultados alrededor del trabajo con la Asociación de mujeres y familias campesinas San Pableñas, desde las formas y acciones mantenedoras del proceso organizativo en sus territorios con sus familias y comunidades.

Finalmente, el tercer capítulo presenta el análisis a la luz de las contribuciones teóricas ya esbozadas para el caso concreto del CIMA como movimiento socioterritorial, constructor de

territorios y como un dinamizador creado de estrategias de apropiación territorial basadas en el arraigo en el marco del proyecto de construcción social de región

### **Aspectos Teóricos y Metodológicos**

En este contexto en donde no solo el movimiento social sino también el Estado y el Capital construyen la región, fue necesario para esta investigación abordar el análisis desde las categorías teóricas de Región y Territorio para identificar los elementos que componen cada proyecto de región y comprender la relación con el territorio y su construcción como un proceso social.

### **Sobre la Construcción social de región**

De acuerdo con Boisier, (1988) pensar la región como una construcción, implica dos aspectos fundamentales, por un lado debe existir una construcción política y por el otro una social. El primero, está relacionado con el establecimiento político y administrativo de la región. El segundo, que se refiere a la construcción social de región, significa potenciar la capacidad de auto organización, donde exista una sociedad cohesionada, consciente de la identidad Sociedad-Región, la cual tenga la capacidad de movilizarse tras proyectos políticos colectivos, es decir convertirse en sujeto de su propio desarrollo. Boisier afirma que deben darse tres elementos en un proceso de construcción de región:

¥ Los procesos de descentralización político-territorial, esto significa dotar a las regiones con órganos que configuren una estructura política y administrativa autónoma, de manera tal que las regiones pasen a tener categoría de organizaciones políticas territoriales con personalidad jurídica de derecho público, que gocen de autonomía.

¥ La existencia de un receptor adecuado frente al poder que se le asignará a la región, este no puede ser otro que la misma sociedad regional organizada, por lo tanto es necesario que

se construya socialmente una región, esta organización social debe tener la capacidad de movilizarse tras proyectos políticos colectivos.

¥ Alto grado de concertación y participación de los agentes de desarrollo que actúan en la región, sus formas y mecanismos de articulación. La articulación de los agentes generalmente se da por marcos referentes culturales en común o por un proyecto político regional.

Todo proyecto político regional presupone la existencia de una sociedad regional y esta a la vez es aquella que debe ser socialmente construida. Boisier concluye que la construcción social regional y la especificación del proyecto político son dos cosas que deben darse simultáneamente y deben ser interactivos. Estos planteamientos aportaron a esta investigación para el análisis de las condiciones político administrativas en relación a la figura de región en Colombia y la propuesta del CIMA en relación a su proyecto regional y su capacidad de crear una sociedad regional organizada.

Uno de los proyectos fundamentales y la razón de ser del trabajo colectivo del CIMA es la construcción social de región, de allí pues que sus luchas por el territorio se articulan de la necesidad como comunidad de construir una región que articule sus intereses, saberes y diversidad cultural, en torno a una serie de demandas sociales pero también a la búsqueda de un proyecto de vida en aras de la transformación local; dicho proyecto debe ser entendido desde dos elementos esenciales; la necesidad de transformación de esos territorios en una región en la que puedan confluir sus riquezas naturales, económicas, y las necesidades propias de la misma comunidad para constituirse como región en términos de unas demandas sociales con características similares en cada territorio y de la unión de sus luchas. En este sentido la relación entre región-territorio es esencial para comprender la propuesta que denominan Construcción Social de Región.



## **La Región: territorio, territorialidad , territorialización**

Hablar de espacio, lugar y territorio presupone hablar de tres conceptos que se interrelacionan entre sí; los dos primeros se proponen como conceptos fundamentales que se transforman en territorios de acuerdo a las relaciones que se entretienen entre los elementos que los componen; “la tierra es por excelencia el espacio en el que todos los grupos sociales desarrollan sus actividades cotidianas y expanden sus redes sociales. Cuando el espacio es apropiado y delimitado socialmente, surge el territorio como el lugar donde las ordenaciones geográficas y humanas se articulan. En otras palabras, el lugar donde se encuentra la gente con otra gente y con las cosas del espacio” (Agnew, 2005; XIV tomado de Posada, 2011; p. 279).

Es decir que es a partir de las relaciones que se entretienen entre los actores presentes en un espacio y lugar determinado, que se construye territorio; dichos espacios son considerados en un principio espacios geográficos, relacionados con su ubicación como también con sus características biofísicas que entran a ser fundamentales en las formas de apropiación y construcción de territorio; El espacio geográfico contiene todos los tipos de espacios sociales producidos por las relaciones entre las personas, y entre estas y la naturaleza, que transforman el espacio geográfico modificando el paisaje, y construyendo territorios, regiones y lugares (Mancano 2010).

A su vez los espacios políticos, económicos y culturales son multidimensionales y complementivos del espacio geográfico; es decir entender lo geográfico no solo en relación a la superficie ocupada y que por tanto es delimitada y definida, sino que tiene vida y existe desde la articulación de los demás factores sociales, políticos y económicos. Sus características y

particularidades son creadas a partir de las intencionalidades frente a dichos espacios, creadas por las relaciones sociales presentes. La relación social en su intencionalidad crea una determinada lectura del espacio, que conforme al campo de fuerzas en disputa puede ser dominante o no, y así se crean diferentes lecturas socio espaciales. De esta forma es producido un espacio geográfico y/o social específico: el territorio el cual es el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder (Mancano 2010).

Hablar de territorio en el marco de una dinámica nacional y regional implica varias consideraciones. Todas las relaciones sociales se producen en un territorio específico, es un espacio de dominio por parte de un actor o varios actores, es una construcción social y el conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción, en donde la actividad espacial de los actores es diferenciada, por lo tanto su capacidad de crear y apropiar territorio es desigual, el territorio es cambiante y mutable, por eso requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial (Montañez, Gustavo y Delgado, Ovidio, 1998. P;112). Se entiende el proceso de formación del territorio a partir de la definición de su área, sus recursos, y las relaciones que lo transforman, en donde la característica fundamental es la relación social que lo produce. Así, el territorio es espacio de libertad y dominación, de expropiación y resistencia. (Mancano 2010; p 3).

El territorio como espacio o lugar, presupone diferentes formas de apropiación del mismo por parte de los diferentes actores que hacen presencia en él, generándose en ocasiones posiciones diferentes en cuanto a su uso y ocupación, posiciones permeadas por intereses de factores individuales y colectivos, que generan diferentes tipos de conflictos y tensiones al interior del territorio; dichas formas de apropiación son entendidas como territorialidades; En palabras de

Lobato ( 1996; p 252) se define la territorialidad como el conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un territorio por un determinado agente social o estado, los diferentes grupos sociales y las empresas.

Por su parte Sack ( 1983; p.55) define la territorialidad como el intento de afectar, influenciar o controlar acciones, o acceso, por medio de la imposición o intento de control sobre un área geográfica específica; la territorialidad es esencialmente una forma de dominación, proveyendo además” las herramientas para reedificar el poder”. Hablar de territorialidad es comprender los mecanismos y formas de control, manejo, uso, planificación de la relación entre sociedad-naturaleza (Mancano, 2010;p 5).

A su vez la territorialidad permite comprender las relaciones generadas en el territorio que lo moldean, transforman, apropian y lo caracterizan, allí cabrían todos los procesos que se entretajan en su interior, los procesos organizativos para la defensa, el conocimiento local, de allí pues que el territorio sea pensado en articulación con otros elementos que lo permean tales como la cultura y la etnicidad: “ así el conocimiento que tenemos nosotros sobre la biodiversidad es un conocimiento cultural que requiere el tratamiento particular (Escobar 2010). Lo anterior permite a su vez esbozar la importancia de la construcción de identidad, que en últimas termina conjugando una serie de características particulares en un territorio pero también articulada con las formas de su defensa y apropiación.

Por otro lado los procesos de formación del territorio a partir de la definición de su área, sus recursos y, fundamentalmente, las relaciones sociales que lo producen y transforman son entendidos como territorialización (Mançano, 2010; p.5). Estos procesos de territorialización, son entendidos como la expresión de procesos organizativos y de vida que se expanden en el

territorio, construyendo territorialidades como lo son relaciones sociales mantenedoras de los territorios, o más específicamente, acciones propias o apropiadas. Si bien la construcción de territorios es un proceso complejo, para el estudio del CIMA se abordará desde el carácter organizativo y su relación con los procesos de territorialización de las acciones, componentes, elementos que definen la territorialidad en el marco de sus dinámica organizativa y su proyecto de la región.

Teniendo en cuenta los planteamientos expuestos se aborda para el caso en estudio, la relación entre territorio y región en el marco de los movimientos sociales a partir de dos perspectivas que los sustentan: el territorio encarna el proyecto de vida de las comunidades y el territorio-región articula el proyecto de vida de la comunidad con el proyecto político del movimiento social. “sin un proyecto en construcción de región o en palabras de Escobar “territorio – región”, las comunidades serían aún más vulnerables a ser reconstituidas por el capital y el estado; el estado tiene su propio proyecto de construcción de la región en que el territorio sería un eslabón en una estrategia de desarrollo al estilo andino para todo el occidente colombiano. (Escobar, 2010 p. 77)

En este sentido al comprender la construcción social de región como una relación directa entre la construcción de territorio y la región como un proyecto político de un movimiento social se hace necesario abordar esta relación tripartita entre región- territorio- movimiento social para comprender dicho proyecto y sus formas de expresarse en los diferentes territorios.

### ***Movimientos Socio Territoriales***

Las dinámicas de los movimientos sociales en las últimas décadas han exigido nuevas lecturas y nuevas contribuciones teóricas, trascendiendo del análisis de sus acciones y del por qué perduran

o desaparecen. Una de las contribuciones teóricas acerca de los movimientos sobre el análisis de la relación entre movimiento y territorio abordada en esta investigación y fuente para el análisis es la que hace Bernardo Mancano (2010) a partir de las categorías de movimiento socioterritorial y movimientos socioespaciales desde la experiencia del Movimiento Sin Tierra en Brasil.

El aporte se puede definir a partir de tres elementos, el primero es la caracterización del movimiento socioterritorial, como un tipo de movimiento, diferenciado de otros porque tienen una relación estrecha con el territorio. El segundo es la capacidad de estos movimientos de dinamizar procesos de territorialización y acciones que la mantengan definiendo la territorialidad, dando paso y surgimiento a nuevos territorios. El tercer elemento es la lucha por este territorio y su control por parte de los movimientos lo que los pone en escenarios de disputas con otros actores presentes en el territorio.

Mancano (2010) caracteriza los movimientos socioterritoriales como aquellos con una configuración con base territorial, refiriéndose a aquellos movimientos que se cimientan en el trabajo de comunidades organizadas en sus territorios, en donde su principal lucha es por su espacio vital, que trasciende de hacer denuncias puntuales y reivindicativas frente a la ausencia del Estado, para convertirse en un actor o sujeto arraigado al territorio que a la vez lo transforma.

A su vez Mancano (2010) plantea que para todos los movimientos el espacio es esencial; “es evidente que no existen movimientos sociales sin espacio. Todos los movimientos producen algún tipo de espacio, pero no todos los movimientos tienen al territorio como objetivo. De allí surge la diferencia entre los movimientos socioespaciales y socioterritoriales en tanto que para este último el territorio es su elemento más importante; no tienen al territorio como objeto sino que en él radica su existencia (Mancano, 2010). Estos planteamientos permiten en el caso de

CIMA, analizar qué lo configura como socioterritorial, y ubicarlo como un actor con capacidad de configurar propuestas y proyectos políticos de carácter territorial, basados en la apropiación y control de los territorios por parte de las comunidades que hacen parte del movimiento, desplegando estrategias para disputarlos con otros actores presentes, como el Estado y el Capital que también tienen un proyecto de región.

### ***Estrategias en disputa por la apropiación territorial***

El estado, el capital y el desarrollo estratifican y jerarquizan, transforman la naturaleza del trabajo, la función de la tierra y el papel de dinero (Polanyi, 1957). El estado, el capital y el desarrollo transforman las identidades de género y las étnicas, a menudo generando formas de violencia sin precedentes. Ellos son los aparatos de captura que producen una significativa reconversión de territorios locales, economías y culturas a imagen de la modernidad (Escobar, año2010 p. 93).

### **La región-territorio desde el movimiento social y sus formas subalternas de localización**

El Macizo colombiano se puede definir desde su composición biofísica, su división político administrativa, desde la perspectiva del gobierno, según la capacidad de convertir sus potencialidades naturales en una plataforma de desarrollo económico para el país. Sin embargo, como lo argumenta Arturo Escobar en su texto Territorios en Diferencia, existen formas subalternas de localización, las configuran los habitantes que interactúan en su cotidianidad con los recursos y condiciones biofísicas configurando relaciones específicas, entre sus costumbres y su entorno. El trabajo que realiza Escobar en el pacífico colombiano evidencia, cómo desde la poblaciones y sus formas de organización pueden construirse nociones y configuraciones del

espacio, diferentes y alternas frente a una visión estática de las condiciones naturales de un lugar, y frente a la que hace el Estado y el capital. Procesos que finalmente se pueden dividir en dos grandes estrategias de localización, por parte del capital, el estado y la tecnociencia. Por otro lado las subalternas por parte de los movimientos sociales y comunidades.

### **Las estrategias de localización por parte del capital, el estado y la tecnociencia.**

De acuerdo con Giddens (1990) y Virilio (1999) "El capital, el estado y la tecnociencia se engarzan en una política de escala que intenta cambiar la producción de la localidad en su favor. No obstante, en tanto que estas estrategias no son basadas-en-lugar (aun cuando son localmente articuladas), inevitablemente inducen un efecto de deslocalización con respecto a los lugares. Tal efecto está de acuerdo con la absoluta confianza de la modernidad de subsumir el lugar al espacio y la desterritorialización de la vida social y ecológica" ( citados en Escobar, 2010; p 49)

Estas estrategias son de dos tipos: las estrategias basadas-en-lugar que dependen de la ligazón al territorio y la cultura, y las estrategias de red que permiten a los movimientos sociales actuar una política de escala desde abajo. Esto implica la articulación con las redes de la biodiversidad, de un lado, y con otros actores y luchas basadas-en-lugar, del otro. De esta manera, los movimientos sociales desarrollan una práctica política que puede describirse como basada-en-lugar pero transnacionalizada (Harcourt y Escobar 2007, Escobar 1999b, 2005c).

A su vez cada uno de los actores presentes en el territorio y los intereses que confluyen en el mismo generan una serie de tensiones y disputas materializadas en los procesos que se entretajan en el territorio; de allí pues que los factores sociales, culturales y políticos del mismo e incluso su desarrollo sea un factor estratégico para las estrategias de localización.

Al contrastar las diferentes relaciones que se tejen desde estas dos estrategias de localización para construir territorios en función de intereses e intencionalidades diferentes, pero sobre todo contradictorias, se abren perspectivas de comprensión tanto del alcance actual del proceso que impulsa el CIMA, así como de sus proyecciones en lo que denominan construcción de región que puede pensarse en términos de una estrategia de localización subalterna, que como se desarrollará más adelante brinda las bases de un proyecto político por el que caminan y a través del cual construyen los movimientos sociales en defensa del territorio; “sin un proyecto en construcción de región o en palabras de escobar “territorio – región”, las comunidades serían aún más vulnerables a ser reconstituidas por el capital y el estado; el estado tiene su propio proyecto de construcción de la región en que el territorio sería un eslabón en una estrategia de desarrollo al estilo. (Escobar, 2010 p. 77) a su vez dicho proyecto de construcción de región es una de las formas que articula la capacidad de las comunidades para resistir, desde la defensa del lugar y la cultura, propiciando la autonomía de la gente sobre sus territorios.

La defensa del territorio implica la defensa de un intrincado patrón de relaciones sociales y construcciones culturales basadas-en-lugar; también implica la creación de un nuevo sentido de pertenencia unido a la construcción política de un proyecto de vida colectivo. En este sentido las localizaciones subalternas, que se construyen desde los habitantes, permite construir elementos de análisis para abordar el caso específico de la construcción de región propuesta por el Comité de Integración del Macizo Colombiano- CIMA, con el fin de poder caracterizar, cómo desde un movimiento social se puede construir territorio -región.

En este sentido, el movimiento puede ser interpretado en términos de la defensa de prácticas de diferencia cultural, económica y ecológica. Más generalmente, puede decirse que la meta de muchas luchas actuales es la defensa de concepciones y prácticas basadas en-lugar más



precisamente, una defensa de construcciones particulares de lugar, incluso sus reorganizaciones que podrían juzgarse necesarias según las luchas de dentro del mismo. La política de lugar puede verse como una forma emergente de política, un inusitado imaginario político en el cual se afirma una lógica de diferencia y posibilidad que construye sobre la multiplicidad de acciones en el plano de la vida cotidiana. ( Escobar, p:79)

El abordaje metodológico de esta investigación esta planteado bajo la premisa de que existen en la región al menos tres actores presentes en el territorio, que despliegan acciones y estrategias para configurar región, expuestas y analizadas desde las acciones de apropiación del territorio por parte de estos. Dichas acciones giran en torno, por una parte, a lo que se denomina Estrategia de Apropiación del Territorio por parte del Estado y el Capital en el Macizo Colombiano y por otra, a la Estrategia de Apropiación del territorio por parte del CIMA. De manera transversal se analizan las tensiones y relaciones que se tejen entre estos actores, que reflejan las dinámicas y acciones de los actores en disputa por el territorio.

El presente trabajo analiza cada una de las categorías y conceptos anteriormente mencionados, en tanto pensar en el Macizo Colombiano como región y en el CIMA como un movimiento social constructor de territorio; conllevo a analizar las disputas y tensiones que se entretajan en el mismo y cómo la comunidad desde el movimiento social ha creado estrategias de resistencia, adaptación, y un proyecto político. La defensa del territorio implica la defensa de un intrincado patrón de relaciones sociales y construcciones culturales basadas- en- lugar; también implica la creación de un nuevo sentido de pertenencia unido a la construcción política de un proyecto de vida colectivo. La lucha por el territorio es así una lucha cultural por la autonomía y autodeterminación.

A su vez pensar en el Macizo colombiano como una región, implica también analizar cada uno de los territorios que lo componen, cómo se articulan entre sí y cómo logran una serie de reivindicaciones sociales que los transforman y posicionan como región; la construcción de región como proyecto político entrará a jugar un papel fundamental; o en palabras de Escobar territorio – región; “el territorio atraviesa múltiples unidades de paisaje; más importante, el territorio incorpora el proyecto de vida de una comunidad. Al contrario el territorio-región es una estrategia de sustentabilidad y viceversa; la sustentabilidad es una estrategia para la construcción y defensa del territorio-región. Puede decirse así que el territorio- región articula el proyecto de vida de las comunidades con el proyecto político del movimiento social; la estrategia política del territorio región es esencial para fortalecer territorios específicos en sus dimensiones culturales, económicas y ecológicas”. (Escobar, 2010).

Bajo las precisiones teóricas anteriormente esbozadas, esta investigación se abordó desde dos perspectivas: la primera está relacionada con el carácter regional del CIMA, el Estado y el Capital. Para esto fue necesario hacer un abordaje y análisis de información secundaria y primaria que diera cuenta del enfoque regional, que presentará una caracterización del Macizo como región.

El caso de CIMA se abordó desde la información primaria y secundaria en el Macizo colombiano específicamente el sur del departamento del Cauca y Norte de Nariño, esto con el fin de caracterizarlo con movimiento social regional, identificar sus formas organizativas, su dinámica territorial, sus ejes articuladores como movimiento social y sus alcances. Se logró entablar un diálogo y trabajo con líderes sociales de las dos zonas. De igual forma se planteó como elemento fundamental el conocer una experiencia organizativa de carácter local vinculada al CIMA, que tuviera como principal área de trabajo organizativo la comunidad de sus

municipios y veredas. Este trabajo se realizó con la Coordinadora de Mujeres y Familias San Pableñas y cuatro de sus Escuelas Agroambientales que son organizaciones de carácter veredal, a través de un recorrido por el territorio, visita a sus fincas, y participación en espacios colectivos de discusión sobre sus experiencias comunitarias, sus economías campesinas y solidarias, así como de la importancia de la organización social. A lo largo del trabajo de campo se fueron ajustando las herramientas y técnicas de investigación preparadas previamente a los contextos locales y dinámicas sociales de la comunidad.

## **CAPÍTULO 1**

### **1. EL MACIZO COLOMBIANO: UN ESCENARIO BIOFÍSICO Y CULTURAL. UNA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN TERRITORIAL POR EL ESTADO Y EL CAPITAL .**

#### **1.1 Entre sus grandes montañas y abundantes aguas**

El Macizo Colombiano ha sido reconocido por su importancia geográfica, dada su condición generadora de importantes fuentes hídricas para el país. A su vez, su ubicación lo configura como un eje estratégico fundamental para la confluencia de varios actores. Caminar por el Macizo, permite comprender las razones para que sea un escenario de lucha por la apropiación de este territorio, ya que es un territorio diverso, conformado por muchas comunidades con apuestas sociales y procesos culturales diferentes. En el presente capítulo se dan a conocer las características geográficas, ambientales y demográficas que componen el Macizo Colombiano y las formas y estrategias que ha desplegado el estado y el capital para la apropiación del territorio.

##### **1.1.2 El Macizo, la mayor fuente hídrica del país**

El Macizo, conocido también con el nombre de nudo de Almaguer, es un conjunto montañoso con alturas que varían entre los 2.600 y 4.700 m. s. n. m. en donde se bifurca la cordillera de los Andes en los ramales Central y Oriental. La delimitación geográfica que se hace constantemente del Macizo Colombiano está determinada y delimitada por el nudo orográfico del sistema andino, en donde se encuentran asentadas las poblaciones de algunos municipios de los departamentos del Cauca, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño. Gracias a esta composición biofísica y a sus características específicas, en el transcurso de la historia se ha venido configurando su división político administrativa.

El Macizo colombiano es una de la principales estrellas fluviales de Colombia, considerada una de las mayores del mundo que distribuye y proporciona el 80% de agua al resto del país, incluye un gran contenido fluvial: los ríos Caquetá, vertiente del río Amazonas y Patía en la parte baja hasta la desembocadura en el océano pacífico. Contiene además 362 cuerpos lagunares en la Alta Montaña, 13 páramos y diversos ecosistemas con abundancia de flora y fauna. En dirección suroeste a noroeste sobresalen los páramos de Cutanga, el Letero, las Papas, el Apio, el Buey, Hermosas y los Volcanes nevados de Sotará Huila y Puracé; en este último y en su área circundante, 830 Km<sup>2</sup>, se localiza el parque Nacional Natural del Puracé (IDEAM, 1999).

Es importante resaltar que en 1979 el Macizo Colombiano fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO, en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera, el cual fue creado en 1971, con el objetivo de conciliar la mentalidad y el uso de los recursos naturales, esbozando el concepto actual de desarrollo sostenible. Como parte de ese proyecto se seleccionaron lugares geográficos representativos de los diferentes hábitats del planeta, abarcando tanto ecosistemas terrestres como marítimos. Estos lugares o áreas se conocen como reservas de la biosfera, que son ecosistemas terrestres y/o marinos protegidos por los Estados y por la Red Mundial de Biósferas, cuya función principal es la conservación de la biodiversidad del planeta y la utilización sostenible. Son laboratorios en donde se estudia la gestión integrada de las tierras, del agua y de la biodiversidad. Las reservas de biósfera, forman una Red Mundial en la cual los Estados participan de manera voluntaria (UNESCO, 1971).

La extensión total del Macizo Colombiano es de 3.268.237 Ha, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 1.371.613 Ha Cubiertas de bosque; 1.542.313 Ha dedicadas a agrosistemas; 256.685 Ha corresponden a páramos; 4.342 Ha pertenecen a la zona nival; 92.432 Ha presentan vegetación xerofítica y 856 Ha (Ministerio de Cultura, Fundecima 2000, p.17). La región del

Macizo Colombiano y su área de influencia, van desde el extremo sur de la Laguna de la Cocha o Guamuéz en el Páramo de Bordoncillo, en los límites de los Departamentos de Nariño y Putumayo, hasta el límite superior del Páramo de las Hermosas en el extremo norte, cubriendo de esta manera a los departamentos de: Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, Huila, Tolima y la parte suroriental del Valle del Cauca que comprende a la parte alta y las estribaciones del flanco occidental de la cordillera oriental; constituyéndose en un importante corredor biológico que une a lo largo y ancho, los cinco parques de este ecosistema.

A su vez la región del Macizo colombiano se ubica en el eje occidental que conecta al norte y al sur del territorio colombiano y que en esencia se intercepta con el eje Bogotá – Buenaventura, al cual convergen los principales flujos de importaciones y exportaciones del país. Hacia el sur del país, el eje occidental posibilita integrar el desarrollo productivo del departamento de Cauca, Nariño y conectarse con el corredor Panamericano IIRSA que vincula al país con Ecuador, Perú y los países del Mercosur.

### **1.1.3 La diversidad cultural como eje transversal del Macizo Colombiano**

El Macizo colombiano se caracteriza por la presencia de comunidades indígenas, campesinas y comunidades negras, que desde sus prácticas han transformado y apropiado este territorio convirtiéndolo no solamente en un espacio clave por su riqueza natural y ambiental sino también por las prácticas culturales y encuentros interétnicos que se entretienen en el mismo. En el conviven e interactúan comunidades indígenas Yanaconas del Macizo Colombiano, los Ingas de la Baja Bota Cauca, las comunidades afrocolombianas en el Valle del Patía y las comunidades campesinas asentadas en todos los municipios. (Ministerio de Cultura, Fundecima, 2000; p.18).

En la parte cálida y templada del Macizo, viven aproximadamente 250.000 habitantes entre campesinos, negros y blancos (caso excepcional de la Vereda de Arbela del Municipio de la Vega) de los Municipios de Timbío, Sotará, Rosas, La Sierra, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Santa Rosa, Bolívar, Sucre, Florencia y Mercaderes y Puracé, para mencionar sólo los municipios que corresponden al Departamento del Cauca, porque además hacen parte de él, los Municipios de San Pablo y la Cruz del Departamento de Nariño, San Agustín y San José de Isnos del Departamento del Huila y una gran zona de influencia de los Departamentos de Caquetá y Putumayo. La delimitación geográfica de la gran Región del Macizo Colombiano coincide con los límites establecidos desde el siglo XVI. (Ministerio de Cultura, Fundecima, 2000; p.18)

La población campesina representa aproximadamente el 70% de la población de la región, su modo de producción básico es la tierra, siendo eje principal la producción agrícola y pecuaria. Por su parte la comunidad indígena cuenta con 6 resguardos del pueblo Yanacona en el Macizo Colombiano, ubicados en los municipios de Almaguer, La Vega y San Sebastián; 5 resguardos de los Ingas en la Bota Caucana, municipios de Santa Rosa y Piamonte;(Duarte 2015, p. 57). Aproximadamente desde 1980 todos los cabildos Yanaconas, tanto de resguardos como de las comunidades indígenas civiles, están agrupados en una organización más grande conocida como Cabildo Mayor consolidado posteriormente por la Constitución política de 1991.

Paralelo a ello se encuentran las comunidades afrocolombianas ubicadas principalmente en el Sur del Cauca, que se han asentado en el Valle de Patía desde su llegada en el siglo XVIII.

#### **1.1.4 El Macizo, territorios agrícolas y mineros**

El desarrollo económico de la región del Macizo depende en gran parte del sector agrícola, seguido por las actividades pecuarias y el aprovechamiento de los recursos forestales. La zona

Oriental, el Macizo y la Bota son, en su mayoría, tierras con poca vocación comercial, con limitaciones para el uso agrícola y con vocación principal hacia la conservación forestal y agroforestal. Cerca del 32% de las tierras tienen fertilidades “bajas” y otro 25% muestran fertilidades “muy bajas”. Vale la pena señalar que, aunque la zona central del departamento del Cauca tiene aptitudes para la agricultura, esta zona es considerada de “baja fertilidad”. Por otro lado, aunque los suelos del norte del Cauca son considerados de “alta” y “moderada fertilidad”, lo que ha venido sucediendo con la siembra de monocultivos (de caña de azúcar y pino) es la reducción de la misma. Y esto debido a una serie de factores, entre ellos, que la tierra se vuelve más ácida con la siembra de algunos cultivos, a lo que se suma el uso de múltiples agroquímicos que son utilizados intensivamente en estos sistemas productivos. A pesar de la gran diversidad de sus suelos, gran parte del departamento no tiene vocación productiva. El 36,41% son suelos que se deberían destinar a la “conservación” y un 25, 11% adicional se debería destinar a producción y protección forestal. (Duarte, Salcedo, Pinzón, 2013, p. 11).

En las pequeñas y medianas parcelas se ha implementado el café, con siembras que se expandieron desde el oriente del país en los Santanderes hasta las áreas del occidente denominadas como el “Eje Cafetero”, para llegar posteriormente al sur del país a los departamentos del Cauca, Huila y Nariño, que conforman hoy en día una de las regiones con más participación en la producción del grano a nivel nacional, con un 27,95% de las áreas cultivadas del país según cifras de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) (Ibid, 2013; p.14).

Parte del sistema social y económico de campesinos, indígenas y afros estuvo ligado hasta la década del 2000, a la producción de hoja de coca, marihuana y amapola, actividades que les han permitido vivir con unos ingresos básicos para mejorar la vivienda, la educación de sus hijos y el acceso a la salud. En algunas zonas como en el Noroccidente del Cauca y municipios de



Almaguer, Sucre y La Vega, los cultivos de usos ilícitos son asociados a cultivos legales como el café, este hecho les permite sopesar los altibajos en los precios que presenta el mercado de ambos productos sin embargo, es notorio el auge en los últimos años de la siembra de amapola en las zonas de tierra fría y de coca y marihuana en las áreas cálidas, como consecuencia de la inexistencia de políticas estatales de apoyo al campesino y de la desigual distribución de la tenencia de la tierra, cuyo principal problema es el minifundio. (Ministerio de Culturas, Fundecima, 2000; p.19).

La política productiva, por otra parte, ha orientado al campesino a sistemas productivos que cada vez tienden más al monocultivo. Este hecho tiene dos efectos: el primero es la pérdida de autonomía alimentaria, y el segundo es el requerimiento de altas inversiones para la producción —la falta de estas inversiones redunda en bajos rendimientos productivos y en una baja rentabilidad de los sistemas agropecuarios—. La situación ha provocado una crisis en la economía campesina a la que se suma el aumento de los precios de los agroquímicos debido al precario estado de las vías del departamento; y todo ello se traduce en altas tasas de pobreza rural de las comunidades campesinas, indígenas y afros que han quedado relegadas a las áreas menos fértiles del departamento. (Duarte, 2015; p. 144).

Al panorama anterior se suma la existencia de zonas con potencial minero, como uno de los grandes atractivos de la región, con elementos como el oro y el cobre, lo que ha generado tensiones entre las comunidades y empresas de carácter privado que hacen presencia allí. No sólo la potente economía de extracción se centra en la minería de oro y cobre, también existen otras extracciones como el carbón y el mármol que junto con otros materiales de construcción, han sido la base para el establecimiento de grandes empresas en el departamento, con impactos no solo las prácticas agrícolas, sino en la tenencia de la tierra.

Si bien la región del Macizo Colombiano está caracterizada por poseer una buena parte de las más importantes fuentes hídricas del país, la presencia de elementos de importancia minera, así como reservas forestales y riqueza agrícola y pecuaria, su ubicación geográfica y sus características ambientales, han traído consigo una serie de tensiones entre distintos actores con intereses particulares en esta región, que en ocasiones son opuestos o no favorecen a las comunidades que allí viven, generando formas distintas de apropiación de este territorio y trayendo consigo un panorama social y cultural de desequilibrios económicos, sociales, ambientales y políticos manifestados y denunciados en muchas ocasiones por las marchas cívicas, campesinas y sociales durante los últimos años.

De acuerdo al plan de culturas del Macizo y el suroccidente colombiano (2000;p.19) las necesidades básicas insatisfechas oscilan entre el 76.8% y 80% por cada uno de los entes territoriales mencionados, con existencia de indicadores de miseria entre el 35 % y 40% del total de la población de la región. Los principales problemas de educación se evidencian en la deficiencia de niveles de cobertura y calidad, altas tasas de analfabetismo y deserción escolar provocado por la situación de desempleo y conflicto armado, deficiente capacitación de docentes y limitaciones en equipamiento e infraestructura educativa. (Ministerio de Cultura, Fundecima, 2000, p. 20).

Al repasar factores de orden económico, ambiental y militar, es posible apreciar que las posibilidades de expansión territorial del minifundio de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, se limitan a las zonas montañosas del departamento, convirtiendo a éste en un escenario conflictivo y generando una paradoja al modelo de nación

multicultural que reconoce derechos diferenciados a los grupos étnicos, pero no las condiciones para hacerlos efectivos.

En un contexto en el que la expansión de la pequeña propiedad se encuentra limitado, bien sea por la gran propiedad hacia el valle interandino y las zonas de conservación ambiental e hídrica hacia la montaña, se tienden a agravar las situaciones de tensión y conflicto interétnico e intercultural entre los procesos organizativos que representan la pequeña propiedad. Estas situaciones de conflicto que enfrentan a estos grupos de manera latente o potencial, lejos de ser homogéneas, presentan particularidades en relación con las visiones del desarrollo y el territorio adelantados por los procesos organizativos de indígenas, afrodescendientes y campesinos. (Duarte, Salcedo, Pinzón, 2013; p. 22).

Los aspectos anteriormente expuestos permiten evidenciar el contexto ambiental, social, cultural y económico de la región del Macizo Colombiano que han dado paso al surgimiento de una cultura de movilización en la región y a la vez una visión por parte del estado de apropiación del territorio que viene acompañada de una inserción del capital en la región enfocada a la explotación minera.

## **1.2 Acciones de apropiación del Capital y Estado en la región**

Bajo su función principal de interventor y garante de los derechos en todo el territorio, el Estado colombiano ha desplegado políticas y acciones, desde los diferentes gobiernos y los Planes Nacionales de Desarrollo, que deben responder a las necesidades básicas de cada región y de la población. En tanto que Colombia ha sido marcada por las secuelas del conflicto armado interno con sus consecuencias sociales, económicas, políticas y ambientales en todas las regiones, el

tema de la seguridad también se convirtió en una tarea del Estado, principalmente en las zonas rurales – reconociendo también la existencia del conflicto social y político en zonas urbanas- . Sin embargo, el aseguramiento de los territorios rurales, guarda también una estrecha relación con el despliegue estratégico relacionado con el modelo de desarrollo adoptado por el país, el cual está claramente basado sobre la explotación primaria de los recursos ecosistémicos, del suelo y del subsuelo.

La región del Macizo y en particular los departamentos del Cauca y Norte de Nariño, han estado marcados por la presencia de actores armados y la ausencia del Estado como garante de derechos, ausencia que en la década del 2000 desaparece y queda esta región como una de los primordiales focos de todos los Planes Nacionales de Desarrollo, presencia marcada por la apuesta en programas sociales que disminuyan los efectos de la guerra en la región (laboratorios de paz), pero que ha estado marcada también por la presencia de grandes multinacionales mineras avaladas por el Estado y por la búsqueda del control del territorio en tanto su importancia geoestratégica para los grupos armados ilegales como las guerrillas y los paramilitares.

A continuación se busca dar a conocer el panorama social y político así como el accionar del Estado, el capital y su presencia en la región desde la década de los 80's hasta el 2000 y posteriormente desde la década del 2000 hasta el 2011, -siendo este el período de estudio de la investigación- permitiendo así poner en debate las políticas estatales y el panorama social que surge en la región a partir del 2000 con los planes de desarrollo de los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Estos son los elementos que permiten dar cuenta de la composición y dinámica del Estado en relación a la desapropiación y apropiación del territorio en

los periodos de tiempo mencionados, a la vez los aspectos que dan las bases para la emergencia de movimiento sociales en este caso el CIMA

### **1.2.1 Entre la ausencia estatal y la apropiación de la tierra.**

La situación de las comunidades campesinas ha estado marcada por una serie de matices relacionadas con la concentración de la tierra, altos precios en los insumos agrícolas, bajo apoyo estatal en los procesos productivos, presencia de monocultivos, conflicto social y armado, la ausencia de un reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos con identidad propia, con factores culturales y ambientales desde los cuales construyen territorialidades diversas. La situación mencionada requiere entonces analizar algunos factores que se dan en el país principalmente desde la década del 60, y que permiten entender el contexto en el que surge el CIMA en la década del 80 y su posicionamiento en la década del 90.

“El Censo agrario de 1960 evidenció una desigualdad abrumadora: algo más de un millón de campesinos con parcelas de menos de 20 hectáreas representaban el 86% de las explotaciones y ocupaban apenas el 15% de la superficie, mientras que el 41% de la tierra era monopolizada por unos 8.000 terratenientes en predios mayores de 500 hectáreas” (Zamocs, 1984). Para tal fecha y aún en la actualidad son 12 los departamentos que tienen más del 50% de su población en las zonas rurales (Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Nariño, Putumayo, Vaupés y Vichada); sin embargo como lo demostraba el censo agrario eran muy pocas las familias que eran propietarias de tierras en estos departamentos.

La concentración de la tierra en pocas manos trajo consigo la precariedad de condiciones de vida dignas para las comunidades campesinas generando cada vez más una brecha social marcada entre quienes actúan como propietarios y terratenientes y quienes trabajan la tierra.

El Instituto Pensar de la Universidad Javeriana en su trabajo del 2002 en relación a la situación del sector rural en Colombia plantea que:

1. El 10 % más rico de la población en el país percibe 30 veces el ingreso del 10% más pobre.
2. El valor del ingreso del dueño de la finca fue de aproximadamente 10 veces el valor del ingreso del jornalero rural, lo cual muestra la concentración relativa del ingreso rural por parte de los patronos.
3. La pobreza rural, asociada a la variable ingreso, muestra que cerca del 79,7% de la población rural no recibe ingresos suficientes para una canasta de satisfactores mínimos, por lo cual, se localiza por debajo de la línea de pobreza.
4. Poco menos de la mitad, el 45, 9% de la población pobre rural se ubica en la categoría de indigente, esto es en “pobreza extrema”.

La pobreza rural se manifiesta principalmente en la falta de acceso a servicios de salud, educación, seguridad social y servicios públicos eficientes. Sumado a ello, es muy limitado el número de trabajadores rurales pobres que están vinculados a los organismos de seguridad social, principalmente en fondos pensionales. Al no ser cotizantes del sistema tampoco tienen derecho a pensión y es por ello que en el sector rural no hay edad de retiro. (Pérez y Pérez, 2002; p. 6).

Bajo este contexto se da una de las reformas agrarias más importantes para el país a través de las cuales se crean las unidades agrícolas familiares y se consolidaron medidas para evitar la extensión de latifundios improductivos. “Los avances del sector agrícola durante los años 60 consolidaron el movimiento social campesino. A partir de estos avances, los campesinos y

campesinas se empoderaron socialmente, en este contexto, fue que bajo el gobierno conservador de Misael Pastrana se llevó a cabo el llamado Acuerdo de Chicoral, el cual fue devolviéndole gradualmente el poder a los grandes terratenientes y a los empresarios agrícolas, facilitándoles así el acceso a los grandes créditos y beneficios tributarios, mientras los minifundistas solo recibían asistencia técnica.

La década de los años 80 estuvo marcada por el inicio del narcotráfico como forma de enriquecimiento de los actores armados vinculados al conflicto social y armado del país; con ello se dio la compra de tierras por narcotraficantes lo cual no sólo elevó la concentración de la propiedad, sino que generó el desplazamiento de millones de familias y comunidades hacia las ciudades y áreas urbanas de los municipios. “Por otra parte, el pago de precios muy por encima de los del mercado por esas tierras ha generado una distorsión en el valor real de la tierra y ha desestimulado la inversión en el sector. Muchas de esas tierras se han dedicado a la ganadería extensiva sustituyendo el uso que tenían en actividades de economía campesina, agricultura o como área de bosques. Pero no sólo se ha fortalecido el latifundio y se ha concentrado la tierra en manos de narcotraficantes, sino que el minifundio sigue teniendo gran importancia en el país. Hay un gran número de predios cuyas áreas son muy inferiores a las establecidas como unidad agrícola familiar” (Pérez y Pérez, 2000;p.30). Los departamentos en donde se presenta el mayor número de predios en minifundio son en su orden Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Nariño y Santander.

Durante los años 80 no hubo más reformas significativas a la estructura agraria. Los años 90 llegaron y el sector agropecuario se encontraba paralizado producto de políticas públicas contradictorias que habían frenado el desarrollo social de las áreas rurales y que no habían logrado implementar medidas redistributivas que hicieran más justa la distribución de la tierra.

Aunque en los años 90 no hubo tampoco ningún avance legal con respecto a la tierra, sí hubo una serie de medidas macroeconómicas que afectaron definitivamente el esquema de producción de la Colombia rural. La apertura económica implementada por el gobierno de César Gaviria, abrió el país al mundo, desmontando varias de las medidas regulatorias que había sobre el mercado, incluyendo las del mercado agropecuario.

Sin embargo es en la segunda mitad del siglo XX que surgen y se consolidan muchos de los movimientos sociales en el país que tendrían gran influencia en las decisiones y avances no solo bajo las reformas de la constitución del 91 en términos de garantías de derechos, sino también en el fortalecimiento del trabajo a nivel local; en los que se reconoce la importancia de la movilización y las luchas sociales ante el panorama social, político y económico que vivía no solo el sector rural del país sino el panorama de las zonas urbanas ante el fenómeno del desplazamiento y agudización de algunos problemas sociales, sumado también con la situación del movimiento estudiantil y sindical del país. “La década de los setenta y ochenta fue un período de auge de movimientos sociales, campesinos, cívicos y sindicales en el marco de conflictos por la tierra derechos de asociación sindical, derechos laborales y poder político.

Las luchas campesinas por el derecho a la tierra – en algunas subregiones con alta concentración de la propiedad estuvieron sustentadas en procesos organizativos influenciados muchas veces por organizaciones políticas de izquierda. Estas dieron lugar a toma de tierras y otras acciones colectivas demandando ante el estado no solo por el acceso a dicho recurso, sino también por condiciones para la actividad agraria” (Pérez y Pérez, 2000;p.30).

Sin embargo este panorama de luchas sociales tuvo respuestas diferentes por parte de los diferentes actores con presencia en los territorios rurales, agudizando más los conflictos sociales



emergentes; “pero el desenvolvimiento de este conflicto- cuyas contrapartes, de acuerdo a las circunstancias eran agremiaciones económicas, grandes empresarios o el estado – estuvo determinado por la represión estatal, la violencia ejercida por los mismos agentes concentradores de la tierra o mercenarios a su servicio. Las consecuencias fueron el languidecimiento de las luchas, favoreciendo aquellos sectores opuestos a cualquier reforma agraria-, la preservación de la estructura de la tenencia de la tierra por la no redistribución del recurso o la continuidad de la concentración, a través de compra de tierras a menor costo por parte de agentes vinculados a la violencia contrainsurgente o al narcotráfico y por el abandono de la propiedad con su posterior apropiación ilegal por parte de otros”.

### **1.3. De la apropiación de la tierra a la del territorio: Estrategia militar y social de control territorial**

El período comprendido entre el 2000 y el 2011, corresponde a los periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, e involucra de manera directa la implementación de estrategias para el desarrollo económico y social del país dentro de una lógica político-económica-militar, que en principio se expresó en:

1. El control Territorial y Defensa de la Soberanía Nacional enfocada fundamentalmente a la implementación de estrategias de control militar territorial (lo cual permitiría mejores condiciones para impulsar la inversión extranjera, explotación minero- energética, llegada de multinacionales).
2. El crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, enfocado a la implementación de explotación y exploración de hidrocarburos y minería, que contribuya al desarrollo del sector minero.
3. La implementación y fortalecimiento de la ciencia y la investigación en áreas estratégicas.

4. La política comercial dirigida al aumento de la inversión extranjera y la regionalización de la oferta exportable y desarrollo de una cultura exportadora. Todo esto en el marco de la sostenibilidad ambiental (Plan Nacional de Desarrollo 2002- 2006).

La Política de Consolidación Territorial, se convirtió en la piedra angular de las formas en que el Estado colombiano asumió mediante una estrategia militar, el control de territorios, entre ellos el Macizo Colombiano. El documento de Política de Consolidación y Recuperación territorial tiene tres justificaciones:

1. Un desarrollo institucional caracterizado por un modelo desequilibrado de difusión regional de la presencia del Estado, extremadamente diferenciado en materia de prestación de servicios y en la garantía de los derechos de los ciudadanos.
2. Dinámicas descontroladas de ocupación demográfica del territorio, bajo procesos de colonización originados, principalmente, en el imperativo de la búsqueda de condiciones de supervivencia, como recurso de miles de familias para huir de la pobreza, la violencia y la inseguridad.
3. La configuración de grupos armados ilegales que empezaron a ejercer el control territorial por medio de la violencia armada y organizada, de acuerdo con las condiciones geográficas en determinados territorios. (Política Nacional de Consolidación y reconstrucción Territorial PNCRT, 2014, p.4).

En relación con este último punto, el mismo documento concluye que bajo el control del territorio por parte de grupos armados ilegales, se obstaculiza la integración regional y las oportunidades de desarrollo económico, social e institucional de la población restringiendo las libertades individuales. De igual forma aparecen como consecuencias la desmotivación de la inversión privada, a la vez que se imponen riesgos elevados a la inversión pública, a la prestación de servicios sociales y a la provisión de los bienes públicos. Atribuye también a la

presencia de actores armados ilegales, “la destrucción y degradación de los recursos naturales y, sobre todo, de ecosistemas sensibles, como los Parques Nacionales Naturales y las reservas forestales, al fomentar dinámicas de poblamiento (ocupación ilegal) y de explotación (cultivos ilícitos y minería ilegal) en función de sus estrategias de control territorial (Ibid p.5).

A su vez, el PND 2006-2010 ejecuta el componente denominado “Estrategia de Recuperación Social del Territorio”, que fue uno de los 4 ejes principales del Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos 2006-2010” (aprobado mediante la Ley 1151 del 24 de Julio de 2007), y se mantiene en el “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos”. Dicha estrategia fue ejecutada desde dos perspectivas: recuperación del monopolio de la fuerza e intervención social coordinada, concertada entre el Estado central y las comunidades locales, que se orientaron en seis ejes: control del territorio, lucha contra las drogas y el crimen organizado; reactivación social a través de siete “herramientas de equidad”; reactivación económica local; fortalecimiento del servicio de justicia formal y mecanismos alternativos de resolución de conflictos; y reconstrucción del tejido social a través del uso del tiempo libre y la cultura ciudadana. (PND 2016,2010). Bajo estas dos estrategias de localización y territorialización de carácter nacional se describen a continuación las dinámicas de despliegue de las mismas en el caso del Macizo colombiano.

### **1.3.1 Estrategia militar de control territorial en el Macizo Colombiano**

La región pasa de una condición de olvido a ser uno de los territorios considerados de mayor importancia estratégica para el desarrollo económico y social del país. En el plan de desarrollo 2010-2014 se promueve el concepto de región como plataforma de crecimiento económico y como estrategia de una planificación y formulación de políticas públicas para el país, políticas que se concentran principalmente en el aprovechamiento de los recursos y capacidades

endógenas que tengan las regiones, para contribuir al crecimiento económico del país. Según este mismo instrumento de planeación, el Macizo Colombiano hace parte de la macro región sur, donde existen intereses y metas concretas de desarrollo.

La materialización de los grandes objetivos consignados en los planes de desarrollo de los tres últimos gobiernos, de la mano de la política de consolidación y recuperación territorial, están inmersos en las distintas manifestaciones históricas de violencia, períodos de profunda crisis en la situación de derechos humanos y la agudización del conflicto armado, que para el caso de la zona de estudio se ha reflejado especialmente en los procesos de militarización del territorio, la lucha por el control territorial entre los actores armados, así como la dinámica de la producción y procesamiento de cultivos declarados ilícitos.

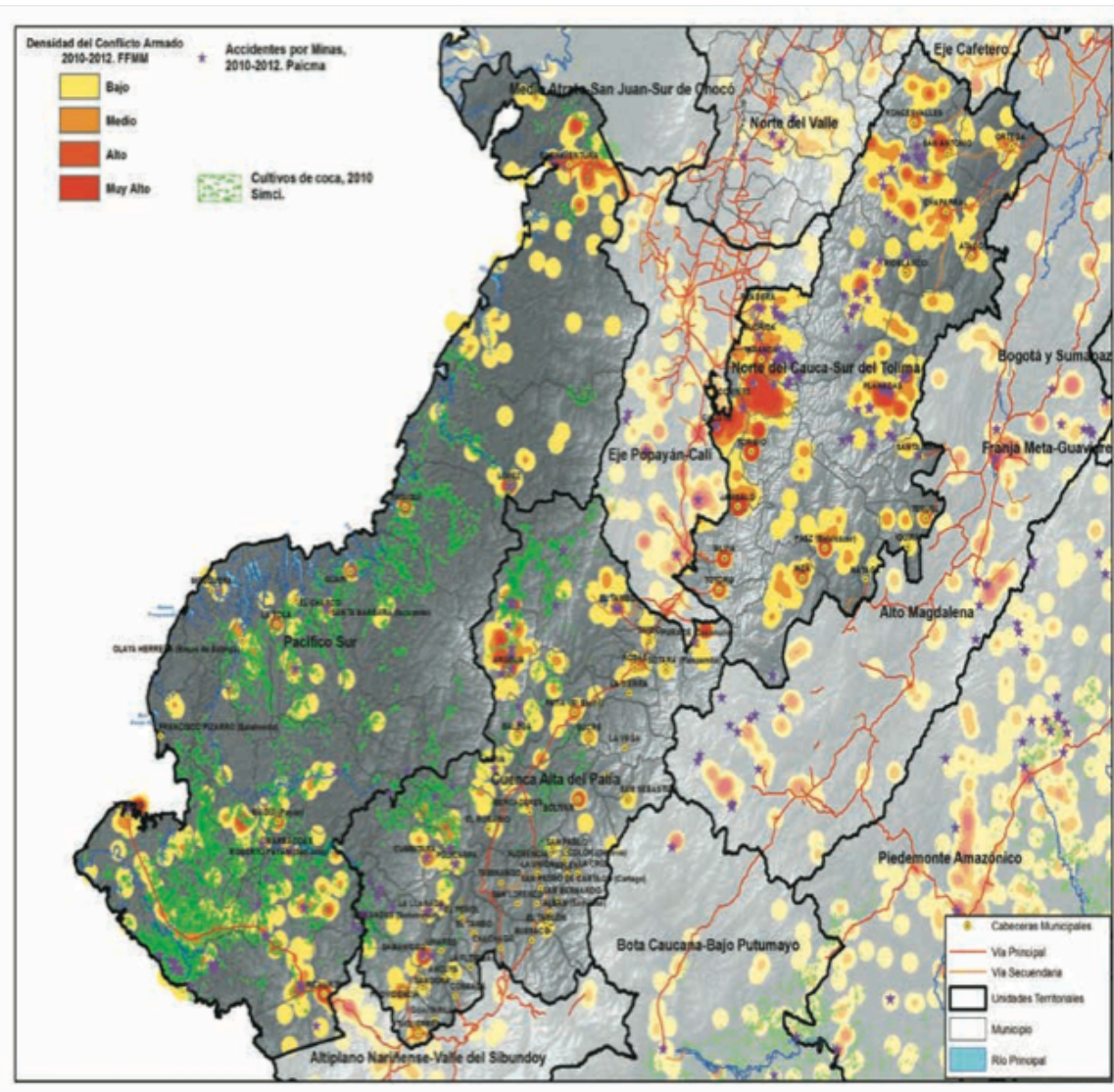
De acuerdo con el Atlas del Conflicto Armado en Colombia, tanto el norte del Cauca, el sur del Tolima, algunos municipios del Valle y del Huila, como los municipios que hacen parte de la cuenca alta del río Patía, que en conjunto configuran el Macizo colombiano, son el más importante territorio para comunicar el oriente del país con el Pacífico sur y que históricamente ha sido un corredor especialmente estratégico para la guerrilla de las FARC que lo ha usado desde sus orígenes, en los años sesenta.

Las principales disputas territoriales entre los actores armados del conflicto, han estado marcadas por dos tendencias principales, la primera de ellas relacionada con la presencia de cultivos declarados ilícitos principalmente en los municipios circundares a la zona de estudio de la presente investigación y la segunda con la necesidad de control de este territorio como corredor estratégico entre el Tolima y la zona del Pacífico.

Si bien los municipios incluidos en esta investigación históricamente no aparecen con los mayores grados de afectación por el conflicto armado y la existencia de cultivos ilícitos, si son fuertemente tocados por hacer parte del corredor estratégico en mención, lo cual sin duda guarda estrecha relación con la confluencia de guerrillas y grupos paramilitares hoy llamados bandas criminales, así como las zonas circundantes de siembras de coca y centros de procesamiento, que de manera general explican que la violencia en la Cuenca Alta del Patía haya sido superior a la del promedio nacional desde 2005, momento en el que se produjo la desmovilización de los grupos paramilitares. ( ver mapa 2)

Desde el año 2000 esta región se militarizó y paramilitarizó“ Uribe inauguró el Batallón de Alta Montaña Benjamín Herrera con 1.200 hombres en San Sebastián; el bloque Calima de las AUC, a decir de Velosa —el comandante H.H.—, tuvo entre sus ideólogos representantes políticos caucanos ”(Molano, El Espectador, 2011). El Bloque Calima de las autodefensas hizo su entrada al Cauca. Dejó a su paso un recorrido de masacres y asesinatos en el Norte y Centro del departamento para luego expandirse en 2001 hacía la cuenca del Río Patía. Luego de su proceso de desmovilización en diciembre de 2004, los paramilitares siguieron operando como Rastrojos y Águilas Negras. Por parte del gobierno, en el Norte del Cauca se implementó la estrategia de los centros de consolidación de acción integral y a la vez incrementaron las bases militares en el Centro y Sur del departamento. Como sucedió en otras regiones (como en el Urabá con la palma, y en los Montes de María con la teca) después de los paramilitares llegaron al Macizo empresas nacionales y extranjeras en busca de recursos naturales; en el caso del Macizo, de oro y otros metales preciosos . (Molano, El Espectador, 2010).

## MAPA 2. Distribución de cultivos ilícitos e intensidad del conflicto en el Macizo colombiano



Distribución de cultivos ilícitos e intensidad del conflicto en el Macizo colombiano. Tomado de Atlas del Impacto Regional del Conflicto Armado en Colombia Volumen I. p 753.

Llama fuertemente la atención que en la etapa del 2003 al 2006 se observa un cambio significativo en la expulsión de personas en todos los municipios de la cuenca alta del río Patía, incluso en aquellos incluidos en esta investigación, para los cuales, históricamente este tipo de indicadores estuvieron por debajo de los municipios mayormente afectados, tanto por la presencia de actores armados, como de cultivos ilícitos y por ende con dinámicas más agudas de

violencia (ver mapa 2). Tal como se ha justificado en los planes militares del gobierno y en los planes de consolidación y reconstrucción territorial asesorados por los Estados Unidos, en el desarrollo de la guerra en Colombia todas las razones mencionadas le dan importancia mayor al control territorial, militar y político en el Cauca y, en especial, en las regiones geoestratégicas que rodean al Valle del Cauca y las conexiones hacia el Pacífico. A esto se agrega el papel militar del control del Macizo Colombiano que conecta con el sur del país.

“Es así como a partir de 2003 se ha fortalecido la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca. La Brigada No. 29 del Ejército nacional ubicada en Popayán cubre todo el departamento, excepto la región Norte que es jurisdicción de la Tercera Brigada; en la región del Macizo colombiano, municipio de San Sebastián, se encuentra el Batallón de Alta Montaña Benjamín Herrera y en Tacueyó, el Batallón de Alta Montaña. En todo el departamento operan brigadas móviles del Ejército y la Fuerza de Tarea Apolo, unidad móvil del Ejército, encargada de combatir a las Farc-ep en el suroccidente del país, en el marco de la “Campaña Espada de Honor”

#### **1.4 “De lo militar a lo social”**

En el marco del despliegue del componente denominado “Estrategia de Recuperación Social del Territorio”, en la perspectiva de intervención social coordinada, concertada entre el Estado central y las comunidades locales, se implementaron los Programas de Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad, (PDP). Se definen como programas integrales de impacto regional de mediano y largo plazo, basados en el fortalecimiento de la organización social y el desarrollo productivo que se han focalizado en aquellas zonas del país donde los altos niveles de conflicto se encuentran ligados a la ausencia de alternativas de desarrollo, a la debilidad del Estado, a la extrema precariedad del capital social, a la presencia de cultivos ilícitos y a la fragilidad ambiental, entre otros factores (Turriago, 2012).

Considerando que en Colombia, la violencia y sus causas tienen una naturaleza multidimensional y desde una concepción de paz positiva, la Unión Europea, creyó que no era necesario esperar el fin del conflicto armado para poner en marcha propuestas de desarrollo que el país requería urgentemente. Amparada, entre otros, en la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan Colombia y el Apoyo al proceso de paz en Colombia (Febrero 2000) y “La posición de la UE en el Grupo de Apoyo al proceso de paz en Colombia”, III Reunión que tuvo lugar en Bruselas el 30 de abril 2001, la UE a partir del año 2002 respalda tres iniciativas de desarrollo y paz llamadas “Laboratorios de Paz” -LP (Delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador 2014. Laboratorios de paz y Programas de Desarrollo Regional y Paz. ) entre 2002 y 2011 en Colombia. Estos programas se implementaron y se materializaron a través de la cooperación internacional de la Delegación de la Unión Europea en el marco de la implementación de los tres Laboratorios de Paz (LP). Los Laboratorios de Paz (LP) son iniciativas del Gobierno colombiano y de la Unión Europea que acompañan los Programas Regionales de Desarrollo y Paz (PDP).

En el mapa 3 se indica las zona de implementación de los laboratorios de paz I, II III. En el gobierno Uribe Vélez se implementó el Laboratorio de paz I en el Norte de Santander, Oriente Antioqueño y Macizo colombiano / Alto Patía (Cauca y Nariño).

Los principales tres ejes de trabajo y sus resultados según la Unión Europea en la implementación de los LP fueron:

- *Eje de Gobernabilidad Participativa*, que apoyó el fortalecimiento de la institucionalidad pública y de la sociedad civil, construyendo espacios e instrumentos de participación democrática a través de: capacitación en procesos de gobernabilidad democrática y



política pública, construcción de planes, pactos de gobernabilidad, presupuesto participativos y rendición de cuentas. Según el informe de la UE es posible que el ciudadano común y sus organizaciones incidan efectivamente en agendas públicas y en la gobernabilidad local. La incidencia lograda a través de los Laboratorios de Paz exigió el establecimiento de mecanismos de inclusión efectiva y participación significativa para visibilizar la voz del ciudadano, animar su iniciativa para tomar acción y para su organización efectiva y eficiente. Es decir, se demostró que el ciudadano puede incidir siempre y cuando haya una intención y un plan de acción para hacerlo.

- *Eje de Desarrollo Socioeconómico sostenible*, que promovió el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable, mediante la promoción y apoyo de alternativas socio-económicas para el desarrollo local, respetuosas del medio ambiente. El método de fortalecimiento organizacional apoyado por los LP ha incidido en el incremento de la participación ciudadana, la densidad organizacional y el capital social en las regiones. Se crearon o fortalecieron organizaciones, asociaciones y redes con capacidad de acción e incidencia: de pequeños productores, pescadores, jóvenes, mujeres, estaciones de radio comunitaria, sistemas regionales de planeación participativa, y se han fortalecido las organizaciones tradicionales de indígenas y afrocolombianos es cita. Las modalidades de finca campesina apoyadas por los LP muestran un camino para la promoción de la economía campesina rentable en perspectiva de una transformación agraria conducente a la vida digna y la paz. Se ha demostrado que la finca campesina es viable y genera beneficios económicos y sociales a las familias, siempre y cuando se den de manera conjunta y a tiempo los siguientes elementos claves: el acceso a la tierra, la formación del campesino, el acceso al crédito en condiciones razonables, la asistencia técnica adecuada y a tiempo, la vinculación a cadenas de mercado, el acompañamiento durante un tiempo largo y la asociatividad. Las evidencia muestra que, además del

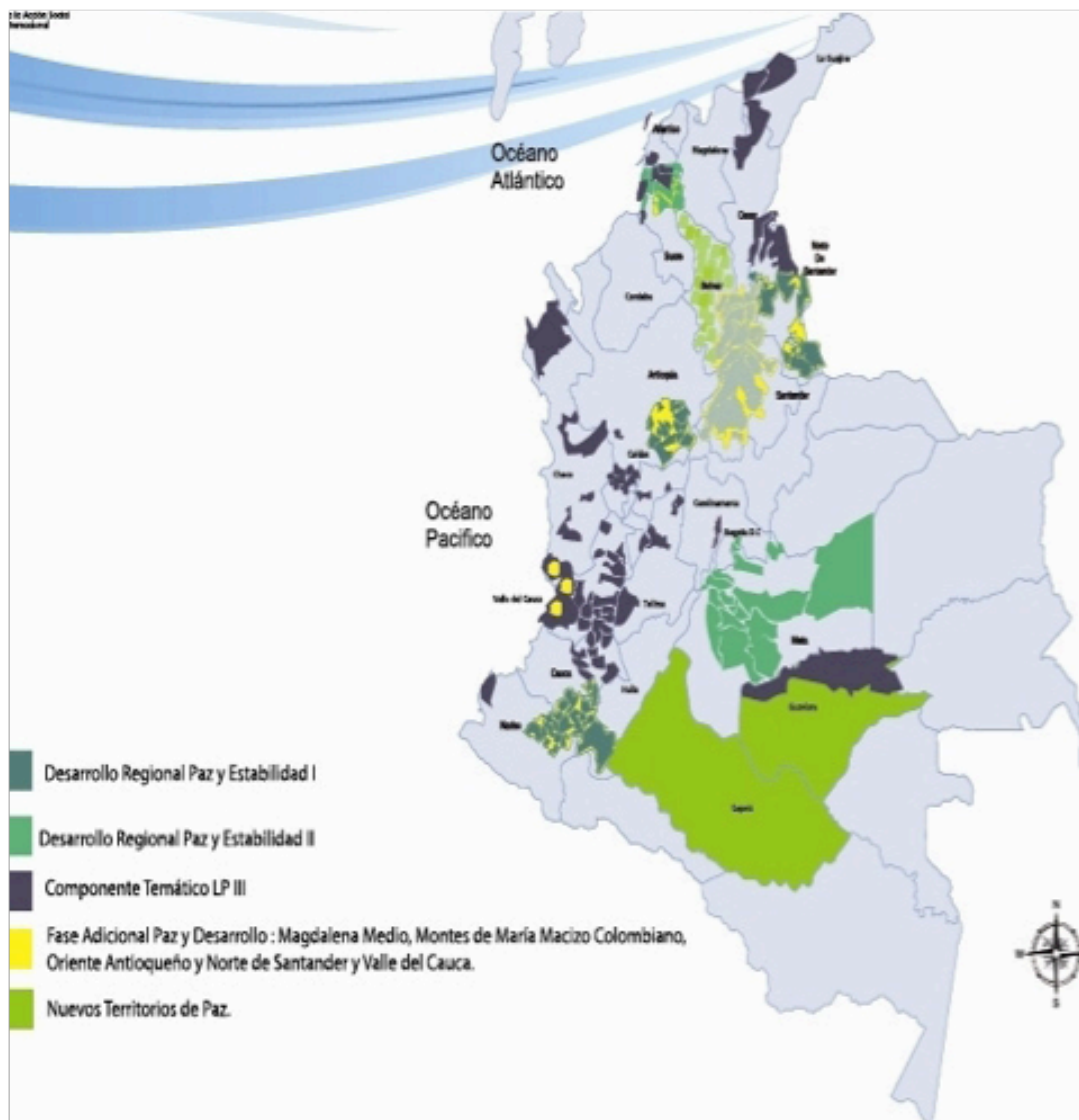
mejoramiento de la seguridad alimentaria, las fincas campesinas generan, en promedio, ingresos de entre 1-2 salarios mínimos mensuales.

- *Eje de Paz y DDHH*, que promueve la defensa de la vida, la defensa de los DDHH, el DIH y la convivencia pacífica, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y las instituciones públicas: capacitación y fortalecimiento de organizaciones sociales en temas de DDHH y resolución de conflictos, creación de observatorios de paz y espacios humanitarios para el desarrollo local.

A nivel nacional y departamental, documentos de política formulados y en proceso de formulación han incluido recomendaciones hechas en el marco de la implementación de los PDP y los Laboratorios de Paz. Para el caso del Macizo Colombiano (CONPES “Estrategia Integral para el Desarrollo del Departamento del Cauca”).

Esta estrategia de recuperación social del territorio implementada no se puede ver solamente a la luz de programas y proyectos orientados para la comunidad. Aquí es importante develar las relaciones que emergen a partir de la implementación de estas políticas sociales donde están inmersas las organizaciones sociales de base, actores como la UE y su política de cooperación internacional y el gobierno nacional.

### Mapa3 Laboratorios de paz y Programas de Desarrollo Regional y Paz.



Laboratorios de paz y Programas de Desarrollo Regional y Paz. Recuperado en: [http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/press\\_corner/2014/20140225\\_los\\_laboratorios\\_de\\_paz\\_y\\_los\\_programas\\_de\\_desarrollo\\_y\\_paz\\_es.pdf](http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/press_corner/2014/20140225_los_laboratorios_de_paz_y_los_programas_de_desarrollo_y_paz_es.pdf)

En el marco de la recuperación social del territorio por parte de Estado se identificó que no surgen solamente relaciones de conflicto y de tensión sino también contradictorias. El primer elemento contradictorio es la política militar para el control territorial que deja a su paso en el territorio la militarización, desplazamiento, desarraigo, estigmatización de las comunidades que

están inmersas en el conflicto social y armado, por otro lado implementa programas de desarrollo, derechos humanos para las comunidades con el fin de contribuir a la paz. El segundo elemento es el debate interno de las organizaciones sociales de base sobre la participación e incidencia que deben tener en la implementación de estos programas y otros relacionados con la cooperación internacional y políticas sociales del gobierno nacional que pueden significar una amenaza para la autonomía y objetivos de la lucha social o por el contrario una estrategia y oportunidad para su fortalecimiento.

Las organizaciones sociales no han sido indiferentes a estas políticas sociales, en el caso de CIMA jugaron un papel fundamental en relación al laboratorio de paz II en Macizo Colombiano. Cabe resaltar que estos están marcados por una nueva tendencia y enfoque a diferencia de anteriores u otras políticas sociales, puramente asistencialistas en escenarios de conflicto. Estos programas están diseñados para generar espacios con la base social, que promueve la participación y diseño de propuestas concertados y bajo principios de identidad, cultura y desarrollo para las comunidades, con el fin de contribuir a la paz.

Los elementos esbozados acerca de los laboratorios de paz muestran un contenido y enfoque atractivo de resultados positivos para las comunidades, no obstante resulta imprescindible analizar la experiencia específica del Laboratorio II en el Macizo y el Alto Patía, a través de algunos criterios: 1. la participación de las organizaciones sociales del territorio. 2. la relaciones entre los actores involucrados. 3. la construcción de paz, dicho análisis permitirá entender cómo se dan las diferentes relaciones entre actores sobre un mismo territorio y las tensiones presentes sobre un mismo territorio entre el estado y las comunidades representadas en las distintas organizaciones sociales, como los diferentes actores de la sociedad civil y actores armados,

generando territorialidades diversas e incluso contradictorias, que pueden ser gestadas para un mismo fin pero con medios y formas de acción diferente.

### **1.5 “La apuesta por el desarrollo territorial: la verdadera intención del control militar y la recuperación social” La minería como uno de los principales atractivos de la región.**

El Macizo se caracteriza entre otros factores por su riqueza ambiental y minera, de allí la importancia y existencia de actores con intereses privados y particulares que ven en este territorio una fuente de enriquecimiento potencial. En el departamento del Cauca para el 2011 se registraron 56 títulos mineros vigentes, equivalentes a un área de 323.317 Ha, lo que corresponde al 10,55% del territorio caucano, 64 títulos mineros están ubicados en el Macizo colombiano. La actividad minera en la subregión sur está representada por la explotación de oro, arcillas, carbón, piedras semipreciosas y materiales de construcción de río y cantera. La minería subterránea, representada por la pequeña y mediana minería de oro y carbón de subsistencia, se desarrolla particularmente en las estribaciones de la cordillera occidental.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: “Prosperidad para Todos” en el Artículo 108 dice que “La autoridad minera determinará los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales podrá delimitar áreas especiales en áreas que se encuentren libres, sobre las cuales no se recibirán nuevas propuestas ni se suscribirán contratos de concesión minera. Lo anterior con el fin de que estas áreas sean otorgadas en contrato de concesión especial a través de un proceso de selección objetiva, en el cual la autoridad minera establecerá en los términos de referencia, las contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías, que los interesados deben ofrecer”.

En el caso concreto de las zonas de estudio de la presente investigación, se presentan casos en los que los proyectos mineros vienen operando en el territorio del Macizo colombiano. Desde 2003 las comunidades campesinas de La Sierra y La Vega han observado con reserva los trabajos de la compañía Carboandes S.A., que explora, explota y comercializa no sólo el carbón, sino otros minerales como el cobre (Molano, El Espectador, 2010). Por otra parte, aparece la concesión de Hueco Hondo-Santa Lucía (ubicada en los municipios de la Sierra y La Vega - Cauca) tiene 36 kilómetros cuadrados sobre un pórfido de oro y cobre, allí la empresa ha perforado 18 pozos de exploración hasta 700 metros, emplea a 180 obreros y construye campamentos.

En San Lorenzo y Arboleda, Mazamorra Gold es uno de los seis proyectos colombianos de Gran Colombia Gold, empresa canadiense que tiene 43.000 hectáreas concesionadas en Colombia, más otros proyectos iniciando en Mali y Venezuela. Según la empresa, el proyecto Mazamorra ocupa 5.993 hectáreas de la zona de convergencia de dos cordilleras de los Andes colombianos en el norte de Nariño y presenta un gran potencial que todavía no conocen exactamente de tonelaje bruto de oro y cobre en minería a cielo abierto. La empresa informó a sus inversionistas que a principios del año 2010 tramitó todos los permisos ambientales para perforar, incluso las concesiones de agua, las cuales son provenientes de fuentes de uso público. (Notiagen, 2011).

En enero de 2010 Mazamorra Gold empezó una campaña en la que en cada operación se perforan 30.000 metros para lo cual contrató a Lowell Mineral Exploration y, después, Kluane Drilling Ltd. La empresa reportó resultados de 2,35 gramos de oro por tonelada en los promedios de las muestras en enero. Según el ingeniero Edgar Quintero, Mazamorra Gold, es viable realizar explotación minera a cielo abierto de oro desde una concentración de 1,5 gramos por

tonelada. Se necesitaría remover 20 toneladas de roca para extraer una onza (poco menos de 30 gramos) de oro.

Las plataformas de perforación diamantina de la empresa están ubicadas en San Lorenzo y Arboleda, municipios separados por la quebrada Mazamorra, de la cual la empresa deriva su nombre. Arboleda, fundado en 1859, es el municipio más antiguo de Nariño, además de ser declarado en 1971 un Monumento Nacional y Reserva Arqueológica Nacional por su contexto histórico. Arboleda fue paso obligado de las caravanas que cruzaron de sur a norte en las épocas de la conquista, colonia y la época libertadora; por el territorio pasaron personajes de la historia nacional como Antonio Nariño, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Julio Arboleda Pombo, quien murió en la vereda Olaya donde la empresa Mazamorra Gold construyó sus campamentos.

A principios del mismo año, Mazamorra Gold pidió permiso a los dueños de los predios donde iban a montar plataformas de perforación y aunque la comunidad ahora se queja de que la información dada fue muy poca, la mayoría dio permiso. «La empresa entró y empezó a hacer huecos en nuestras tierras sin consultarnos anteriormente ni explicarnos como comunidad», dice una habitante de Arboleda. La empresa se ha reunido con la gente, pero más que todo como respuesta a las reuniones de la gente que no quiere la mina, y sólo ha hablado de las ventajas, y específicamente, del periodo de exploración. «No nos dicen lo que viene después, la explotación», dice una señora de la vereda El Volador . (Notiagen, 2011).

La empresa afirma que genera más de 200 empleos directos en la zona, aunque otros en la comunidad dicen que los empleos han sido temporales, contratos de unos meses y sin garantía de continuar. Arboleda tiene una población de 8.400 habitantes y San Lorenzo casi 20.000. «La

mina no nos trae desarrollo, como la empresa dice», informa un miembro de la comunidad. «Si hay poca actividad económica independiente de la mina, si nos privan de la tierra donde sembramos, el nivel de dependencia en la mina no generará estabilidad económica a largo plazo. Es más, sabemos que la mayoría de los empleos creados son durante la fase de exploración, que duran poco, pero en la fase de explotación, los empleos son reducidos y especializados. Los minerales se agotarán eventualmente y se acabarán todos los empleos y nos quedaremos con un desierto de tierra estéril». Según Derechos en Acción, la duración de una mina en promedio es de 10 a 15 años (Notiagen, 2011).

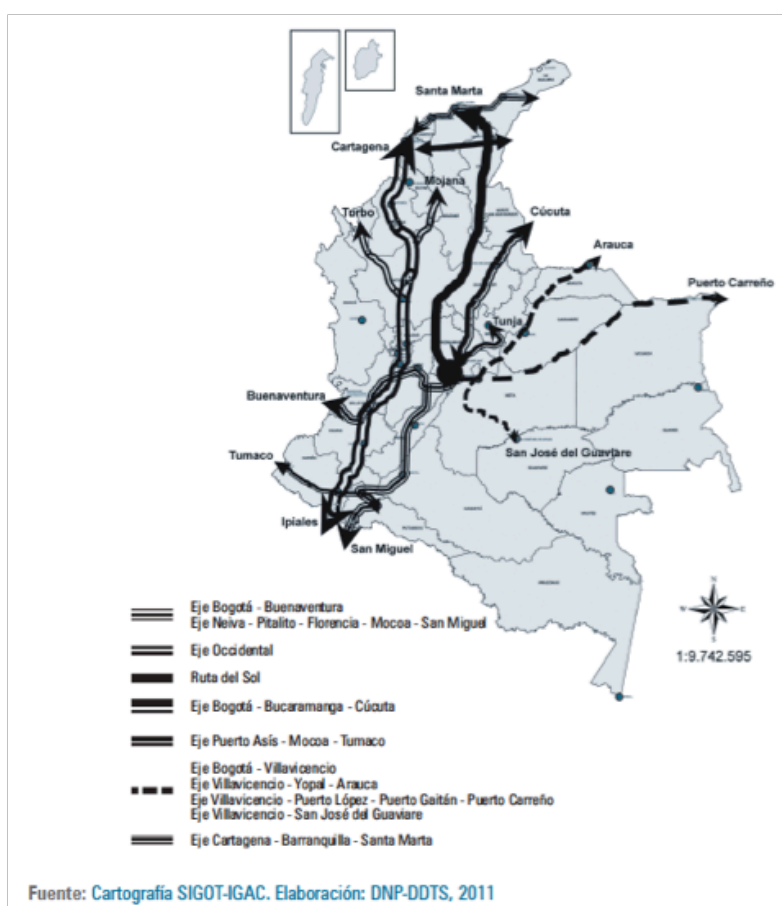
Sobre la base de la superación del llamado desarrollo desigual, el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, le apostó a la implementación de una estrategia basada en la Nueva Geografía Económica, cuyas premisa básica es: “consolidar las áreas de mayor desarrollo relativo, promover el desarrollo local de las áreas de menor desarrollo y articular dichas áreas, para aprovechar las capacidades funcionales y externalidades positivas de las primeras, de manera que irradian crecimiento y desarrollo en su área de influencia”, es decir, crear conglomerados de actividades económicas, de carácter estratégico, con fácil acceso a mercados nacionales e internacionales, lo cual significa reducir distancias y límites administrativos para favorecer alianzas publico-privadas de negocios en los territorios. De esta forma, dicho plan de desarrollo propone la conformación de 7 ejes de integración y desarrollo para la conformación de Áreas de Desarrollo Territorial (ver mapa 4)

La región del Macizo colombiano se ubica en el eje occidental que conecta al norte y al sur del territorio colombiano y que en esencia se intercepta con el eje Bogotá - Buenaventura al cual convergen los principales flujos de importaciones y exportaciones del país. Hacia el sur del país, el eje occidental posibilita integrar el desarrollo productivo del departamento de Cauca y Nariño



y conectarse con el corredor Panamericano IIRSA que vincula al país con Ecuador, Perú y los países del Mercosur. Al observar las perspectivas de integración y desarrollo propuestas en el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, queda claro que la región sur occidental y en particular los territorios objeto de la presente investigación, se prevén como zonas para el establecimiento de clusters agroindustriales y zonas de explotación minera (ver mapa 4).

#### **Mapa 4. Ejes de integración y desarrollo potenciales para la conformación de Áreas de Desarrollo Territorial**



Ejes de integración y desarrollo potenciales para la conformación de Áreas de Desarrollo Territorial. Tomado de: Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014. P. 53.

Al revisar los documentos CONPES 3461 de 2006 y CONPES 3799 de 2013, que tienen relación con las estrategias de desarrollo del Cauca, ambos instrumentos muestran coherencia con las políticas de desarrollo endógeno regional descritas en el PND 2010 - 2014. En este sentido,

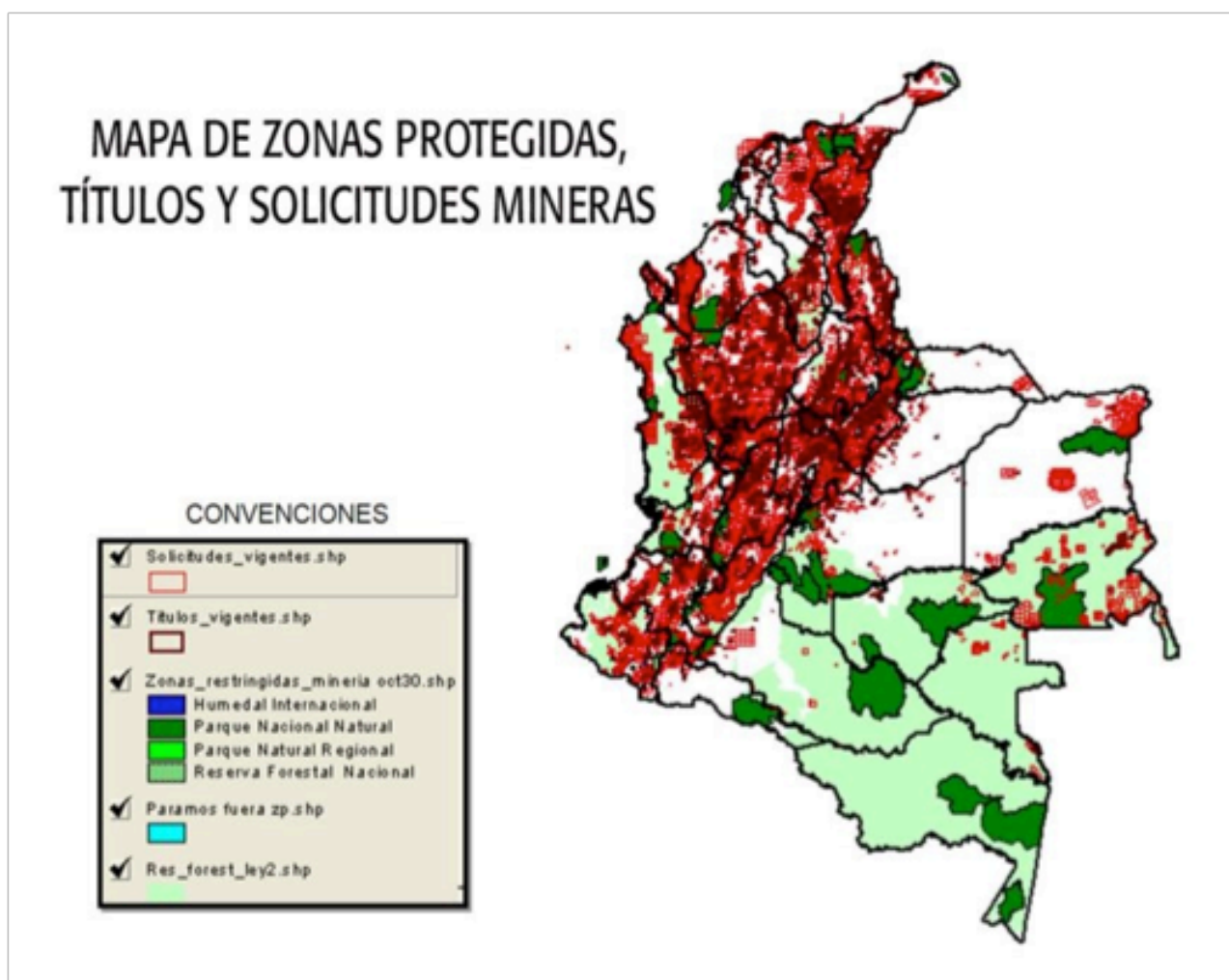
plantean la importancia de avanzar en la consolidación de un modelo de desarrollo regional que parta del reconocimiento y dinamización de las capacidades y potencialidades existentes en el territorio, mediante el fortalecimiento del mercado local y su relación con el exterior, el mejoramiento de los medios de comunicación e intercambio de bienes, servicios y conocimientos; todo esto, teniendo siempre en cuenta el uso sostenible de los recursos naturales para el disfrute del mismo por la sociedad actual y las futuras generaciones.

Si bien las distintas perspectivas de política (planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y documentos CONPES) referidas al departamento de Cauca muestran como principales derroteros tanto el desarrollo de la infraestructura vial, como la implementación de acciones para el fortalecimiento de la agroindustria de la caña y los cafés especiales, el turismo y la minería, para el caso del Macizo colombiano esta última actividad cobra gran importancia debido a las características geográficas del territorio y a la vocación agrícola de los suelos, ampliamente cuestionada desde la óptica de las entidades del estado (en los mencionados documentos de planeación) que atribuyen el deterioro ambiental de zonas estratégicas de conservación, a la degradación causada por la agricultura campesina.

Para finalizar, es necesario hacer la reflexión acerca de la importancia, ya referida, del Macizo colombiano como ecosistema estratégico para el país, en términos de su vocación productora de agua, su condición de alta biodiversidad y sus impactos potenciales en lo que a cambio climático se refiere. En este sentido, hay acuerdo en todas las fuentes institucionales y estatales consultadas (instrumentos de planeación nacional, planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, evaluación de los objetivos del Milenio para el Cauca, así como el “Programa Conjunto Integración de ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en el Macizo Colombiano” liderados por las agencias del sistema de Naciones Unidas) , en relación con la

importancia de este territorio para la sustentabilidad nacional. No obstante lo anterior y de acuerdo con lo ya expuesto en materia prospectiva para El Macizo colombiano en términos de la implementación de las estrategia de desarrollo regional previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, vale la pena preguntarse por la coherencia y corresponsabilidad entre las apuestas de este territorio y las apuestas del desarrollo territorial definidas por el Estado colombiano centradas en buena parte en la explotación minera de un territorio que en principio se quiere y se debe conservar (ver mapa 5)

### Mapa 5. Zonas Protegidas, Títulos y Solicitudes Mineras



Zonas protegidas, Títulos y Solicitudes Mineras. Recuperado en: <http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=b1b1--&s=b>

Sumado a lo anterior los principales fenómenos de violación a los Derechos Humanos en la zona de estudio tienen estrecha relación con los efectos de la confrontación armada, como el desplazamiento forzado observado entre los años 2003 y 2006. A su vez, el movimiento social y en particular hombres y mujeres dirigentes del CIMA han sido víctimas de un sin número de amenazas y detenciones arbitrarias, tanto por su trabajo en defensa de Derechos Humanos, como por las acciones de los últimos años en oposición a los procesos de explotación minera en el territorio. En varios casos estas personas, luego de poner a las autoridades en conocimiento de las amenazas de las que han sido víctimas, han tenido que desplazarse fuera del territorio como mecanismo para proteger sus vidas.

La división social que ha resultado ha sido grave. «Antes de la llegada de Mazamorra, vivíamos en paz. No había disturbios, la gente no era amenazada, ahora sí», dice un señor mayor de Arboleda. El Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) denunció públicamente en un comunicado el 12 de octubre 2011 que «los trabajadores de la mina se han convertido en un grupo que amenaza, amedrenta y agrede física y verbalmente a los habitantes de los municipios, creando un estado de miedo y crisis psicológica constante, y un cambio radical de la vida comunitaria y la convivencia pacífica tradicionales, rompiéndose el tejido social y familiar». (Notiagen, 2011).

## CAPITULO II

### **2. Movimiento, territorio y región : La región un proyecto político, el territorio el proyecto de vida de las comunidades.”(Arturo Escobar, 2010)**

La década de los noventa marcó un momento histórico en las luchas sociales y en los avances hacia el reconocimiento de comunidades étnicas en Colombia. Como resultado de las incansables denuncias y jornadas de movilización, se logró posicionar en la constitución del 1991 un marco constitucional que reconoce a los indígenas y a las comunidades afrodescendientes como sujetos políticos de derecho, se avanzó en el reconocimiento del derecho al territorio para los indígenas a través de la figura territorial de los resguardos y para los afrodescendientes con la ley 70 que incluye la creación de la figura de los consejos comunitarios.

Sin embargo, para las comunidades campesinas la situación fue diferente ya que quedaron por fuera de dicho reconocimiento. Los artículos que se refieren a la población rural, la consideran beneficiaria de algunos servicios estatales o como un sector de trabajadores, pero no les reconoce la ciudadanía plena. La ausencia de este reconocimiento político se expresa en la invisibilidad del campesinado, en las políticas públicas, la desatención estatal, la precariedad en la institucionalidad que debería velar por sus asuntos y muy serias distorsiones en los mecanismos de participación y representación política. Todo ello se suma a la falta de garantías para el campesinado en relación al derecho al territorio.

Como respuesta a estas condiciones, el sector del campesinado encontró en la movilización y la protesta social los mecanismos para presionar al Estado en el cumplimiento y reconocimiento de sus derechos:

*Desde el movimiento venimos trabajando la idea del campesino como sujeto de derechos. Nosotros empezamos a hacer un análisis sobre la legislación*

*colombiana y miramos que nosotros como campesinos prácticamente estamos a la deriva, sin reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad. Somos una comunidad que está jugando un rol importante a nivel nacional, suministramos más o menos el 70 % de la comida que se consume y viene de la finca de economía campesina, sin embargo las políticas del Estado no buscan fortalecer este sector, tratan es de acabarlo.*

Estas condiciones políticas, sociales y culturales donde convergen necesidades sentidas por las comunidades campesinas del Macizo Colombiano y un contexto político que refuerza el desconocimiento, falta de garantías y derechos, configuran apuestas políticas de mayor envergadura. El reconocimiento parte del autoreconocimiento como sujetos políticos, hecho que emerge en el marco de las acciones colectivas, integración e identificación de problemáticas y desafíos comunes, configurando y poniendo en movimiento a las comunidades campesinas en el marco de esta lucha. La falta de reconocimiento del campesinado, y por ende la lucha por el territorio, le dio otro carácter a la lucha reivindicativa de algunos movimientos sociales campesinos como el CIMA

El capítulo anterior ha permitido conocer las características geográficas, ambientales y culturales del Macizo Colombiano, pero fundamentalmente la dinámica de las estrategias implementadas del estado y el capital para apropiarse del territorio en función de sus intereses; lo que permite conocer algunas de las razones principales que dan surgimiento a un movimiento social; el presente capítulo tiene como objetivo presentar los elementos que configuran la estrategia de apropiación del territorio por parte de las comunidades organizadas vinculadas al CIMA, a través el surgimiento de un movimiento social que con el tiempo se convierte no solo en un espacio de movilización frente a una serie de demandas sociales, sino en una propuesta de construcción de

región, desde unos cimientos organizativos que han permitido pensarse en la región del Cauca y Nariño apuestas políticas, ambientales y culturales que permitan no solo dar respuesta a unas demandas sociales concentradas en carencias y ausencia estatal (siendo este un elemento de tensión constante) sino también en espacios de acción colectiva que den vida a las demandas ambientales, culturales y que permita generar nuevos espacios principalmente para las comunidades campesinas, siendo un factor movilizador, formador y constructor del territorio del Macizo Colombiano. A la vez este capítulo presenta desde dos perspectivas el proyecto de región del CIMA, el primero desde su dinámica organizativa regional, segundo desde la dinámica territorial de caso concreto de una organización vinculada al CIMA la Asociación de Mujeres y familias campesinas San pableñas. Estas perspectivas evidencia las tensiones entre la intervención del estado y el que hacer de las comunidades, que sienta también las razones de fortalecimiento constante del CIMA y de pensarse un proyecto de construcción social de Territorio-Región.

## **2.1 Antecedentes y surgimiento del Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA**

### **2.1.1 La acción colectiva como elemento de lucha social**

Los apartados anteriores permiten realizar un esbozo general de la situación social y política que caracterizó a la región del Macizo en las décadas del 80 y 90; la presencia de actores armados, la ausencia de la intervención estatal, la falta de infraestructura vial, bajos precios de los productos agrícolas, la ausencia de garantías y la producción de amapola y coca, entre otras tensiones ya mencionadas que permiten comprender cómo la lucha social se convierte en una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

En la década de los años ochenta, se dan los primeros avances para la creación de un Comité que movilizará los sentires y necesidades de las comunidades, en principio con comunidades sentadas en el sur del departamento del Cauca y posteriormente se sumaron comunidades del norte de Nariño. En un contexto marcado por la inconformidad, el abandono estatal y la violencia, dichas comunidades decidieron implementar acciones de denuncia y movilización con el fin de lograr la atención del Estado e inversión social para mejorar sus condiciones de vida. De esta forma, el proceso que se gestó con la semilla de la inconformidad, germinó en un proyecto de integración regional expresado en comunidades organizadas que comenzaron a luchar por reivindicaciones sociales, trascendiendo hacia la construcción de una apuesta política diferente para su región, basada en la defensa del territorio y el reconocimiento del campesinado como sujeto político.

Las primeras expresiones de denuncia se dieron a mediados de los ochenta a través de la movilización y estuvieron protagonizadas por las poblaciones de algunos municipios del Sur del Cauca: la Sierra, Almaguer, Timbío, Sotará, Santa Rosa, San Sebastián, Balboa, Patía, Rosas y Mercaderes. El objetivo fue, manifestar el rechazo a las pésimas condiciones en las que vivían las poblaciones. La movilización de aquel entonces es recordada por las comunidades como “la marcha de la bota caucana” y como el inicio de este proceso. “La organización y preparación de esta acción hizo que los líderes y las comunidades colocaran sus recursos políticos, humanos, y económicos en función de los objetivos planteados, dejando en espera muchas de sus prioridades vitales como sus fincas, familias y trabajos. Sin embargo fue más fuerte la conciencia de que “si no se lucha hoy, no habrán cambios a futuro para las nuevas generaciones.”



Sumado a lo anterior en 1987 y 1988 se dan diferentes marchas en los municipios de La Vega y Almaguer, en las que se firman algunos acuerdos con el Gobierno nacional, acuerdos que son incumplidos y dan paso a movilizaciones hacia Popayán.

En 1989 toda la comunidad campesina del municipio de Almaguer se une para la toma de la cabecera municipal en una histórica jornada que duró nueve días, donde se crea la Coordinadora Campesina que sería la encargada de convocar el Primer Cabildo Popular en abril 8 de 1.990 y el segundo Cabildo Popular el 1 y 2 de noviembre del mismo año en el municipio de Almaguer, es aquí donde se gesta, nace y se reproduce la idea de tener una expresión organizativa propia de las comunidades de los municipios que integran el Macizo Colombiano, idea que fue concretándose posteriormente en reuniones sucesivas en varios municipios y legitimada en asamblea de delegados en ese entonces corregimiento de Sucre Municipio de Bolívar (hoy municipio de Sucre) el 31 de Marzo de 1.991. Aquí nace El Comité de Integración del Macizo Colombiano “CIMA” creado para sacar adelante las tareas acordadas y organizar y coordinar el Primer Paro Cívico Regional. Eran 20 Voceros encargados de trazar las políticas y conducir el Movimiento constituyéndose uno de los primeros embriónes organizativos en la región.

Parte de esta historia de acción colectiva que esporádicamente se dio a través de marchas, paros, reuniones y asambleas en los diferentes municipios que conforman el macizo de los departamentos del Cauca y de Nariño se fue consolidando en el Movimiento de Integración del Macizo Colombiano, que se constituye con unos principios que en adelante delimitaran el accionar del movimiento. En 1991 además de la participación de otros sectores sociales como educadores y profesionales de la salud, se vincularon al proceso poblaciones del norte del departamento de Nariño (Leiva, Rosario, San Pablo, San Lorenzo, La Cruz, la Unión, Colón, Taminango). Todos estos paros, marchas, movilizaciones y cabildos populares muy localizadas

inicialmente en cada municipio fueron el embrión, la escuela y el camino de todo el proceso de integración en la región. (Duarte, Salcedo Y Pinzón, 2013, P. 113).

El proceso de construcción y organización del CIMA ha estado marcada no solo por las demandas sociales que han sido su pilar fundamental y la razón de organizarse, sino también por la respuesta del estado frente a dichas demandas, lo cual se ha convertido en hitos organizativos de la región en tanto la han fortalecido, desaprendido y construido desde las caídas pero también desde los aciertos de quienes han pertenecido y participado en su proceso.

#### **2.1.1.2 La masacre de los Uvos**

Uno de los hechos más significativos para la organización y que dan fuerza para su fortalecimiento es lo ocurrido en el mercado de los Uvos en el 91: “El 7 de abril de 1991 miembros del Pelotón Águila Dos, perteneciente a la Compañía “A” del Batallón de Infantería N° 7, “José Hilario López” del Ejército Nacional, masacraron a 17 campesinos que venían del mercado de Los Uvos, un corregimiento del municipio de La Vega sobre el Valle del Patía. El objeto del operativo fue amedrentar a los campesinos e impedir la movilización que se estaba organizando y que de todos modos tuvo lugar meses después: “Los campesinos bloquearon la vía Panamericana durante 10 días y obligaron al gobierno de Gaviria a concertar soluciones sobre vías, educación, salud, y a diseñar programas alternativos al cultivo de coca. El respeto a la vida — en referencia a la masacre de Los Uvos — encabezó las demandas”. (Molano Tomado del espectador, 2011).

Este hecho entre otros permitió fortalecer la organización, en tanto fue uno de los acontecimientos que dio fuerza para continuar las movilizaciones durante esta década que más adelante darían fruto a la consolidación de la organización con un sentido político y regional.

Luego de este primer bloqueo de la vía Panamericana y debido al incumplimiento de los acuerdos entre el gobierno de César Gaviria y el CIMA, se da una nueva movilización en 1996, la cual tampoco obtiene mayor respuesta por parte del estado en torno a las demandas presentadas; este escenario sumado a las condiciones sociales, económicas y políticas que se presentaban en la región permiten dar fuerza a la propuesta de que la movilización es uno de los principales pilares de la lucha social; se piensa entonces en una movilización que logre llamar la atención de la comunidad local y nacional, para lo cual se empieza a trabajar desde las veredas y corregimientos de los diferentes municipios asociados al CIMA La toma de la vía Panamericana.

### **2.1.1.3 La marcha del 99**

“La hora cero fue el 31 de octubre 1999”, más de 15.000 campesinos e indígenas bloquean nuevamente la vía Panamericana tanto al sur (a 100 kms), como norte (a 32 kms) de la capital del departamento del Cauca durante 26 días. Esta movilización surge a raíz de las demandas que no habían sido solucionadas en gobiernos anteriores y que al parecer en el gobierno de Andrés Pastrana, tampoco tendrían pronta solución. La toma de la vía panamericana es un elemento estratégico en la movilización del CIMA y muchas otras organizaciones sociales de la región, en tanto representa una malla vial fundamental para la economía no solo de los departamentos contiguos sino del país en general “la vía panamericana se constituyó en una compañera estratégica de la movilización, no solo como elemento importante para una acción colectiva significativa y contundente sino para la visibilización, para consolidar una imagen social y política.

Aquí hay que resaltar la importancia e impacto que tiene bloquear una vía como la panamericana, ya que obedece a un proyecto que se materializó en el siglo XX, basado en el principio de la nación para alcanzar el progreso, el bienestar y la comunicación, en la cumbre del

pensamiento del siglo XIX y que proponía estrechar y fortalecer los lazos de amistad entre los países del continente. En este sentido, al ser una vía históricamente constituida para el “progreso”, para la movilidad, el intercambio y el establecimiento de relaciones tanto comerciales y culturales entre los pueblos, es un punto crítico a la hora de bloquear dichas relaciones y movilidad, afectando el “normal” desarrollo de las economías locales, regionales y también nacionales, donde los grandes gremios y monopolios económicos tienen sus inversiones, a quienes el bloqueo no les convendría y quienes harían presión frente al Estado para defender y cuidar sus intereses económicos”.( Duarte, Salcedo Y Otros, 2013, P. 114).

Después de una semana, el país ya estaba sintiendo los efectos del paro, que empezaba a ser noticia en los medios de comunicación, mientras la represión en contra de la población por parte del gobierno no cesaba. No obstante, las comunidades resistieron hasta lograr la firma de acuerdos el 25 de noviembre de 1999, momento en que el gobierno nacional se comprometió entre otras cosas a la asignación de 100.000 millones de pesos para inversión social y garantías para la movilización y protección de los derechos humanos (Revista Semana, 12 diciembre 1999), el gobierno de Pastrana tuvo que ceder y comprometerse en un nuevo acuerdo que tampoco se cumplió.

Esta dinámica de movilizaciones, paros y tomas de vías protagonizadas por las comunidades fueron las acciones que permitieron configurar escenarios de articulación, integración e identificación de elementos comunes entre ellas, tanto en sus problemáticas como en sus alternativas de solución. Esta primera generación de acciones, basadas en reivindicaciones sociales y exigibilidad de la presencia del Estado, estuvo caracterizada por su espontaneidad, por la dispersión en los objetivos y por transitar entre lo local y lo regional, proyectando escenarios de mediano plazo que fortalecieron la configuración del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA; Es la época en la que surge el principio de lo colectivo como eje

fundamental para avanzar y trascender de una acción puntual de denuncia hacia un proceso social organizativo. El éxito en relación al cumplimiento de los acuerdos fue muy bajo. Según una de las líderes de San Pablo (Nariño), fue importante el paro del 99 pero al revisar el nivel de cumplimiento en los acuerdos con el gobierno a la fecha (junio de 2011), se evidenció que éste no había cumplido ni siquiera con el 20% de lo pactado:

*Esto responde a la falta de voluntad política de los representantes del gobierno y a los cambios sufridos en la política de Estado dada por los cambios de gobierno: estos acuerdos se firmaron en el periodo de gobierno de Ernesto Samper, transitaron en el de Andrés Pastrana y finalizaron en el de Álvaro Uribe Vélez*

las comunidades exigieron, en principio, presencia del Estado e inversión para la región, después de varias movilizaciones, acuerdos y pliegos negociados, el gobierno se comprometió con varios puntos, sin embargo el que se cumplió con mayor rapidez y contundencia fue la presencia del Estado, pero no como las comunidades creían podrían mejorar las condiciones para una vida digna, no llegaron escuelas, carreteras, hospitales para beneficio de las comunidades, llegó todo el sistema militar a la región y la agudización del paramilitarismo. Sin embargo para este momento ya existía un acumulado organizativo y un movimiento social regional en proceso de fortalecimiento.

## **2.2 Estrategia organizativa: tuvo más fuerza de lo esperado, el territorio eje central de lucha.**

Entre los principales logros de esta década de movilizaciones, se identifica la interacción que lograron instalar y sostener las comunidades comprometidas para mantener la interlocución con el gobierno, exigir cumplir los acuerdos y dar continuidad a un proceso organizativo que

trascendió de un episodio de movilización hacia estrategias de organización de las comunidades sostenidas en el tiempo, orientadas a la contribución y la configuración de un sujeto colectivo, pero también a su reconocimiento como actor político legítimo con capacidad de interlocutar de manera directa, implementando la movilización como principal mecanismo de exigibilidad y presión para lograrlo.

De lo anterior se pudo concluir que El CIMA se configuró como un movimiento social cuando las comunidades comprendieron que no sólo a través de acciones puntuales de denuncia se lograba la transformación y solución de sus problemáticas, sino que era también necesario configurar escenarios de articulación desde sus diferentes territorios, así como implementar formas propias de organización, crear grupos, asociaciones y comités. Allí comprendieron que movilizarse no es solamente salir a un paro: *“la movilización la entendemos como un cambio de pensamiento y poner a mover a la gente en sus fincas, veredas y municipios”*.

“Han sido ejemplo de procesos de participación, organización local, movilización e integración regional a través de mecanismos de participación comunitaria, ciudadana y política. Mediante asambleas, cabildos populares, paros, encuentros y marchas han generado autonomía frente a los partidos políticos tradicionales y han logrado la interlocución directa con el Estado para exponer las necesidades básicas insatisfechas por parte de las instancias gubernamentales nacionales, departamentales y municipales”. (Ministerio de Cultura, FUNDECIMA, 2000, p.19).

*Al principio la propuesta era más reivindicativa, ya después se vuelve más política, empieza a tener la noción del territorio del Macizo colombiano, y se empieza la noción de la defensa del territorio. La construcción de la identidad campesina maciceña y, de un desarrollo propio, más que desarrollo, más allá del término capitalista de desarrollo, una propuesta de vida digna como es la consigna del CIMA, una propuesta de sociedad que tenga todo lo básico que una*

*sociedad tiene, infraestructura, comunicaciones, pero que se identifique también como macizo. Defender el macizo es una propuesta propia de agricultura que no dañe el medio ambiente, que no dependa de las multinacionales ni del comercio internacional, sino que resuelva problemas de alimentación, pero que también en su ejercicio de producción no degrade el suelo, agua, el bosque, la biodiversidad, sino que más bien la conserve. Unos ciudadanos que sean conscientes que están viviendo en territorio que hay que defenderlo. Defenderlo de nosotros mismos en el ejercicio mismo de producción. Unos ciudadanos que entiendan, que los recursos del estado son para la inversión social y no para la politiquería. (Líder CIMA, San Pablo Nariño, 2011)*

El CIMA se concentró en quince municipios del Macizo Colombiano, con presencia principalmente en los departamentos del Cauca y Nariño, conformada por los Municipios de: Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Sucre Florencia, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Patía, Piamonte, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Sotará y Timbío. En total esta región cubre una superficie de 10.349 km<sup>2</sup>, aproximadamente el 34% del área departamental solamente del Cauca. Para Nariño, San Pablo, Sanlorenzo, La Unión, Cólón, Taminango, La Cruz. (Ver mapa 6) (Plan de Desarrollo Regional de las culturas del Macizo y suroccidente colombiano, 2000, p. 16)

## Mapa 6 . Comunidades que participaron en movilizaciones 1991.1999 en el Macizo Colombiano

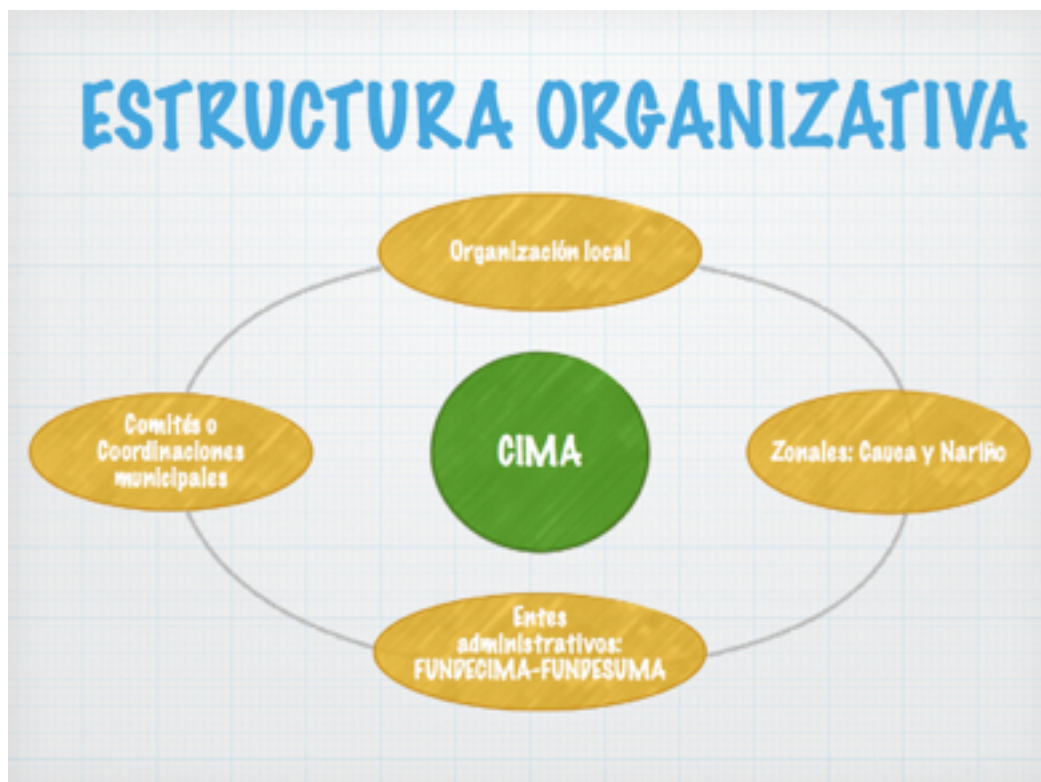


Comunidades que participaron en movilizaciones 1991.1999. Elaboración propia con base en la cartografía de Fundación del macizo-Casa del Cauca.

El mapa 6 expresa la dinámica expansiva del CIMA en relación a su área de incidencia en el sur del Cauca y Norte de Nariño, hasta el 2011 ( periodo de estudio de esta investigación) se identificó que no existen municipios de otros departamento vinculados al CIMA, lo que indica que su fuerza organizativa esta concentrada en estas áreas. Sin embargo la presencia y expansión de CIMA se expresa y se compone por personas y comunidades organizadas en cada territorio desde lo veredal, municipal y regional que adoptan o crean figuras organizativas que los representa al interior y al exterior del movimiento. ( ver figura 1)



La dinámica y composición de las instancias organizativas, que generan un proceso de articulación, cimienta la integración regional y configuran la unidad que responden a objetivos, roles y principios que configuran el proyecto de región del CIMA. En este sentido se define al CIMA como un movimiento social compuesto por varias organizaciones sociales que se han gestado en el Macizo colombiano, existen de carácter veredal que se articulan en una organización municipal. A nivel del departamento se crearon las instancias zonales ( Cauca, Nariño), para identificar las organizaciones que hacen parte del norte de Nariño y del Sur del Cauca. Como parte de la estrategia administrativa, técnica y financiera del CIMA se crearon las instancias administrativas correspondientes a cada zonal FUNDECIMA y FUNDESUMA. ( ver figura 1)



**Figura 1 .** Representación gráfica de la estructura organizativa del CIMA. Fuente. elaboración propia con base en la información recopilada en trabajo del campo.

Las organizaciones veredales son aquellas que están conformadas por familias campesinas y/o mujeres que habitan en zonas rurales de los municipios y que han decidido crear una organización que articule y promueva sus objetivos e intereses. Son quienes a través de la relación con su espacio vital, el trabajo en la finca, proyectos comunitarios, planean, deciden e implementan acciones en función de garantizar las condiciones dignas que permiten reproducir la vida en este espacio.

Las comunidades deciden a partir de sus conocimientos el manejo de su territorio, lo cual se expresa en la relación de cómo usarlo, qué y cómo se produce, el uso del agua, la planificación de sus fincas, sus proyectos productivos colectivos de autogestión y sostenimiento para las familias vinculadas a los procesos organizativos de carácter veredal, creación de redes y alianzas para una economía solidaria, la implementación de formas participativas para la toma de decisiones, garantizando que todo lo que sea implementado sea consultado, pero sobre todo construido a partir de las discusiones y prioridades de estas comunidades; discusiones, decisiones y acciones que están guiadas por conocimientos, saberes propios de su entorno natural y su relación con él. El conjunto de estas organizaciones creadas en las veredas se articulan en una organización de carácter municipal, a través de la cual se construyen de manera colectiva los principios, planes, proyecciones y gestión de sus necesidades, y propuestas.

Las instancias Zonales son aquellos escenarios de representación legítima, compuesta por delegados o delegadas por las comunidades para liderar la vocería del movimiento, ponen las discusiones teórico políticas, tanto fuera del municipio como de la región, siempre en relación con las organizaciones veredales y municipales. Mantienen y propician escenarios y espacios de discusión tanto al interior del movimiento como en relación a otros actores, por ejemplo, los o

las delegadas a las instancias zonales son las personas responsables de interlocutar y gestionar espacios de incidencia con las instituciones del Estado a nivel departamental y nacional

Finalmente, los entes administrativos tienen la responsabilidad de gestionar y administrar los logros del CIMA en términos de acuerdos con el gobierno, proyectos de cooperación internacional, convenios institucionales, programas, etc. Los cuales se implementan en articulación con las organizaciones municipales y veredales. Estas instancias administrativas están constituidas bajo la figura jurídica de ONG, sin embargo, es importante resaltar que están vinculadas directamente a la estructura organizativa del CIMA, lo que hace que su rol esté enfocado a la viabilización y beneficio de las organizaciones vinculadas al proceso. Se crearon como entidades de apoyo técnico, de incidencia y ejecución de proyectos ante las formas tradicionales de administración pública en la región.

Estas instancias son de mucha importancia porque han permitido entablar una relación directa con terceros como las agencias de cooperación internacional y la implementación de programas del gobierno como los Laboratorios de Paz. Sin embargo, al estar vinculadas y orientadas por el CIMA, han garantizado que las comunidades organizadas tengan el papel de ejecutoras de estas gestiones, expresadas en proyectos, programas, capacitación, inversiones en infraestructura etc.

Ente 1996-1999 se elaboró El "plan de vida, agua y dignidad" a través del apoyo técnico de FUNDECIMA. Expresan la visión de las comunidades, planificación y proyección de sus territorios. Se integran los Programas con lo Sectorial y Poblacional en 4 Planes Estratégicos Programáticos componentes del Plan de Vida, así: PLADAMASUR (Plan de Desarrollo Agroambiental del Macizo y Sur de Colombia), PLADEMACO (Plan de Desarrollo Educativo

del Macizo Colombiano), Plan de Integración de las Culturas y Pueblos del Macizo, Estrategia de Vida y Defensa del Territorio.

No obstante, estos documentos de planeación para la región desde la perspectiva CIMA definen a la cultura e identidad como dos elementos transversales y articuladores de la dimensión social, ambiental, económica y política. Esto es considerado como un nuevo desafío que requiere las capacidades creadoras e imaginativas de sus comunidades, organizaciones culturales y sociales para avanzar en la construcción del concepto de región que rompa con el paradigma tradicional de lo cultural para construir región, convivencia y paz. El desafío final consiste en pasar a la construcción colectiva de los saberes contextualizados y humanizantes desde la región, teniendo en cuenta la complementariedad: saberes populares y académicos a partir del encuentro, diálogo concertación, relaciones mutuas y el entendimiento para descolonizar las verdades acabadas y superpuestas en todos los órdenes (culturas, educación, comunicación, etc.) por los diferentes vehículos como la iglesia, la escuela, la familia y otros.

Estos ejercicios de planificación del territorio tanto a nivel regional, local como sectorial, expresan la ruta a seguir tanto desde las comunidades para avanzar en las transformaciones hacia una vida digna, como el deber que tienen los gobiernos en la formulación de políticas públicas e inversión en esta región. Se convierten en un instrumento de negociación, gestión y ejecución que contribuye a fortalecer la estrategia de planificación comunitaria orientada al desarrollo regional. Son logros de la movilización y acuerdos con el gobierno, los planes de vida si bien no son el único fin, son una herramienta que permite la exigibilidad y la ruta para el reconocimiento de sus derechos.

Otro de los factores que surgieron gracias a las movilizaciones de finales de los 90 son los acuerdos comunitarios que se construyeron como resultado de las jornadas de movilización y de encuentro, los cuales, fueron elevados a la categoría de *principios* que guían la toma de decisiones en las diferentes instancias y escalas geográficas de organización.

Estos principios se expresan en cuatro criterios:

- *La movilización*, pues se encarna la decisión de tomar las transformaciones del Macizo en las propias manos, moviendo pensamiento, propuestas y gente con la cual se presenta ante los gobiernos nacionales, regionales y locales, para debatir el futuro del territorio.
- *La vocería propia*, que es la certeza y la confianza en que sólo se podrá decir los sentires mediante una interlocución directa de las comunidades y que las vocerías son las palabras de la comunidad y no de personas.
- *La identidad y el lenguaje*, mediante el cual expresamos en nuestras propias palabras la alegría de ser maciceños, campesinos, afros e indios; con nuestros ritmos musicales, con nuestros símbolos, con nuestras danzas, con nuestros mitos, leyendas y todas la expresiones artísticas que nos permiten reflejar un pensamiento y un sentimiento, es decir un proyecto de vida”.
- *La democracia popular*, la toma de decisiones es construida desde las comunidades, las asambleas comunitarias son las que determinan lo que hacer en los *mandatos*, convertidos en planes de vida y planes de desarrollo alternativos.

## **2.2 En tiempos de seguridad democrática: Control territorial vs arraigo territorial**

La década del 2000 marca un cambio en el contexto social, cultural y político del país y especialmente de la lucha social en Colombia. Para el caso puntual del departamento del Cauca y Norte de Nariño, como ya se presentó en el capítulo anterior la presencia de grupos paramilitares y las políticas de seguridad democrática que hacen parte del Plan Nacional de

Desarrollo 2002-2006, 2006-2010 marcaron el rumbo de la organización social y de la generación de nuevas demandas sociales. El Informe de luchas sociales en Colombia realizado por el equipo de movimientos sociales del CINEP, muestra la dinámica entre 1975 y 2013 de las protestas sociales. Llama la atención la variación entre los años 2000 y 2005, pasando de aproximadamente 650 expresiones de protestas sociales para finales de la década de los 90's a un promedio de 300 en 2005, lo cual refleja una caída del 50% en la lucha social del país. ( Informe Especial CINEP, Abril 2013, p.p 7)

La presencia de grupos paramilitares se da a partir del 2000 en el que el Bloque Calima de las autodefensas hizo su entrada al Cauca. “desde ese año se militarizó y paramilitarizó la región. Uribe inauguró el Batallón de Alta Montaña Benjamín Herrera con 1.200 hombres en San Sebastián; el bloque Calima de las AUC, a decir de Velosa —el comandante H.H.—, tuvo entre sus ideólogos prestantes políticos caucanos”(Molano tomado de El Espectador, 2011). Dejó a su paso un recorrido de masacres y asesinatos en el Norte y Centro del departamento para luego expandirse en 2001 hacía la cuenca del Río Patía. Luego de su proceso de desmovilización en diciembre de 2004, los paramilitares siguieron operando como Rastrojos y Águilas Negras. Por parte del gobierno, en el Norte del Cauca se implementó la estrategia de los Centros de Consolidación de Acción Integral y a la vez incrementaron las bases militares en el Centro y Sur del departamento. Como sucedió en otras regiones (como en el Urabá con la palma, y en los Montes de María con la teca) después de los paramilitares llegaron al Macizo empresas nacionales y extranjeras en busca de recursos naturales; en el caso del Macizo, de oro y otros metales preciosos (Tenhoff, Consultado en La Silla Vacía, 2013).

*“El paramilitarismo empezó a regarse, se instalaron y amenazaron a la gente. La gente se llenó de pánico y fue muy notorio que algunas instituciones ayudaron a que llegaran, la fiscalía, la*

*policía y el ejército no hacían nada. Fue muy extrema la represión”* (líder de la Coordinadora Campesina de mujeres y familias San Pablén, Nariño, 2011)

Durante este período la implementación de la Política de Seguridad Democrática y la intensificación de la confrontación armada entre el Estado con las guerrillas, se denunciaron por parte de los procesos organizativos, movimientos sociales y cualquier expresión de lucha social acciones de represión, estigmatización a sus líderes, asesinatos, encarcelamiento de dirigentes y territorios militarizados.

Los justificantes expuestos por el gobierno nacional para sostener su estrategia de recuperación del territorio coinciden con los argumentos que las comunidades del Macizo Colombiano manifestaron en sus primeras expresiones de lucha: débil presencia del Estado, violación de derechos humanos, población desplazada y desarraigada por el conflicto social y armado, creación de grupos armados. Sin embargo, las visiones y las estrategias para solucionar estos problemas son planteadas desde perspectivas diferentes.

La estrategia de recuperación del territorio por parte del Estado se dio a través de la militarización y por ello es una de las primeras fuentes de tensión entre el Estado y las formas de apropiación y control por parte de las comunidades. Para el objetivo del gobierno nacional no solamente las guerrillas eran un problema para el control del territorio, sino todo proyecto político que se oponga al ingreso de multinacionales y desarrollo de proyectos económicos, las comunidades organizadas también fueron un objetivo y víctimas de la política militar y paramilitar durante este periodo.

Hombres y mujeres dirigentes del CIMA fueron víctimas de un sin número de amenazas y detenciones arbitrarias, tanto por su trabajo en defensa de Derechos Humanos, como por las acciones de los últimos años en oposición a los procesos de explotación minera en el territorio, abiertamente denunciaron la situación de violación de derechos humanos y los obstáculos para avanzar en su proceso organizativo. En varios casos estas personas, luego de poner a las autoridades en conocimiento de las amenazas de las que han sido víctimas, han tenido que desplazarse fuera del territorio como mecanismo para proteger sus vidas. Durante el primer periodo de gobierno de Uribe Vélez las condiciones políticas no estaban dadas para implementar acciones directas de denuncia, paros, movilizaciones y mecanismos que en la década de los noventa se habían implementado. En este escenario surgió la necesidad de transformar y crear mecanismos de resistencia y permanencia.

Empero los efectos de la militarización y paramilitarización en la región son de diferentes niveles; *“Nosotros sabíamos que era una pelea de burro amarrado con tigre”*. Como lo manifiestan algunos líderes del CIMA, es una lucha que se plantea en condiciones desiguales, las comunidades solamente cuentan con sus iniciativas organizativas, productivas, participativas, sin embargo la capacidad de crear redes, movimientos y procesos de unidad con otros sectores y comunidades les ha permitido configurar un sujeto político que supera los casos aislados de resistencia y organización, para convertirse en una fuerza en los territorios. Bajo este contexto las comunidades le apostaron a la permanencia en el territorio y a fortalecer sus bases organizativas, es decir a partir de las escalas geográficas más pequeñas, mantener la organización social resultó mucho más estratégico para las comunidades. A diferencia de años anteriores organizarse por núcleos pequeños en lo veredal y municipal generó mayor apropiación y arraigo por parte de las comunidades campesinas.



Lo anterior permite dar cuenta de que las relaciones de los actores inmersos en el territorio son más complejas que lo que aparece a primera vista. Existe una relación estrecha entre el control territorial por parte de los actores armados legales e ilegales sus economías y los intereses por la apropiación de estos territorios para la explotación de recursos naturales. Recuperar el territorio a través de la fuerza militar ha puesto a las comunidades que históricamente han lidiado con el conflicto social y armado en medio de disputas territoriales entre estos actores, que a la vez juegan un papel activo en la defensa de su vida y territorio como un actor más, si bien no armado presente y arraigado a su territorio con legitimidad y autonomía.

Según Oslender (2010) en el marco de la reivindicación del territorio, cuando las comunidades alcanzan el reconocimiento oficial de los territorios como las comunidades afros e indígenas, se crean autoridades territoriales diferentes a las del gobierno nacional en el espacio del Estado-Nación que se superponen las unas con las otras a lo que denomina como territorialidades superpuestas, desafiando esquemas de control y soberanía unidimensionales.

En este sentido, si bien los impactos en el movimiento social en el período de Álvaro Uribe son de gran envergadura y los grandes escenarios de incidencia se quedaron pausados, en los escenarios locales y regionales las comunidades encontraron mecanismos de resistencia que les permitieron avanzar en uno de los desafíos más grandes de los movimientos sociales; mantener la base social arraigada a sus territorios y principios sosteniendo objetivos comunes; este período permitió que las organizaciones se fortalecieran internamente y fortalecieran sus bases. Las diferentes comunidades indígenas, campesinos, negras y los sectores populares, implementaron estrategias de organización y formación con sus comunidades, reafirmando su compromiso por el cambio social.

Resultado de esto son las grandes movilizaciones y configuración de movimientos sociales nacionales, donde convergen y se articulan muchas de las organizaciones sociales del país. Estos avances se pueden ver reflejados en la fuerza y en la representación que tienen las diferentes expresiones sociales y populares en el país en la década del 2000.

### **2.2.1 Organizaciones y movimientos sociales del Cauca y Norte de Nariño, las expresiones comunitarias frente a las necesidades estatales. El CIMA Y otras expresiones organizativas en la Región.**

Los departamentos del Cauca y Nariño han estado marcados por la confluencia de movimientos sociales en representación de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que habitan este territorio; si bien el CIMA se ha ocupado de la agrupación de las diferentes organizaciones principalmente campesinas que tienen presencia en los municipios ya mencionados, en otros lugares han surgido otros movimientos que con historias diversas se unen en la lucha por la defensa del territorio. Es de recordar que las comunidades indígenas amparadas por la ley del 91 se organizan a través de resguardos articulados en un Cabildo Mayor, a su vez cuentan con la participación en el CRIC como una de las organizaciones indígena más importante del Cauca (aunque su mayor representación no se da en el Macizo). Por su parte las comunidades negras se han organizado en comunidades étnicas amparados por la ley 70.

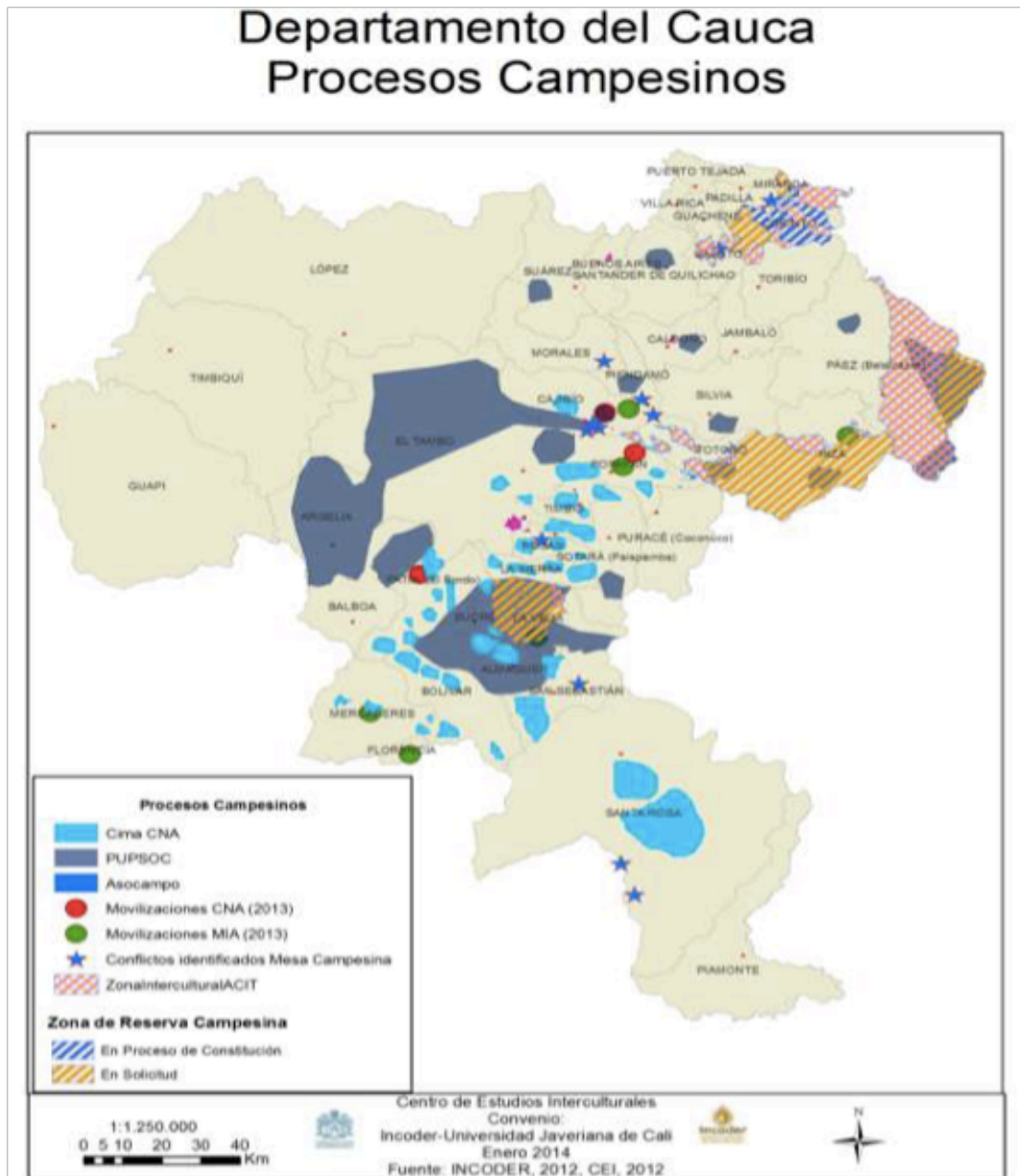
Las comunidades campesinas por su parte no solo se organizan por la defensa del territorio y la respuesta a unas demandas sociales, sino también al reconocimiento de estas comunidades como sujetos políticos; es conveniente resaltar la presencia de otros movimientos sociales con reivindicaciones y apuestas sociales hacia las comunidades campesinas. ( ver mapa 7)

El Pupsoc empezó como coordinación de experiencias campesinas y sociales en noviembre de 1999. Nació en el departamento del Cauca y se proyectó a los departamentos de Valle, Nariño y

Putumayo. En este último ha servido para crear Corposur, que hoy se extiende a los departamentos de Caquetá, Huila y Tolima. Los temas de discusión y lucha del Pupsoc son: i) la soberanía y la autonomía alimentaria; ii) la tierra para los campesinos, comunidades negras e indígenas; iii) la recuperación de la educación y la salud como derechos del pueblo; iv) la defensa de los derechos humanos orientada a la construcción del derecho del pueblo trabajador y explotado; v) la defensa de los recursos naturales, la suspensión de la erradicación forzada de los llamados cultivos ilícitos; y vi) el intercambio humanitario, la salida política y negociada al conflicto social, político y armado que afronta el país. (Duarte, Salcedo, Pinzón, 2015, p. 97).

Por su parte la ANUC fue creada por el Gobierno nacional en el año de 1967, mediante el Decreto 755, y reglamentada en la Resolución 61 de febrero de 1968 del Ministerio de Agricultura. Impulsada por el Gobierno de Lleras Restrepo, promueve la organización del campesinado en un movimiento amplio, como aliado principal de la burguesía reformista con miras a presionar a los terratenientes para que se comprometan con la redistribución de los grandes latifundio. En un comienzo el trabajo de la ANUC se concentraba en el centro del departamento (El Tambo, Timbío, Morales), pero hacia el año de 1973 el trabajo organizativo se extendió a los municipios del Macizo Caucaño: Patía, Bolívar, Almaguer, La Vega, Mercaderes y Balboa, y hacia el norte del departamento: Santander de Quilichao, Caloto y Puerto Tejada.

## Mapa 7 Departamento del Cauca, Procesos campesinos



Departamento del Cauca, Procesos campesinos. Tomado de : Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca. 2013

Es de Resaltar que durante la década del 2000 a nivel nacional se llevaron a cabo una serie de movilizaciones de los sectores indígenas, campesinos, afrodescendientes, estudiantiles y sindicales que componen el mapa organizativo y político nacional en el período del 2006-2011.

Se llevó a cabo la consulta popular contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, las tres movilizaciones políticas más fuertes de protesta social al Gobierno de Uribe Vélez (2002-2010), el Congreso Indígena Popular (2004-2006), la Movilización Nacional Agraria y popular (2007), la Minga de Resistencia (2008), el Congreso de los Pueblos (2010), la Marcha Patriótica ( 2010) y la reactivación de la Asociación Nacional Zonas de Reserva campesina – ANZORC

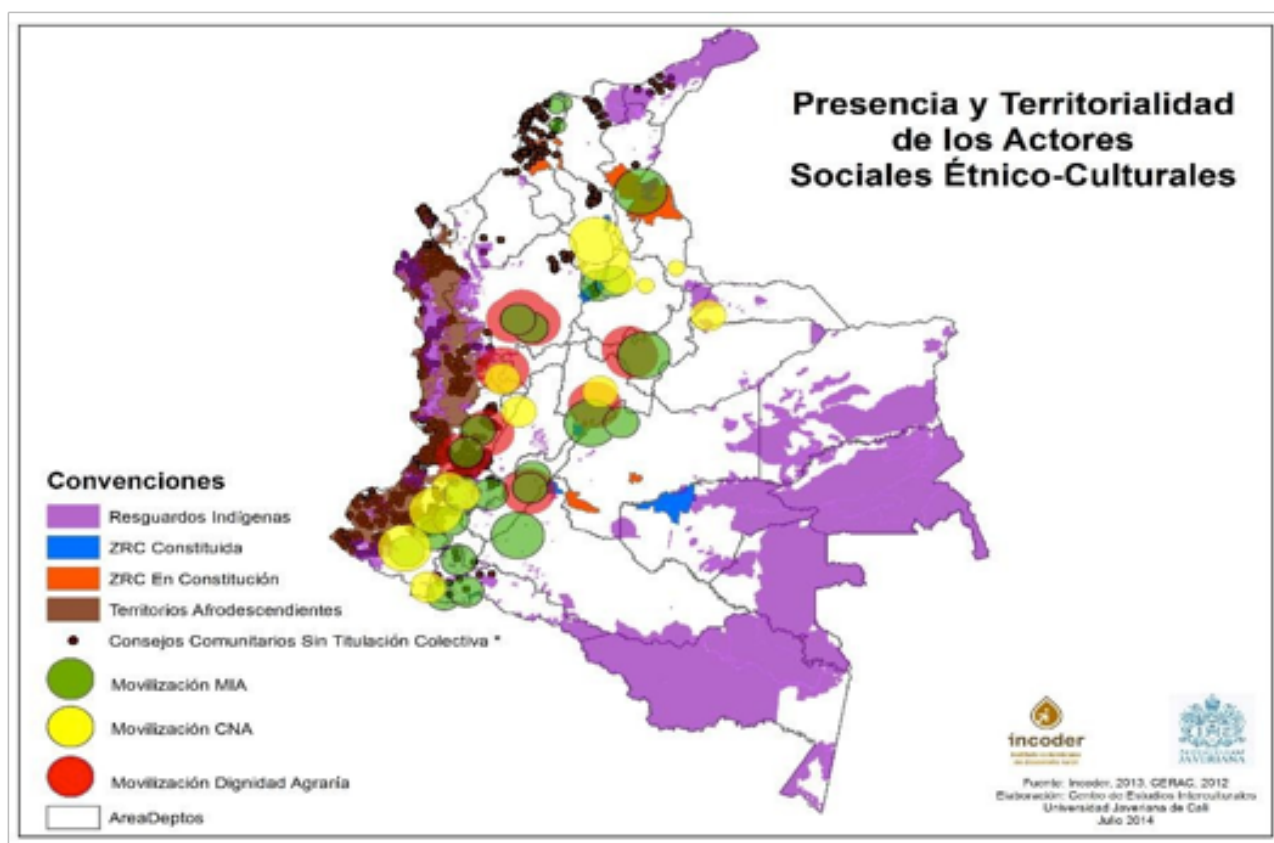
El mapa 8 da cuenta de los actores que han configurado territorialidad en la diferentes regiones del país y permite reafirmar que los procesos territoriales que se configuraron y resistieron en el periodo del gobierno de Uribe Vélez, fortalecieron sus bases y representan a un movimiento social con capacidad de incidencia, que delinea la prospectiva de sus luchas y oportunidades políticas en los diferentes contextos. Para el caso de la región que compete a esta investigación se puede evidenciar que en el Macizo y el sur occidente colombiano confluyen diferentes expresiones de movilización y actores territorializados en donde la defensa y la exigencia de los territorios son el enfoque transversal de la lucha social tanto nacional como regional.

Si bien con la llegada de Juan Manuel Santos en el 2011 la línea general de la política de Estado no cambió sustancialmente, el contexto y el discurso sí cambiaron. Se habló entonces de paz y de la importancia de la participación de las comunidades en su construcción. Muchos de los procesos regionales se reactivaron, algunos líderes regresaron y en otros casos los nuevos liderazgos se posicionaron en lo nacional y lo regional.

En este sentido, se pudo analizar que los nuevos modos de acciones que implementó el CIMA en función de permanecer en el territorio, están ligados a la importancia y carácter vital que le dan

las comunidades al territorio a partir de la configuración del movimiento. Sin desconocer la existencia previa de un arraigo territorial, la diferencia radica en que se hace de manera colectiva ya no solamente familias o individuos arraigados, sino con comunidades conscientes y organizadas que se autoreconocen como sujetos políticos de derechos. Sumada la interacción con otros actores organizados en la región que también construyen formas y aspiraciones de reconocimientos políticos y territoriales

## Mapa 8. Presencia y Territorialidad de los Actores Sociales Étnico-Culturales



Presencia y Territorialidad de los Actores Sociales Étnico-Culturales. Tomado de: Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca. 2013

## **2.3 Participación, incidencia y autonomía en relación a las estrategias del Estado**

### **2.3.1 Los laboratorios de paz: una estrategia, oportunidad o amenaza de las organizaciones?**

Como se expuso en el capítulo uno los laboratorios de paz son uno de los casos especiales que permiten analizar las relaciones que se tejieron en el macizo Colombiano entre las estrategias sociales del Estado, y los movimientos sociales en el marco de recuperar el territorio. La expresión de los movimientos o procesos organizativos en la región del Macizo por parte de las comunidades campesinas expresada en el mapa XX deja en evidencia la creciente presencia de estos en el territorio por esta razón es importante revisar una de las experiencias de articulación con actores del estado y la cooperación internacional más representativas durante el periodo de estudio de esta investigación. Para comprender y analizar las relaciones y tensiones que emergen entre un actor organizado y las políticas sociales nacionales e internacionales en relación al control territorial.

La implementación del Laboratorio II en el Macizo y el Alto Patía a diferencia del laboratorio I en el Magdalena Medio, no contó previamente con la existencia de un Programa Regional de Desarrollo y Paz (PDP), lo que hizo necesario y aún mucho más confiable para las comunidades que fueran las organizaciones sociales más representativas del territorio y con capacidad administrativa quienes asumieran este desafío. En este contexto y como ya se mencionó en el anterior apartado, en la región del suroccidente existe un gran movimiento social configurado por indígenas, campesinos y afrodescendientes, los mayores representantes del movimiento indígenas y campesino son el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, el CIMA, Fensuagro, AICO. Sin embargo, para este momento fue el CRIC y una organización del Alto Patía, ASOPATIA, quienes coordinaron la implementación del LP.

El CRIC y ASOPATIA crearon una alianza temporal para la implementación del LP, sin embargo, los laboratorios de paz tienen una estructura peculiar de actores, con una naturaleza heterogénea, en donde se perfila un triángulo de diálogo y articulación Sociedad Civil – Estado – Unión Europea (EU), a través de lo cual se establecen procesos de cooperación, negociación y, a veces, tensión (Barreto Henriques, 2009: 561). Funciona como una especie de pirámide relativamente no jerarquizada que tiene diferentes niveles. En su primer nivel, trabaja con las comunidades y la población más vulnerable, con campesinos, indígenas, afro descendientes, cocaleros, grupos de mujeres, organizaciones de base, cooperativas y ONG's locales, los cuales implementan los procesos de base del Laboratorio y son los beneficiarios de los proyectos; en un nivel intermedio y regional, integra actores regionales como las diócesis, universidades -como la Universidad del Cauca y la Universidad de Nariño-, asociaciones e instituciones regionales -las autoridades departamentales, la ECR y el Comité Directivo del Laboratorio-; en el nivel nacional, incluye el DNP, Acción Social y la Red Prodepaz; y, finalmente, en el nivel internacional involucra la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE, el PNUD, y el Banco Mundial (Laboratorio de Paz, 2008; Barreto Henriques, 2009: 562).

Al interior de cada nivel de este mapa de actores involucrados en los laboratorios de paz, surgen diferentes aspectos. Por ejemplo, en el nivel de las comunidades y organizaciones de base, los beneficiarios directos de los proyectos que trae el paquete de los LP, surgen varias contradicciones. La primera, es la necesidad de involucrar a las comunidades de base en el diseño y la ejecución de estos proyectos, con la capacidad y condiciones que impone la estructura rígida de la cooperación internacional, y en especial la de la Unión Europea. Por otro lado, la decisión de elegir la organización que coordinó la iniciativa. Surgieron debates, propuestas y decisiones que no ha toda la comunidad le generó satisfacción. Además, escenarios de competencia entre las mismas organizaciones por la administración de recursos.



En el peor de los casos, aparecen terceros externos y ajenos al territorio con intereses de por medio para ejecutar los recursos, se crean organizaciones ficticias cooptadas. En la inmediatez de la ejecución de recursos y exigencias administrativas se generaron en algunos casos desestabilización y dispersión por parte de los líderes y organizaciones de base en el territorio, corriendo el riesgo de fragmentar a la comunidad y perder de vista sus objetivos, principios y límites, entre la relación con actores como Estado y la cooperación internacional. ( Barreto Henriques, 2009: 562).

Al respecto tanto el CRIC como el CIMA han manifestado que la inherencia del CRIC en esta relación fue de carácter estratégico, se debía participar y poner en este escenario su visión del territorio y sobretodo de la construcción de paz, se consideró como una oportunidad para la región (Barreto Henriques, 2009; 563). Pues llama la atención que el LP tuvo como área de ejecución el norte de Nariño y sur de Cauca, área en la que no se encuentra la mayoría de la población indígena representada en el CRIC, lo que indica que la mayoría de esta comunidad indígena no se vio beneficiada por los recursos, proyectos y programas desarrollados en el marco de LP. La participación del CRIC garantizó o impidió que fueran actores externos al territorio quienes implementaran estos programas.

El CIMA participó en la implementación de proyectos en el marco de Laboratorio de Paz II en diferentes municipios a través de sus organizaciones sociales de base vinculadas al CIMA, uno de estos fue en San Pablo, Nariño, para el fortalecimiento de las Escuelas Agroambientales. Aquí vale la pena resaltar la importancia de las figuras organizativas creadas para el funcionamiento y dinámica entre la relación Estado - sociedad - comunidad internacional: FUNDECIMA, FUNDESUMA, las cuales han sido una de las principales estrategias para garantizar

transparencia, autonomía y participación de las comunidades evitando, o por lo menos conteniendo, el ingreso de organizaciones cazadoras de recursos, que solamente dejan en el territorio proyectos fragmentados, desarticulados, e insostenibles.

En este sentido, se puede evidenciar que sí bien existen factores de riesgo con la implementación de estos programas, la minimización de estos se puede contrarrestar a través de la capacidad política y organizativa presentes en el territorio. No obstante, como se evidencia la confluencia e integración del movimiento social de esta región trasciende el beneficio individual por el colectivo, los acuerdos dados entre comunidades campesinas, negras e indígenas, trasciende el objetivo mismo de los proyectos o programas externos, convirtiendo estos escenarios en espacio de incidencia y gestión para mejores condiciones básicas de las comunidades, sin perder de vista lo fundamental de la lucha social.

El complejo panorama de los actores involucrados en la dinámica de la implementación de los laboratorios de paz devela también las relaciones entre otros actores. Se supone que la Unión Europea implementó estos programas para contribuir en la construcción de paz desde el desarrollo de las comunidades, sin embargo, el periodo de implementación en el Macizo Colombiano y en Alto Patía coincidió con el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde uno de los aspectos más contradictorios fue el cruce de la lógica y política militarista anti-insurgente por el control del territorio, y la doble cara que se implementó con políticas sociales. El gobierno de Uribe encontró en los Laboratorios de Paz un buen escenario para llevar a cabo acciones e iniciativas sociales que le permitirán avanzar en sus objetivos para la seguridad democrática (Barreto Henriques, 2009).

Paz, desarrollo, participación, control, autonomía, soberanía, territorio son objetivos comunes existentes entre el gobierno, la UE y la comunidad, pero no significa lo mismo para todos. La visión del gobierno de Uribe de la paz en el marco de los laboratorios de paz, no fue la incidencia sobre las causas del conflicto, sino más bien un proceso complementario de apoyo social y mitigación de los efectos de violencia. En la perspectiva del gobierno Uribe, los Laboratorios han sido entendidos como un apéndice social o un complemento de la política de Seguridad Democrática, que se destinaba principalmente a garantizar una derrota militar de la insurgencia. La paz en su concepción, y en las líneas oficiales del gobierno Uribe, aparecía como una paz del orden y de la seguridad, y la “construcción de paz” como tan solamente la ruta progresiva para la derrota militar de la insurgencia, concepción que no empata con lo que plantean las comunidades para esta caso el CIMA, donde la construcción de paz pasa por el reconocimiento de los sujetos en el territorio y las causas estructurales del conflicto, en particular la exclusión política y socio-económica, y a la integración de distintos escalones y sectores de la población en un amplio “proceso de paz”.

En conclusión las estrategias militares y sociales de control territorial implementadas por el gobierno nacional en el periodo de 2000- 2011, manifiestan extremas diferencias de concepción del uso y el control del territorio, la paz, la justicia social, la inclusión y la participación. Mientras que para las comunidades el control del territorio es poder ganar autonomía en las decisiones y usos de sus territorios, que estén mediadas por procesos participativos de la comunidades, para el gobierno el control es la disputa entre actores armados y la rendición de la guerrilla de las FARC-EP, convirtiendo a las comunidades en objetivo militar que solamente se tienen en cuenta para implementar control social a través de proyectos mediados por actores internacionales. Dejando como resultado:

- Agudización del conflicto armado en la región, esto se evidencia en los índices de desplazamiento, violación de derechos humanos, aumento en cultivos de uso ilícito.
- Desafíos para las organizaciones sociales en el territorio frente a la llegada de recursos para inversión social, los laboratorios de paz son un ejemplo de las dinámicas a las que se enfrentan estas comunidades y las capacidades que deben desarrollar para poder conservar su autonomía y objetivo políticos.

Las comunidades a pesar de este contexto desarrollan estrategias en los territorios transformando y desafiando las formas capitalistas de producción, el caso de San Pablo, Nariño (como se verá más adelante) muestra cómo a través de la agroecología pueden transformar prácticas de producción, comercialización y fortalecer organizativamente a sus comunidades. Los movimientos logran transformar los contextos políticos y económicos que trae el “desarrollo” entre estos la oferta e implementación de proyectos sociales con carácter vinculante, participativo bajo el enfoque de desarrollo regional, transformándolos y poniéndolos en sus estrategias organizativas como un vehículo para avanzar en contrapuestas al desarrollo. Se logra aprovechar la gestión de recursos, capacitación y asesoría técnica en función de ampliar las capacidades de las comunidades, buscando en el mediano plazo autonomía y baja dependencia de recursos externos, esto implica que los proyectos deben estar orientados e implementados bajo el enfoque de sostenibilidad en el tiempo y en recursos.( Arturo Escobar 2010, P.66)

Hasta este punto se han presentado los elementos que componen la historia y conformación de un movimiento social como el CIMA y a la vez su necesidad de reafirmar y diseñar una estrategia organizativa de carácter regional que permitiera generar identidad para mantener un proyecto político de región sostenido en la articulación de las organizaciones sociales que se gestarán alrededor de la defensa del territorio como mecanismo de pervivencia en los mismos.

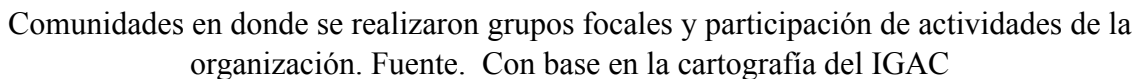
Sin embargo este proyecto de región debe estar soportado en un escenario real de arraigo y construcción de territorio pero a la vez estas construcciones de territorio que están en manos de las comunidades campesinas organizadas se orientan y dinamizan por dinámicas del proyecto regional del cual han sido creadoras. Es por esto que no se podría entender el proyecto de construcción de Región sin conocer la construcción de territorio (s) al interior del CIMA. Esta relación es la que se define como territorio - región en donde el significado de lo regional se materializa y se retroalimenta desde lo local en el que hacer cotidiano de las comunidades rurales, en sus prácticas y usos del territorio (Mancano, 2010 ).

### **2.3 Territorio y poder local desde la organización campesina caso: “ La coordinadora de mujeres y familias campesinas san pableñas”**

En la región el ejercicio de participación y democracia participativa se debe afianzar y consolidar desde lo local y en ese sentido se trata de potenciar la capacidad para elegir a sus líderes, dirigentes, tomar decisiones y gestionar. De igual manera respetar su autonomía e iniciativas para gestionar su propio futuro a partir de la cultura propia. Se trata de crear las condiciones organizativas y políticas para construir desarrollo, basado en el conocimiento integral del ecosistema del Macizo y la cultura del hombre que lo habita. ( Ministerio de Cultura, Fundecima, 2000, p.)

La Coordinadora de Mujeres y Familias Campesinas San Pableñas, es una de las organizaciones campesinas del ámbito municipal, vinculadas al proyecto regional del CIMA. Como organización abrió las puertas de sus territorios en sus fincas y veredas a esta investigación, con la participación de pobladores urbanos, mujeres hombres, jóvenes y ancianos, en varias de sus actividades y acciones de movilización, formación, debate y

**Mapa 9 Comunidades en donde se realizaron grupos focales y participación de actividades de la organización.**



Con la participación de las y los campesinos en el paro del 99, se fortalece la articulación de las comunidades organizadas del norte de Nariño. Este fue un escenario de encuentro y aprendizaje para quienes por primera vez participaban de estas actividades. Gracias a estos espacios de

movilización y formación política se comprendió la necesidad de organizarse en el municipio para hacer valer sus derechos. En este contexto, *“la propuesta organizativa se fortaleció y las organizaciones del norte de Nariño comprendieron y apropiaron la metodología de trabajo y la propuesta política; después del paro las organizaciones del norte de Nariño deciden formalmente hacer parte del CIMA”*(lideresa Escuela Agroambiental de la vereda los Robles, San Pablo, Nariño, 2011).

Si bien, los primeros escenarios de organización se caracterizaron por un alto nivel de participación de hombres campesinos y baja participación de las mujeres, los efectos del gobierno de Álvaro Uribe con la implementación de la política militar de Seguridad Democrática para garantizar el control territorial transformaron -como ya se ha mencionado- el rumbo de esta organización. *Muchos de sus líderes fueron amenazados y otros decidieron no continuar en el proceso (2011, Líder CIMA)*. Sin embargo, se consideró pertinente avanzar desde la organización local con el fortalecimiento y formación de las comunidades.

El Liderazgo de las mujeres fue fundamental para la continuidad del proceso y el fortalecimiento de las familias en relación a la permanencia en sus territorios. El escenario de la Coordinación Campesina de Mujeres y Familias campesinas sanpableñas, como una propuesta de organización que recogiera las iniciativas veredales de participación y articulación a partir de la soberanía alimentaria, lo agroambiental, el género y la economía campesina, impulsó el trabajo con las comunidades en las veredas a través de un enfoque formativo en el tema ambiental expresado en la conformación de las “Escuelas agroambientales”.

En el caso de ésta organización en el ámbito de lo local dichas dinámicas se expresan como formas propias de organizarse de las comunidades en las veredas, que vinculan a familias y

mujeres, dando un direccionamiento amplio de la comunidad en el trabajo reivindicativo de la equidad de género que estas mujeres campesinas ponen en práctica, transformando las relaciones cotidianas con sus hijos, esposos, compañeras en relación a su rol dentro de la lucha social, pero sobre todo en la sociedad..

La capacidad que tienen las comunidades de implementar mecanismos no sólo de defensa de territorio y exigencia de sus derechos, sino de garantizar la permanencia en ellos, desde sus propias necesidades es una expresión de autonomía territorial. Es decir, que la organización se convierte en uno de los mecanismos de protección y expresión del arraigo territorial de las familias campesinas, generando conciencia y prácticas consecuentes con el discurso, haciendo resistencia desde sus fincas hasta la participación en escenarios nacionales y regionales del movimiento campesino.

*“Las primeras experiencias de incidencia e interlocución con las entidades municipales se hicieron a través de presupuestos participativos como organización campesina, fortaleciendo el enfoque de desarrollo político de la organización, para que también trascienda más allá, y busque un horizonte político de transformación local”*( Lideresa San Pablo Nariño, escuela agroambiental de la vereda Alto Llano, 2011).

Las formas de hacer resistencia desde la cotidianidad son los insumos para argumentar frente a escenarios amplios de debate y construcción de propuestas para la incidencia en las políticas públicas para el sector rural, pero sobre todo como lo expresan varios de sus líderes: avanzar en el reconocimiento del campesinado como sujeto político.



### 2.3.1 Escuelas agroambientales: “nuestra estrategia de permanencia y organización fue la formación”

*“poder sembrar es poder decidir”*

Las Escuelas Agroambientales surgieron como una forma organizativa de integración de las familias campesinas en las veredas del municipio de San Pablo, Nariño, las cuales se articulan desde el municipio hacia la región. Como ya fue dicho, esta forma organizativa se configuró como espacio al abrigo del cual la organización se mantuvo durante la denominada época oscura, siendo a la par un escenario de formación en torno a las múltiples dimensiones que integran el enfoque agroecológico de producción y de vida en el territorio.

*“A través de las escuelas agroambientales, las familias de la mano de las mujeres como principales jalonadoras del proceso, fueron aprendiendo y compartiendo conocimientos sobre agroecología, identidad cultural, organización comunitaria y gobernabilidad en la búsqueda de condiciones de vida digna y bienestar, para generar cambios de pensamiento que dieran fin al paternalismo acogiendo el propio desarrollo o desarrollo endógeno. Ello va de la mano con la necesidad de legitimar y hacer visible la vida campesina como opción de vida, mediante actividades productivas y de formación basadas en el uso de los recursos de su propia finca y el trabajo solidario con la comunidad” (Lideresa Coordinadora de mujeres y familias campesinas San Pableñas, Nariño 2011)*

En este sentido, la perspectiva agroecológica de la formación y de las actividades se enfocó en la planificación de las fincas, el territorio y el trabajo solidario, así como en la conservación de los recursos naturales y la armonización de las relaciones entre las personas y la naturaleza. El telón de fondo de esta apuesta fue definiéndose entonces como la transformación de la sociedad desde

un enfoque agroecológico y humano con equidad de género y participación comunitaria a partir del cambio en la familia, su finca y su comunidad.

En este sentido la experiencia de las escuelas agroambientales se sustentó en conjuntos de actividades y principios sobre los que sus integrantes se desenvolvían en sus escenarios cotidianos. Entre las actividades definidas para todas las personas integrantes de las escuelas se encuentran:

- Recoger y limpiar plásticos y contaminantes en su finca y su vereda.
- Contar con su huerta casera para la producción de hortalizas y plantas medicinales
- Reproducir alimentos tradicionales y hábitos alimenticios
- Organizar su vivero familiar y sembrar árboles en su finca y en la microcuenca
- Dejar de utilizar venenos y productos químicos para la agricultura como proceso de cambio a mediano tiempo.
- Sembrar pastos y árboles forrajeros para la alimentación de sus animales.
- Elaborar abonos orgánicos y sembrar barreras vivas para conservar el suelo.
- Cuidar el agua.
- Participar en actividades de capacitación
- Participar activamente en las ferias culturales y agroambientales.
- Participar en actividades sociales y políticas no tradicionales.
- implementar proyectos productivos de tipo colectivo en las veredas

Los principios de las escuelas agroambientales se resumen en: identidad cultural, desarrollo autogestionado, justicia social, participación ciudadana, práctica de la ética, producción sostenible e integración social y territorial.

Durante el recorrido por las fincas de varios integrantes de las escuelas agroambientales se pudo identificar y conocer los procesos de transformación y transición de fincas que anteriormente tenían prácticas convencionales de producción como el uso de agroquímicos, monocultivos a

pequeña y mediano escala en especial de café, hacia fincas diversas en sus cultivos y sustentables desde sus propios recursos, que le apuestan a los valores agregados de sus productos. Las fincas cuentan con un plan de trabajo establecido para lograr la conversión hacia fincas agroecológicas, específicamente para cultivos en ladera.

También se ha venido trabajando bajo la perspectiva de la sostenibilidad agroecológica, comprendida como el proceso de desarrollo de la producción agropecuaria de la economía campesina, compuesta por 7 niveles:



Para avanzar en la implementación de estas etapas, la organización san pableña ha establecido algunas prácticas e instrumentos como la planeación de la finca, compuesto por tres elementos: Primero, hacer un diagnóstico que permita conocer y valorar lo que se tiene en la finca; segundo, definir qué se quiere hacer en la finca y establecer los tiempos para lograrlo, en otras palabras,

planeación; y tercero, hacer la evaluación y reflexión. Siendo la anterior una herramienta marco, estos procesos locales tampoco son homogéneos, y en algunas veredas tienen procesos productivos de carácter agroecológico más avanzados que otros, al igual sus capacidades y niveles organizativos disímiles.

Por otro lado, uno de los aspectos más relevantes identificados en el trabajo de las escuelas agroambientales es la implementación de la metodología campesino a campesino (CAC), entendida como un proceso dinámico de carácter horizontal donde el protagonista es el campesino y sus conocimientos, quien a través del quehacer transmite sus experiencias y saberes; “*¡el campesino no cree sino en lo que ve!*” es una premisa arraigada en las familias sanpableñas que decidieron adoptar esta metodología para mostrarle al campesino vecino, amigo o a la familia, que se pueden transformar prácticas para mejorar sus procesos productivos.

Dentro de las escuelas agroambientales y bajo la metodología CAC, se define como fundamental la necesidad de identificar roles al interior de la organización para que se pueda replicar e implementar el enfoque agroecológico, en esta dinámica los campesinos o campesinas que asumen el rol de multiplicar y difundir la propuesta se autodenominan “*Agrosembradores del Macizo Colombiano*”. Estos campesinos, como ya se dijo, hacen parte del CIMA, y por ello han participado en escuelas regionales de formación agroambiental y de gobierno donde han recibido capacitaciones y han compartido experiencias. Por ello, asumen la responsabilidad de desempeñar en sus comunidades y en su región funciones como: replicar conocimientos aprendidos, conocer bien sus comunidades y sus problemáticas, saber motivar y comunicar, trabajar con las necesidades identificados por la gente y no por agentes externos. Por ejemplo, empiezan desde lo pequeño pero pensado en grande, seleccionan las tecnologías apropiadas para

garantizar el éxito, fomentan desde el principio procesos autosugestionados, motivan el trabajo familiar voluntario, conocen, defiende su territorio y su organización ( FUNDESUMA 2007).

Este conjunto de actividades y principios se pueden enmarcar en lo que Ottmann (2005) define como las tres dimensiones principales de la agroecología:

1. *Dimensión ecológica y técnico agronómica:* a través de la cual es posible encarar, el deterioro de la naturaleza a través del manejo de la fincas desde una perspectiva sistémica que a todas luces se ve reflejada en las prácticas derivadas de las escuelas agroambientales como el manejo de las basuras, la preparación de abonos o el cultivo de la biodiversidad. Esta primera dimensión es la puerta de entrada de las personas integrantes de las escuelas agroambientales al rescate e intercambio de saberes y a la vez el motor de todo el proceso formativo que sustenta el proceso organizativo y político que de estos escenarios se desprenden.

2. *Dimensión socioeconómica y cultural:* que incorpora la perspectiva histórica y el conocimiento local en busca de un mejor nivel de vida para las comunidades. Tanto la perspectiva histórica como el conocimiento ancestral componen lo que la autora denomina los métodos de desarrollo endógeno para el manejo de los recursos naturales con base en los elementos de resistencia propios de la identidad de las comunidades, que de ninguna manera resulta ser un desarrollo cerrado y que en esta y otras experiencias se muestra como permeable a todos los nuevos saberes y conocimientos que vienen de afuera y que guardan cercanía con la identidad del proceso. Por tanto la perspectiva de esta dimensión es, más allá de buscar fórmulas o recetas para la solución rápida de problemas, detectar aquellas formas de conocimiento existentes en la comunidad, para acompañar y dinamizar los procesos existentes en una dinámica participativa.

3. *La dimensión sociopolítica:* concebida como la necesidad de introducir desde la agroecología otras formas de conocimiento para afrontar la crisis ecológica y social que enfrenta el mundo actual, mediante una crítica al extremo cientificismo con que se confronten los problemas actuales del mundo y poniendo de relieve la existencia de otras formas de conocer que en últimas permiten nuevos abordajes de la relación sociedad naturaleza. En este sentido, el enfoque agroecológico aparece como respuesta a la lógica del neoliberalismo y la globalización económica. Esta dimensión de la agroecología se mueve en lo que Garrido Peña (1993:p.8) define como transpolítica, en el sentido de reinterpretar la cuestión del poder, insertándola en un modelo ecológico de lo que se desprende que el ámbito real de poder es lo social como organismo vivo, como ecosistema. De acuerdo con Martínez Alier (1997) la “ecología popular”, como defensa de sus etnoagroecosistemas a través de distintas formas de conflictividad campesina ante los distintos tipos de agresión de la modernidad (Martínez Alier, J., 1998 y Guha, R. Y Martínez Alier, J. 1997).

Todos los elementos planteados hasta el momento indican la territorialidad expresada en formas de apropiación del territorio desde lo comunal y organizativo, desde un enfoque, intensión y propósito de entablar una relación armónica entre los recursos naturales, y contribuir con espacios de vida sustentables y posibles para la reproducción de la vida campesina.

Las comunidades organizadas en las escuelas agroambientales, al poner énfasis en la agroecología, en las tres dimensiones antes mencionadas y en el marco del análisis de la territorialidad, permiten evidenciar que existe una confluencia de condiciones, acciones y principios que desarrollan apropiación, autonomía, participación y capacidad de decidir sobre el uso y manejo de los recursos, incidiendo y transformando desde las relaciones cotidianas los escenarios de poder. La implementación de un enfoque agroambiental o agroecológico no es sólo

como una apuesta para la soberanía alimentaria, sino también como una estrategia de permanencia en el territorio y una oportunidad para fortalecer la organización social, que promueven espacios de movilización y formación política.

## CAPITULO III

### **3. ANÁLISIS SOBRE EL CIMA Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO Y DE REGIÓN**

#### **3.1 La construcción social según Boisier a la luz del contexto Colombiano: La ilusión del reconocimiento de la región como un avance al ordenamiento de los territorios**

La constitución del 91 representó cambios sociales importantes en el país: el reconocimiento de los indígenas y afrodescendientes, el derecho a la creación y participación de movimientos políticos y la superación de un estado centralizado; distribuir el poder, el territorio, las funciones y la participación de la población, fueron las principales estrategias impulsadas para avanzar con este objetivo. Diferentes sectores académicos, políticos y populares participaron en el diseño de propuestas para el contenido de la constitución.

Lo anterior implicó crear nuevas formas de organización territorial y retomar otras que históricamente habían existido, como las provincias y las regiones. El debate sobre la descentralización no sólo implicó desafíos de tipo institucional y de distribución de funciones y de poder, sino que puso en el debate una de las deudas históricas más grandes en Colombia acerca de la organización de los territorios y el manejo de los mismos.

El debate sobre el manejo del territorio, en otras palabras, es la compleja tarea del ordenamiento territorial en Colombia, que a la vez está ligado al ejercicio del poder y a los mecanismos para confrontarlo (Herrera, 2002). El ordenamiento territorial comprende las maneras de organizar el uso de los espacios geográficos: sus recursos y las poblaciones que los habitan y a su vez define los recursos que se consideran estratégicos y la manera como estos serán aprovechados y protegidos por una comunidad o una nación. Así mismo, implica la manera como se organizan



los procesos de poblamiento humano de los territorios, la definición de las formas administrativas de organizarlos, en municipios, departamentos, o provincias, regiones, etcétera; implica también la definición de áreas protegidas, de interés económico, de uso agrícola, ganadero o urbano (Méndez, 2014).

Una de las figuras de ordenamiento territorial incluidas en la constitución del 91, como avance en un proceso de descentralización fue la región. Según esto, la Ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la Ley. Al ser reconocidas como entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley, tendrán derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales (constitución política 1991, artículo 286, 287).

La reglamentación de las entidades territoriales está dada por la “Ley Orgánica de Ordenamiento territorial previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial, la cual establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en cada caso a referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados” (Constitución política 1991, artículo 307). La misma Ley establecerá las atribuciones, los órganos de administración, y los recursos de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías. Igualmente definirá los principios para la adopción del estatuto especial de cada región. No se puede negar que la descentralización encaminada hacia una nueva organización territorial fue un avance en el país, sin embargo, carece de una reglamentación clara que le transfiera toda la responsabilidad de la organización territorial a Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), cuya principal

función es regular la relación de la distribución y manejo no sólo de los territorios, sino la distribución de las competencias entre la nación y las entidades territoriales. Llama la atención que sólo veinte años después de la creación de la Constitución y de haber sido presentadas 19 propuestas de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, es decir, sólo hasta el 28 de junio de 2011 el Congreso aprobó por primera vez la Ley 1454 conocida como la LOOT (Razón Pública, 2012).

Esto indica el vacío constitucional y legal que existió desde la constitución del 91 para impulsar la regionalización y una verdadera descentralización territorial en Colombia. Por otro lado, la LOOT aprobada contempla la creación de regiones y provincias, pero no necesariamente como entidades autónomas territoriales, sino como “regiones de administración y planificación de carácter asociativo para impulsar el desarrollo” (Ley 1454 de 2011). Si bien la creación de regiones en Colombia ha quedado consignada en la Constitución, aún no existe un reconocimiento a su autonomía, a formas propias de gobierno, a su gestión de recursos y muchos menos a la creación de una institucionalidad regional eficaz.

Orlando Fals Borda (1988), uno de los defensores y promotores que reivindicaron la región y las provincias como figuras de ordenamiento territorial propuso como principios importantes para reconocer estas formas de organización de los territorios, las condiciones geográficas, los usos y vocación del suelo, pero sobre todo las condiciones culturales e históricas que se han configurado a través de las relaciones que entablan la comunidades con sus entornos y sus contextos, aspectos que en la actual LOOT no aparecen plasmados. Los procesos sociales históricos de sociedades regionales y provinciales aún no se reconocen en la ley como principio fundamental para el ordenamiento, mucho menos se reconoce a los procesos organizativos como

principales sujetos con capacidad de gestionar y administrar su territorio. Los conflictos sociales y territoriales cada vez están más agudizados, muestra de ello son: la contraposición de figuras de ordenamiento territorial, la explotación de recursos en zonas de conservación, los proyectos minero energéticos y sus consecuentes problemas e impactos ambientales y sociales de gran gravedad.

En este contexto es preciso resaltar que los elementos planteados por Boieser sobre la construcción social de región propicia la discusión sobre el alcance e interés del CIMA de constituir una región desde lo político administrativo y abordar una relación explícita en sus objetivos sobre la región y territorio.

Los elementos expuestos en los capítulos anteriores y el análisis del proceso regional del CIMA dejan entrever que en las aspiraciones territoriales del CIMA no se ubica el reconocimiento de la región como una entidad territorial autónoma, que en términos de Boieser es un elemento esencial para construir socialmente una región, es decir dotar a estas figuras de autonomía de poder de decisión y administración, sin embargo como se presentó anteriormente las condiciones que rigen el ordenamiento territorial en Colombia son incipientes hasta la fecha de esta investigación. Condiciones que distancian al CIMA de una reivindicación y lucha por la región como una entidad territorial. Por el contrario si han fortalecido en términos de Boieser lo que denomina sociedad regional organizada y los proyectos políticos comunes y colectivos. En este sentido el abordaje teórico y de análisis de la construcción social de región trasciende el marco de la figura como entidad autónoma territorial.

### **3.2 Sobre el CIMA y su carácter socioterritorial**

#### **3.2.1 El territorio un elemento central, el CIMA un movimiento socioterritorial**

De acuerdo con Zibechi (2010) la importancia del territorio en los movimientos sociales latinoamericanos expresada en el arraigo territorial, es una de las características fundamentales de estos movimientos desde la década de los setentas. Reconociendo el territorio como un escenario propio, donde se desenvuelven las relaciones sociales de las comunidades que lo habitan, siendo esta una condición para el desarrollo de una vida digna y que por lo tanto se debe defender y construir desde la visión de mundo de las comunidades que históricamente lo han habitado. Además, parte de esta autonomía debe reconocer el estatus de autoridad de estos territorios por encima de otras autoridades del gobierno que permiten la destrucción del territorio, que contribuya a la soberanía y autonomía (Zibechi, 2010)

En el análisis del caso del CIMA, se identifica que entre los años 90 y 2000 el territorio se convirtió en uno de los ejes centrales de lucha y significó la transición de ésta hacia la construcción autónoma de sus territorios con sus formas propias de organización, participación, economías, formas culturales y ambientales, que contribuyen a la configuración de actores y sujetos con autonomía territorial, entendida como un mecanismo dirigido a las campesinas y los campesinos para que sean gestores(as) y veedores(as) de las propuestas para ordenar su territorio. Esto representó un cambio cualitativo de este movimiento.

Ahora bien, Mancano (2010) sostiene que el movimiento socioterritorial se caracteriza por su relación estrecha con el territorio, su capacidad de dinamizar procesos de territorialización dando paso al surgimiento de nuevos territorios, la lucha y control por el territorio que los pone en escenarios de disputa con otros actores. En este sentido, la transición de las acciones colectivas a

la configuración de un movimiento social y la apuesta política por transformar las condiciones de las comunidades a partir de la lucha por el territorio, permite ubicar al CIMA como un movimiento socioterritorial, que define el territorio no como un espacio donde se desarrollan las reivindicaciones centrales, sino como el objetivo central de construcción y reproducción de relaciones sociales que proyectan y organizan territorialmente la región y se materializan en las particularidades de los contextos locales.

En este sentido no solo por ubicar al territorio en el discurso político y en el proyecto de región del CIMA este es de carácter socioterritorial, sino por la dinámica social, política y territorial que ejercen las comunidades organizadas desde sus veredas y municipios, como en el caso de San Pablo, Nariño, la Asociación de Mujeres y Familias Campesinas San Pableñas, son estos espacios organizativos de las comunidades los que permiten transformar relaciones cotidianas en el territorio. Es por esto que el CIMA por si mismo no es un movimiento socioterritorial sino por la articulación y existencia de todas estas organizaciones territoriales que sustentan y a la vez configuran un proyecto de Región.

La lucha del CIMA por defender el territorio se planteó en un escenario donde la construcción de una región diferente, pasa por disputarse ese territorio, disputa en la que estarían inmersos los intereses y proyectos antagónicos sobre el mismo territorio. La intención de transformar un territorio significa que existen condiciones con las cuales algunas comunidades no están de acuerdo, las rechazan, sintiéndose amenazadas y evidentemente alguien produce estas condiciones. Estas disputas no son únicamente por un espacio determinado o por expandir un territorio, sino por instaurar y defender formas de vida que representan intereses e intencionalidades diferentes (Mancano 2010)

El análisis de la dinámica del CIMA en el período de 1987 - 1999, muestra la configuración de un sujeto político integrado y articulado a partir de las diferentes formas organizativas. Como se expuso en el capítulo dos, este proceso estuvo caracterizado en principio por la realización de acciones colectivas puntuales, sin embargo, las comunidades avanzaron y materializaron sus objetivos comunes a un proyecto de largo plazo, conformando y adoptando formas asociativas de organización.

Las acciones colectivas permitieron que se diera un proceso de territorialización del CIMA. Se amplió su escala, pasando de lo local a una área de incidencia más amplia entre el sur del Cauca y norte de Nariño. Esto indica que la magnitud de este proceso en términos de expansión geográfica, en principio, no es para toda la región del Macizo Colombiano, sino a un área específica (ver mapa 6). En este sentido, se evidencia el crecimiento del movimiento que se refleja en la expansión de su área de incidencia, es decir comunidades que habitan entre el Sur del Cauca y Norte de Nariño que se han vinculado al CIMA desde alguna forma organizativa, que mantiene la pretensión de expandirse no necesariamente a través de la vinculación de nuevos territorios, sino también de construir alianzas con otros sectores organizados en el resto del Macizo y el Suroccidente colombiano en general.

Por otro lado, el número de organizaciones campesinas integradas al CIMA aumentó en la década del 2000 al 2011, indicando que uno de los principales mecanismos de expansión es la organización social a diferentes escalas geográficas. Esto implicó la necesidad de funcionar bajo una estructura organizativa que operara como un sistema compuesto con funciones y roles dentro de un proyecto regional y que obedece a las lógicas culturales, políticas y geográficas que sustentan los procesos de articulación e integración, trascendiendo de la participación en

acciones puntuales de denuncia y movilización hacia la construcción de una estrategia organizativa en la región.

Ahora bien, las territorialidades construidas por las comunidades organizadas en lo local vinculadas al CIMA, son una muestra de las formas como se concibe el control territorial para estas, que dista de las que plantea el Estado en relación a la militarización de los territorios, bajo el enfoque de la consolidación de condiciones que permitan desarrollo económico. Por el contrario las comunidades fortalecen bajo estas condiciones lo que denominan *autonomías territoriales*, entendiendo la autonomía como un proceso que emerge de sus realidades, donde lo que denominan como construcción de región es un proyecto político organizativo-territorial, que implica la defensa y reconocimiento de sus territorios. Donde la autonomía pasa por la gestión y autogestión de mejorar las condiciones de vida, que han asumido el control de sus territorios ligado al poder decidir sobre estos, lo que podría entenderse como formas alternativas de autoridad territorial, donde la apuesta por jugar un papel activo en la definición del rumbo de sus comunidades y territorio pasa por procesos participativos y decisiones colectivas, pero también por el reconocimiento como sujetos políticos y por tanto el derecho al territorio. Para ellos, autonomía es entender la capacidad de las comunidades de configurar su territorialidad en el marco del territorio nacional.

El caso del CIMA, y más ampliamente los movimientos socioterritoriales campesinos, han logrado convertir el territorio y la territorialidad campesina como objetos de contención y lucha, no sólo desde la lucha por permanecer en sus territorios, sino por convertirse en sujeto dinámico frente al control de los mismos por parte del Estado, que no solamente ejercen control físico sino también social, económico, político y cultural. De allí que el CIMA exprese su accionar desde un esquema organizativo, unos principios orientadores y la articulación y fortalecimiento de

organizaciones que desde lo local trabajan en la defensa del territorio. Como lo plantea Mancano (2010), la disputa territorial está compuesta por escenarios materiales pero también inmateriales, donde la organización social juega un papel fundamental en la construcción de definiciones locales y culturales que les permitan entablar una relación directa con los actores presentes en el territorio y poder disputarlos.

Por su parte, las comunidades indígenas y afros del país han avanzado en términos constitucionales y marcos jurídicos para su reconocimiento como sujetos políticos y, sobretudo, el derecho al territorio. Sin embargo como ya se ha mencionado el campesinado aún no ha logrado tener un marco jurídico que reconozca este tipo de derechos. Procesos y movimientos sociales como el CIMA logran configurar dinámicas territoriales que se convierten en procesos de reterritorialización sobre el territorio del Estado Nacional y si bien aún no existe el reconocimiento formal por el territorio campesino, sí se producen otras territorialidades que desafían las establecidas por el Estado. Es de resaltar que el CIMA no tiene una pretensión por el reconocimiento de la región como una entidad territorial en el marco del ordenamiento territorial, sino una reivindicación mucho más estructural que trascienda de la región del Macizo apuntando al reconocimiento del campesinado, a un ordenamiento territorial coherente con la geografía, la cultura y la conservación.

El proceso de expansión del CIMA en el territorio ha sido gradual y está intrínsecamente ligado a la capacidad e intención de las comunidades de generar formas autónomas de organización social, que promuevan los principios y acciones necesarias para transformar condiciones de amenaza a la permanencia en el territorio, y apoyar en la mejora de las condiciones de vida. Ello, manifestando y poniendo en diálogo sus propuestas con otros actores presentes en el territorio, como las instituciones del Estado y el capital. Las organizaciones actúan en diversos territorios y



escalas geográficas, formando una red de relaciones con estrategias políticas que promueven y fomentan su territorialización.

A partir de las diferentes formas organizativas adoptadas por el CIMA se configuran escenarios que han permitido avanzar en la consolidación del proyecto su proyecto regional, dejando en evidencia que la apropiación no es sólo por un espacio físico, sino por espacios políticos, culturales, sociales y económicos que transforman las relaciones en los territorios, es por esto que no se puede hablar de la producción de un territorio sino de varios y nuevos territorios tanto materiales como inmateriales; donde ha sido necesario transformar relaciones desde cambios de un pensamiento individual por uno colectivo; de una participación pasiva por una activa protagonizada por las comunidades; y de un reconocimiento identitario de naturaleza propia campesina.

### **3.2.1 Sobre el Territorio-Región**

Es en este punto es donde la relación Territorio- Región se deja entrever de manera más precisa. Arturo Escobar (2010), presenta al Territorio - región como un concepto construido por las comunidades del Pacífico Colombiano, en el marco del análisis de uno de los movimientos sociales más representativos de esta región y su experiencia de configuración de estrategias de apropiación del territorio, en donde la Región es el proyecto político del movimiento y el territorio es el proyecto de vida de las comunidades que al enlazarse configuran una estrategia de localización o apropiación de un lugar de origen subalterno, entendido desde la perspectiva de base, es decir, construido de abajo hacia arriba y alterno porque surge en los mismos tiempos a las estrategias del estado y el capital.

En el caso del CIMA y la propuesta de construcción social de región, a la luz del análisis de la relación territorio - región, es posible comprender cómo el proyecto de vida que las comunidades de las zonas rurales del sur del Cauca y Norte de Nariño han implementado en sus territorios se articula con el proyecto regional que han configurado como CIMA. En este sentido, esa región en construcción es el proyecto político del CIMA que guía el accionar en relación a los desafíos que rodean este proyecto, así como las estrategias y acciones de apropiación del territorio por parte de los demás actores en el territorio.

Como se presentó en los capítulos uno y dos, las estructuras y estrategias implementadas por el estado y el capital en el Macizo colombiano no están basadas en el arraigo territorial, en la identidad, cultura, ni en la conservación social y ecológica. Los elementos expuestos sobre el caso organizativo en San Pablo, Nariño pone en evidencia los procesos que las comunidades configuran desde lo cotidiano y lo colectivo, proyectos de vida arraigados al ser campesino y al lugar que habitan, es en estos escenarios de organización social que se materializan acciones concretas de transformación a partir de la agroecología, el papel de la mujer en la participación política, la incidencia y la relación con las instituciones del Estado. Sin embargo, el referente regional de organización es sin duda el CIMA como espacio de articulación entre quienes están comprometidos con el mismo objetivo. Se puede decir que el CIMA es un espacio inmaterial regional que se materializa en cada una de las organizaciones que se lo reconocen como CIMA. Es aquí donde la compleja relación entre región y territorio se convierte en una relación de carácter interdependiente en donde el uno contiene la naturaleza del otro.

Otros autores como Oshlender (2010), han abordado el análisis del movimiento social y su espacialidad y proponen este análisis desde una perspectiva donde la relación lugar - acción social - identidad está vinculada con las formas propias que toman los movimientos sociales, es decir

que proponen como punto de partida conocer el lugar, las precondiciones geográficas, históricas y culturales que permiten la emergencia de un movimiento social que asumen formas particulares en lugares específicos.

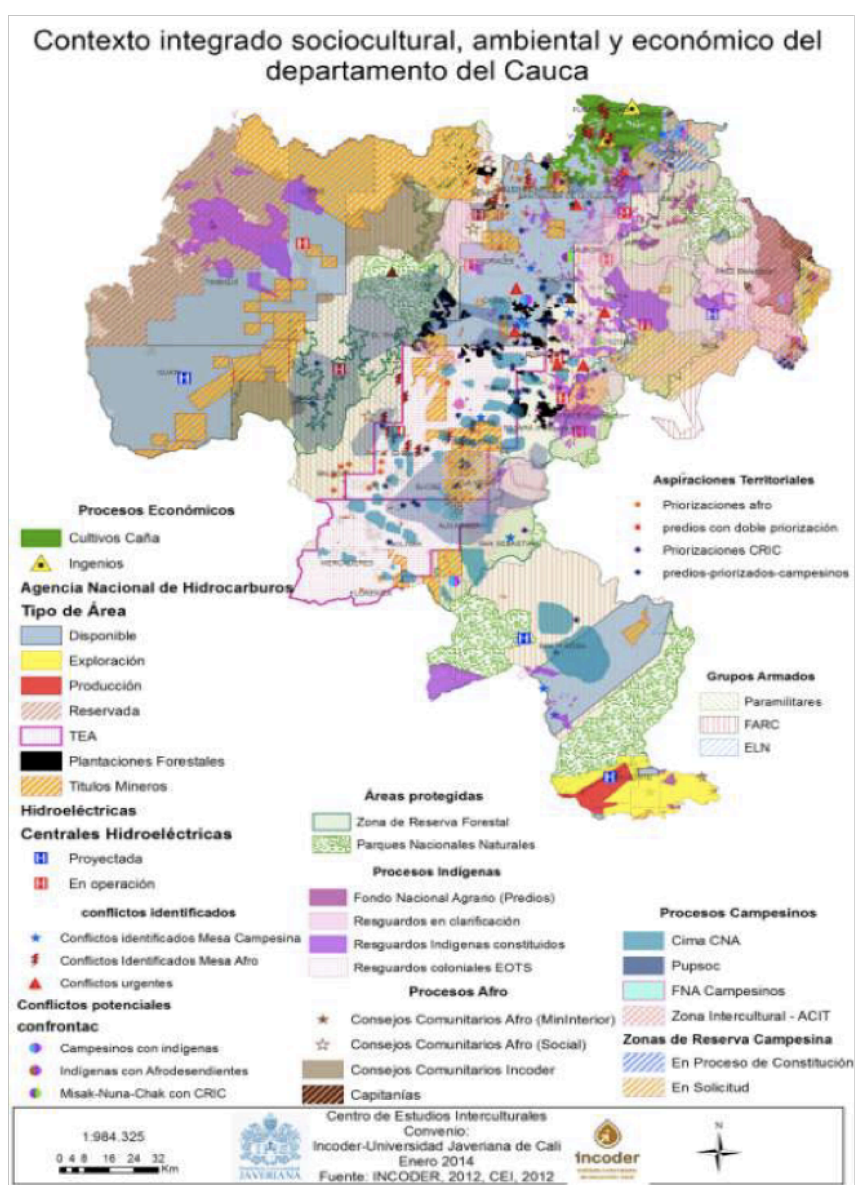
En este sentido, se observó que el CIMA plantea la cultura y la identidad como un eje transversal para la construcción de su región, lo que indica que conocer y ampliar la investigación sobre los elementos culturales e identitarios en relación al lugar y la configuración de un movimiento socioterritorial, permitirían comprender elementos históricos y de larga duración sobre las precondiciones que existieron para que surgiera este tipo de movimiento social en el Macizo colombiano, que seguramente está ligada a la composición étnica, biofísica, cultural, política de esta región.

La importancia del análisis de la configuración de estos sujetos pasa por comprender que son actores que desafían las estructuras de modelo de desarrollo plateando por el Estado y el Capital. En esta misma línea los estudios mencionados sobre la relación del territorio y las luchas sociales o movimiento socioterritoriales coinciden en un elemento central y es la relación que entablan estos sujetos frente al Estado y el Capital, donde la relación que se teje a primera vista es una disputa o conflicto de visiones e interés sobre el espacio físico y sus componentes, y por ende entra en conflicto con los territorios y formas de vida creadas por las comunidades en este caso organizadas, configurando escenarios territoriales a los que John Agnew y Ulrich Oslender (2010) denominan territorialidades superpuesta.

En estos términos para el caso de CIMA y el contexto que rodea la dinámica del mismo en relación al territorio y las tensiones y relaciones que se tejen entre actores, se puede evidenciar un escenario de sobreposiciones de intereses y actores que desarrollan acciones de apropiación

para ejercer control sobre el territorio. El Mapa 10 muestra el Contexto integrado sociocultural, ambiental y económico del departamento del Cauca. En el que se pueden identificar los actores y proyectos que representan al capital expresados en los grandes proyectos productivos y de explotación minera y energética en la región, que coinciden en su gran mayoría con áreas de conservación y de gran importancia ambiental, configurando un primer escenario contradictorio y difícilmente reconciliable entre la relación naturaleza y capital.

## Mapa 10. Contexto Integrado de sociocultural, ambiental y económico del departamento del Cauca



Contexto Integrado de sociocultural, ambiental y económico del departamento del Cauca. Tomado de: Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca. 2013

En el análisis de las acciones que despliegan el Estado, el Capital y el CIMA en los territorios del Macizo, se evidencia que no tejen solamente relaciones de disputa o de tensión, sino relaciones que a primera vista aparecen como de coexistencia, es el caso de la participación del CIMA en los mencionados Laboratorios de Paz.

Por otro lado como se presentó en el desarrollo de los capítulos que componen este documento, el Macizo y en especial la parte del sur occidente colombiano ha configurado un gran acumulado de lucha social que se expresa desde las diferentes composiciones étnicas y culturales, se identifican 12 procesos organizativos presentes en el Cauca entre Indígenas, Campesinos y Afros, que tienen una gran incidencia a lo largo y ancho del departamento, que como se expresa en el mapa<sup>10</sup>, tienen aspiraciones territoriales y objetivos particulares, que responden a sus lógicas culturales y políticas. En ese contexto los conflictos existentes y potenciales son de diversa índole y de gran complejidad que deja sobre la realidad un panorama de desafíos amplios para las comunidades organizadas en el territorio, que sin duda, de no haber promovido y ejercido una estrategia de apropiación y defensa de sus territorios este mapa estaría solamente compuesto por los avances del capital y sus proyectos.

## CONCLUSIONES

En relación con el análisis de los avances y tensiones existentes en el proceso social de organización y construcción de región propuesto por el Comité de Integración del Macizo colombiano CIMA desde los 80's hasta el 2011, surgen las siguientes conclusiones:

1. Una vez identificados y caracterizados los actores y contextos existentes en la zona de estudio, se establecieron los avances o tensiones en el proceso de construcción de región, dando cuenta de las acciones planteadas a través de los diferentes períodos de tiempo por parte del estado y capital y su “modus operandi” nacional y regional, a partir de allí, se evidencia que las transiciones y cambios en la política pública han estado orientadas a favorecer los intereses del capital, teniendo como principal estrategia de apropiación del territorio. el uso de la fuerza, abriendo paso a la entrada de empresas multinacionales para la explotación de recursos mineros y energéticos en un contexto de agudización del conflicto social y armado en la región, acudiendo paralelamente a políticas sociales de orden nacional e internacional, que dejan como resultado tensiones, relaciones contradictorias y desafíos de diferentes naturaleza.

Uno de los primeros conflictos lo plantea la naturaleza y todo el componente biofísico del Macizo Colombiano, con el modelo de desarrollo capitalista y su estrategia de acumulación a partir de los recursos naturales, donde básicamente la vocación y el uso del suelo no están siendo compatibles, cuando esta región tiene un carácter predominantemente de conservación y ha sido declarada como reserva de la biosfera. Sin embargo no se puede hablar de una afectación total del componente natural de esta región y si por el contrario de la resistencia a la transformación de los tejidos ecológicos, sociales y culturales que aumentan y se expresan en acciones alternativas de producción y formas de vida armónicas con el ambiente como es el caso que se

presenta de la Asociación de familias y mujeres campesinas en San Pablo, Nariño, acerca de la producción y sistemas agroecológicos campesinos basados en la organización social y así muchas de las organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes que han configurado una dinámica regional organizativa con propuestas alternas de economías propias y solidarias que se armonicen con la naturaleza. De aquí se desprenden el complejo sistema de relaciones, tensiones, disputas que compone la dinámica social, económica y política en la región.

En este sentido, es claro que paralelamente a la estrategia de apropiación de Estado y el Capital en el territorio, se evidencia cómo se configuran formas de resistencia y construcciones de proyectos políticos orientados y basados en la relación de las comunidades con el entorno. El caso del CIMA y su proyecto de construcción social de región es muestra de ello, el cual se puede concluir para esta investigación, está compuesto por dos elementos fundamentales intrínsecamente ligados que difícilmente se pueden diferenciar.

El primero hace referencia a la comprensión de la región como una categoría de referencia para la organización social y política del movimiento CIMA, en donde construir socialmente la región significa que las comunidades que habitan el territorio del Macizo se empoderen de sus proyectos de vida comunitarios y encuentren en las formas organizativas un mecanismo de transformación, sin embargo, este proceso tiene una dinámica heterogénea que hace que este proyecto de región se convierta en la orientación que guía pero a la vez se componga de las relaciones que entablan las comunidades desde lo organizativo y lo colectivo. Como se evidenció en el segundo capítulo el proceso de configuración del CIMA como un movimiento social ha pasado por diferentes episodios de movilización y definición de su accionar político redefiniendo su naturaleza a la par con las dinámicas y desafíos que le plantea la estrategia del estado y el capital en la región.

Esta capacidad de redefinición y sostenibilidad ó específicamente el proyecto de región se sustenta en la suma y articulación de cada forma organizativa existente en las diferentes escalas geográficas a lo largo de la región del Macizo, específicamente el Sur del Cauca y Norte de Nariño vinculadas al CIMA: familias, mujeres, hombres, jóvenes en su gran mayoría campesinos que desde su cultura e identidad construyen sus propuestas de vida digna en cada uno de sus territorios. Basados en el conocimiento sobre si mismos, su arraigo y su sentido de pertenencia. Así cada organización, cada proyecto colectivo, plan de vida, gestiones, escenarios de formación, cultural, político, económico que sea liderado por las comunidades campesinas orientadas a la defensa y construcción territorios son apropiados, controlados y autónomos por parte de la comunidad, es lo que se comprende como construcción de territorios desde la organización social, siendo este el segundo elemento que compone la construcción social de región.

Se configura desde estos dos elementos la relación Territorio - Región entendido en su completitud como el proceso de construcción social de la región en donde a partir de la configuración de los territorios por parte de las comunidades organizadas se configuran relaciones sociales diferentes basadas en la apropiación, el uso y conocimiento propio que tienen las comunidades campesinas que hacen parte del CIMA, en donde este proyecto de región se concreta en cada uno de los territorios que las comunidades viene reconstruyendo desde la organización social.

Ahora bien, en cuanto a la relación entre movimiento social, territorio y región, y a luz de los aspectos considerados en el análisis teórico de esta investigación, se puede identificar un elemento común. Desde el abordaje de los aportes sobre los movimientos socioterritoriales en palabras de Mancano ( 2010) ó basados en “lugar” de acuerdo con Escobar (2010), se pone de



manifiesto que la relevancia de este tipo de procesos se fundamenta en el hecho de poner como fuerza principal la relación entre comunidades y entornos o naturaleza desde un proyecto político colectivo basados en la cultura y la identidad, para configurarse como un sujeto político que tiene capacidad de disputarse sus espacios de vida y la capacidad de contener las transformaciones que puedan generar las acciones del Capital. El análisis desde los conceptos de territorio y región permitió además de comprender los procesos sociales que se desarrollan en la construcción social de región, abordar metodológicamente esta investigación en su etapa de análisis, ubicando al territorio como los procesos que se dan a escalas geográficas tangibles tales como lo veredal y municipal, y el de Región como la composición e interacciones de todos los territorios organizados en el Macizo Bajo el marco del proyecto político del CIMA.

La oportunidad de trabajar con una de las organizaciones campesinas vinculadas al CIMA como es la Asociación de mujeres y familias campesinas san pableñas, permitió comprender la estructura interna organizativa del CIMA y la importancia que tienen estas escalas organizativas, reconociendo eso que denominamos producción de territorios y territorialidades, que se expresan en las acciones sobre los usos y manejos de los recursos y entornos que las comunidades deciden implementar en sus espacios vitales a partir su conocimiento, como sus fincas y veredas desde una visión colectiva y concertada. Aquí es donde aparece la fuerza que sostiene un proyecto político de escala regional que involucra a las comunidades y está diseñado de abajo hacia arriba. En estos escenarios reales que trascienden el discurso de líderes del movimiento o de un documento acerca del CIMA, es donde se puede interactuar y comprender la complejidad de lo que compone la dinámica de comunidades que han decidido integrarse y articularse para transformar realidades que las amenaza.

Si bien esta investigación deja expuestos algunos elementos que componen la construcción social de región desde el CIMA y sus tensiones con el estado y el capital, el alcance de la misma no permitió abordar otras cuestiones importantes que rodean el objetivo de la misma y otras que han surgido a partir de los resultados, logrados y el análisis teórico abordado.

Por esto, se plantean algunas de las perspectivas de continuidad de la investigación y/u otras investigaciones. La continuidad y análisis del caso concreto del CIMA después del 2011 es la primera puerta que se abre para identificar el avance en relación al proceso de sus territorios y territorialidades, apuestas y propuestas, al reconocimiento de los derechos campesinos en el marco del reconocimiento del campesinado como sujeto político.

Si bien para el periodo de estudio de esta investigación 1990-2011 se identifica en el caso del CIMA que la base de su propuesta de región esta ligada al territorio aun no se identifica de manera explicita una propuesta del tipo de territorio que buscarían que fuera reconocido, es decir, una figura jurídica territorial como el resguardo o los consejos comunitarios, a partir de los territorios colectivos. Ni siquiera se manifiesta la exigencia especifica por la creación de Zonas de Reserva Campesina en el área de incidencia del CIMA, figura contemplada en la ley 160 /94. Esto indica que las luchas y logros alcanzados en estas dos décadas, son los insumos para configurar una propuesta que represente su proyecto o identidad de territorios campesinos.

Por otro lado se considera importante tanto por parte del CIMA como de la investigación social contribuir y profundizar en el análisis de la región como figura autónoma territorial que podría contribuir al reconocimiento de las autonomías territoriales, teniendo en cuenta que para el 2011 se declaro la Ley orgánica de ordenamiento territorial 1454 y que existe una Comisión de

Ordenamiento Territorial. En este sentido, sería muy útil para fortalecer el marco legal del ordenamiento territorial, conocer las propuestas y experiencias comunitarias de ordenamiento territorial que vienen desarrollando diversas comunidades campesinas, indígenas y afros.

## BIBLIOGRAFIA

- Alonso Valencia Llano. Historia del Gran Cauca, Historia regional del suroccidente colombiano. Instituto de Estudios del Pacífico. 1996.
- Arturo Escobar. Territorios de Diferencia Lugar, Movimientos, Vida, Redes. Enviñón Editores 2010.
- Beatriz., Nates Cruz De lo bravo a lo manso: territorio y sociedad en los Andes (Macizo Colombiano).
- Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 2014. Atlas del Impacto Regional del Conflicto Armado en Colombia Volumen I. Dinámicas locales y regionales del conflicto armado interno entre 1990-2013.cs
- Edgar Alberto. Novoa Torres, Luchas cívicas, trayectorias geopolíticas en Colombia: movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, Movimiento Popular Los Inconformes y Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina UNIJUS, Bogotá 2009.
- Ernesto Guhl, Orlando Fals-Borda. La Insurgencia de las provincias: hacia un nuevo ordenamiento territorial para Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 1988.
- Francisco Garrido Peña, Introducción a la ecología política. Granada, España, Editorial Comares, (1993)

- Graciela Ottmann,, Agroecología y sociología histórica desde Latinoam.rica, PNUMA / Mundi-Prensa / Universidad de Córdoba, México / Madrid /Córdoba.(2005)
- Horacio A Sormani,. Formación social y formación espacial: hacia una dialéctica de los asentamientos humanos. En: Estudios Sociales centroamericanos. Año VI. No. 17, mayo-agosto 1977
- Informe Especial CINEP/ Programa por la Paz. Luchas sociales en Colombia 2013. Abril de 2013.
- Jhon Jairo Muños, Javier Mosquera Obando. Trayectoria de los Movimientos Sociales en Nariño período 19994-2000.Tesis de Grado. Universidad De Nariño. Departamento de Sociología. junio2001.Pasto.
- José Antonio, Girón Sierra, Observatorio de Derechos humanos, Instituto Popular de Capacitación, Territorialidad, poder, conflicto y paz, 2015.
- Juan Houghton De la autonomía indígena a la Minga y el Congreso de los Pueblos.. Enero 25 Revista Pueblos. 2011.
- Joan Martínez Alier,. El Ecologismo de los pobres. Barcelona, España. Editorial Icaria, (2009).
- Karl Polanyi, La Gran Transformación . Critica al Capitalismo. Traducción: Julia Varela y Fernadez Alvarez. Ediciones de La Piqueta © Ediciones Endymion C/ Cruz Verde, 22 28004 Madrid ISBN: 84-7731-047-5 Depósito legal: M-38870-1989
- León Zamosc, Revista Mexicana de Sociología.Vol. 52, No. 2 (Apr. - Jun., 1990), pp. 125-180. Publicado por: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Lobato Correa; Revista Territorio 1(1) publicado por: Os centro de Gestao de Territorio. 1996

- Luz Angela Herrera. Región, Desarrollo y Acción Colectiva. Movimiento de integración del Macizo colombiano. CINEP 2003.
- Marta Herrera Ángel. Ordenar para Controlar. Ordenamiento espacial y control político en las Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Academia Colombiana de Historia, 2002
- Marta Herrera Ángel, Popayán: La unidad de lo diverso. Territorio, población y poblamiento en la provincia de Popayán, siglo XVIII. Bogotá: Uniandes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, CESO, Ediciones Uniandes, 2009.
- Mauricio Archila y Mauricio Pardo. Movimientos Sociales, Estado y Democracia en Colombia. Ed Universidad Nacional de Colombia. 2001.
- Mauricio Archila Neira. Idas y Venidas. Vueltas y Revueltas. Protestas Sociales en Colombia 1958-1990. ICANH- CINEP. Bogotá 2005.
- Milton, Santos, Metamorfosis del espacio habitado. Editorial Oikos-tau, Barcelona 1996.
- Oslender Ulrich. Espacio, Lugar y movimientos Sociales: Hacia una Espacialidad de Resistencia. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol. VI, núm. 115, 1 de junio de 2002.
- Oslender Ulrich , John Agnew. Territorialidades superpuestas, soberanía en disputa: lecciones empíricas desde América Latina. Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.13: 191-213, julio-diciembre 2010
- Primer encuentro nacional de Zonas de Reserva Campesina 29, 30 y 31 de agosto, Barrancabermeja, Magdalena Medio. 2010. Agencia Prensa Rural. 2010.
- PLAN DE DESARROLLO REGIONAL DE LAS CULTURAS DEL MACIZO Y SUROCCIDENTE COLOMBIANO. Comunidades Movilizadas. 2000.

- Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (2003). Políticas agrarias para Colombia. Bogotá D.C., Colombia: ILSA
- Renan Silva. Territorios, Regiones, Sociedades. CEREC.1994
- Raúl Zibechi, Cátedra: Territorios del Saber, Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo. Universidad del Cauca. Colombia. Popayán, Colombia, 2013
- Raul Zibechi, America Latina:Contrainsurgencia y pobreza .Ediciones, desde abajo. Bogotá, Colombia, 2010.
- Sergio Boisier. Palimpsesto de las regiones como espacios socialmente contruidos. Territorio y Cultura. Territorios de Conflicto y Cambio sociocultural. grupo de investigación territorialidades. 1988
- Recursos Hídrico Macizo Colombiano. IDEAM.1999. En: [http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=414&catID=321#\\_ftnref2](http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=414&catID=321#_ftnref2)
- Gustavo Montañez,. Delgado Ovidio Espacio, Territorio, y Región : Conceptos básicos para un proyecto nacional. 1988. Obtenido de : [http://acoge2000.homestead.com/files/Montanez\\_y\\_Delgado.\\_1998.pdf](http://acoge2000.homestead.com/files/Montanez_y_Delgado._1998.pdf)
- Alfredo Molano Bravo. El trasfondo del conflicto en el Cauca. El Macizo Colombiano. Viaje a la mayor fuente hídrica del país, amenazada por la guerra y por los intereses de multinacionales mineras. El Espectador. 2011. Obtenido en: <http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/el-macizo-colombiano-articulo-286548>
- Recursos Hídrico Macizo Colombiano. IDEAM.1999.en: [http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=414&catID=321#\\_ftnref2](http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=414&catID=321#_ftnref2)
- Alberto Maldonado Copello. Descentralización: la repartición de competencias sigue en el limbo. Razón Pública 2012. <http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/3111-descentralizacion-la-reparticion-de-competencias-sigue-en-el-limbo.html>

- Zulma Zorayda Toro Muñoz Fuente: Pacarina del Sur - <http://www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/421-territorio-lugar-espacio-de-resistencia-y-lucha-de-los-movimientos-sociales> -
- Fernandes, Bernardo Mançano. (sf) Movimientos socioterritoriales y movimientos socioespaciales. Contribución teórica para una lectura geográfica de los movimientos sociales. <http://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-5.pdf>  
Fuente: Pacarina del Sur - <http://www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/421-territorio-lugar-espacio-de-resistencia-y-lucha-de-los-movimientos-sociales> -  
Prohibida su reproducción sin citar el origen.
- Reservas de biosfera: <http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves>
- El sitio del Cauca, 1999 Diciembre 13. Revista Semana. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-sitio-del-cauca/52368-3>
- Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un Estado Comunitario. Bogotá 2003. Obtenido en: <http://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND.pdf>
- Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para Todos. Bogotá 2010. Obtenido en: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-2014%20Tomo%20I%20CD.pdf>



